CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el martes, 30 de noviembre de 1999

ORDEN DEL DÍA:

Primero

- Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 16 y 17 de noviembre de 1999.

Segundo

- Elección para cubrir el cargo de Vicepresidente Primero de la Mesa (Número de expediente 520/00001).

Tercero

Mociones consecuencia de interpelación:

- Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales, antes de finalizar la presente Legislatura, el Plan Director de la Cooperación Internacional para el Desarrollo que contempla la Ley 23/1998, de 7 de julio, en su artículo octavo, así como los reglamentos dictaminados por el Consejo de Cooperación y que desarrollan dicha Ley (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 671/000087).
- Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se reconozca el derecho a percibir el complemento por residencia, en iguales condiciones, para el personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado, de la Administración Tributaria y de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears equiparando, al mismo tiempo, di-

cho complemento al de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ceuta y Melilla (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 671/000088).

Cuarto

Mociones:

- De los GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS Y MIXTO, por la que se insta al Gobierno para que, en la proximidad de la fecha que se señale para celebrar las elecciones generales, se lleve a cabo una campaña específica, institucional y explicativa sobre la forma de utilizar la papeleta oficial que en cada provincia se apruebe para elegir los Senadores (Número de expediente 662/000223).
- Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que respalde ante el Consejo de Europa la aspiración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a ser sede del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, y a que colabore en el posterior desarrollo y puesta en marcha del referido Instituto (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 662/000222).
- Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se declara que la consolidación de las expectativas de paz y valores democráticos requiere la renuncia y la condena de los ataques, sabotajes y demás fenómenos que constituyen la llamada violencia callejera como medio para conseguir reivindicaciones políticas, por la que se exige a los grupos y organizaciones que planean y realizan tales acciones el cese inmediato de las mismas, y por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas a este respecto (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 662/000221).
- Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ por la que se insta al Gobierno para que, a través del Consejo Interterritorial de Sanidad, analice las necesidades sociales, número y perfil profesional de médicos especialistas para los próximos diez años en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 788, de fecha 29 de noviembre de 1999) (Número de expediente 662/000218).

Quinto

Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

- Protocolo, hecho en Copenhague el 17 de marzo de 1999, por el que se modifica el Convenio entre España y Dinamarca para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Copenhague el 3 de julio de 1972 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 266, de fecha 7 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000266) (Número de expediente C. D. 110/000267).
- Habilitación de todos los días y horas del mes de diciembre de 1999 (Número de expediente 550/000032).

Tratados y Convenios Internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados (Continuación):

- Convenio celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, hecho en Bruselas el 28 de mayo de 1998, y Declaraciones que efectuará España al mismo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 271, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000271) (Número de expediente C. D. 110/000272).
- Protocolo celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en asuntos matrimoniales, hecho en Bruselas el 28 de mayo de 1998, y Declaraciones que efectuará España al mismo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 272, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000272) (Número de expediente C. D. 110/000273).

- Segundo Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 19 de junio de 1997, y Reserva que formulará España al mismo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 273, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000273) (Número de expediente C. D. 110/000274).
- Texto revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, hecho en Roma el 18 de noviembre de 1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 274, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000274) (Número de expediente C. D. 110/000275).
- Protocolo de enmienda a la Carta Social Europea, hecho en Turín el 21 de octubre de 1991 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 275, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000275) (Número de expediente C. D. 110/000276).
- Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 276, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000276) (Número de expediente C. D. 110/000277).
- Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Ciudad de México el 3 de diciembre de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 277, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000277) (Número de expediente C. D. 110/000278).
- Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y Declaración relativa a la adopción simultánea del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y del Protocolo relativo a la interpretación con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de dicho Convenio, hechos en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaraciones que efectuará España a aquél (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 278, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000278) (Número de expediente C. D. 110/000279).
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Sudáfrica, hecho en Pretoria el 30 de septiembre de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 279, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000279) (Número de expediente C. D. 110/000280).
- Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, firmado en Bruselas el 26 de mayo de 1997, así como Reserva y Declaración que España va a formular al mismo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 280, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000280) (Número de expediente C. D. 110/000281).
- Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y China sobre modificación del Convenio sobre transporte aéreo civil entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China, hecho en Pekín el 19 de junio de 1978 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 281, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000281) (Número de expediente C. D. 110/000282).
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Moldova sobre transporte internacional por carretera, hecho en Varsovia el 20 de mayo de 1999 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 282, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000282) (Número de expediente C. D. 110/000283).
- Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Eslovaca sobre la cooperación en materia de la lucha contra la delincuencia organizada, hecho en Bratislava el 3 de marzo de 1999 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 283, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000283) (Número de expediente C. D. 110/000285).
- Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 284, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000284) (Número de expediente C. D. 110/000286).

- **Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, hecho en París el 12 de enero de 1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 285, de fecha 27 de octubre de 1999) (Número de expediente S. 610/000285) (Número de expediente C. D. 110/000287).**
- **Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Moscú el 17 de mayo de 1999 y Notas Verbales de fecha 13 y 27 de julio de 1999 mediante las que España y la Federación de Rusia han procedido a subsanar un error observado en la versión española del artículo 2.3 del citado Convenio (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 286, de fecha 10 de noviembre de 1999) (Número de expediente S. 610/000286) (Número de expediente C. D. 110/000284).**

Sexto

Toma en consideración de Propositiones de Ley del Senado:

- **Proposición de Ley para la asistencia y amparo de los españoles privados de libertad en el extranjero (Autor: Grupo Parlamentario Socialista) (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 15, de fecha 26 de febrero de 1999) (Número de expediente 622/000015).**
- **Proposición de Ley de modificación del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (Autor: Grupo Parlamentario Mixto) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 18, de fecha 28 de octubre de 1999) (Número de expediente 622/000018).**

SUMARIO

Se abre la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos.

	Página
Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 16 y 17 de noviembre de 1999	7100

Se aprueban las actas.

	Página
ELECCIÓN PARA CUBRIR EL CARGO DE VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA MESA	7100

Queda designado Vicepresidente Primero de la Mesa el Excelentísimo señor Senador don Jaume Cardona i Vila.

	Página
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN	7101

	Página
Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales, antes de finalizar la presente Legislatura, el Plan Director de la Cooperación Internacional	

	Página
para el Desarrollo que contempla la Ley 23/1998, de 7 de julio, en su artículo octavo, así como los reglamentos dictaminados por el Consejo de Cooperación y que desarrollan dicha Ley.	7101

La señora Martín i Vigil defiende la moción. No se hace uso del turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vacos; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió, y Bellido Muñoz, por el Grupo Popular.

Se aprueba la moción del Grupo Socialista por asentimiento de la Cámara .

	Página
Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se reconozca el derecho a percibir el complemento por residencia, en iguales condiciones, para el personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado, de la Administración Tributaria y de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears equiparando, al mismo tiempo, dicho complemento al de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ceuta y Melilla	7104

El señor Cámara Fernández defiende la moción y comunica a la Cámara que se ha presentado una propuesta de modificación, firmada por todos los Grupos Parlamentarios. El señor Sanz Pérez defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Socías Puig defiende la enmienda del Grupo Socialista. El señor Cámara Fernández expone la posición de su grupo parlamentario respecto de ambas enmiendas. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió, y Socías Puig, por el Grupo Socialista.

Se aprueba la moción del Grupo Mixto en los términos de la propuesta firmada por todos los Grupos Parlamentarios.

MOCIONES Página
7108

De los GRUPO PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS y MIXTO por la que se insta al Gobierno para que, en la proximidad de la fecha que se señale para celebrar las elecciones generales, se lleve a cabo una campaña específica, institucional y explicativa sobre la forma de utilizar la papeleta oficial que en cada provincia se apruebe para elegir los Senadores Página
7108

En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ruiz Rivero, por el Grupo Popular; Arévalo Santiago, por el Grupo Socialista; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió; Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vacos, y Román Clemente, por el Grupo Mixto.

Se aprueba la moción de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vacos y Mixto, por asentimiento de la Cámara.

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que respalde ante el Consejo de Europa la aspiración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a ser sede del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, y a que colabore en el posterior desarrollo y puesta en marcha del referido Instituto Página
7109

El señor Sepúlveda Recio defiende la moción. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ro-

mán Clemente, por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vacos; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Gallego López, por el Grupo Socialista, y Sepúlveda Recio, por el Grupo Popular.

Se aprueba la moción del Grupo Popular por asentimiento de la Cámara.

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se declara que la consolidación de las expectativas de paz y valores democráticos requiere la renuncia y la condena de los ataques, sabotajes y demás fenómenos que constituyen la llamada violencia callejera como medio para conseguir reivindicaciones políticas, por la que se exige a los grupos y organizaciones que planean y realizan tales acciones el cese inmediato de las mismas, y por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas a este respecto Página
7114

La señora Presidenta anuncia la presentación de una enmienda firmada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència y Unió, de Senadores Nacionalistas Vacos y Mixto, cuyo texto sustituye a la moción original. El señor Rojo García defiende el nuevo texto de la moción. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vacos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió, y Escobar de las Heras, por el Grupo Popular.

Se aprueba la moción, en los términos del texto firmado por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.

Del GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ por la que se insta al Gobierno para que, a través del Consejo Interterritorial de Sanidad, analice las necesidades sociales, número y perfil profesional de médicos especialistas para los próximos diez años en España Página
7119

El señor Cardona i Vila defiende la moción. La señora López Garnica defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Cardona i Vila expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vacos; Cardona i Vila, por el Grupo Ca-

talán en el Senado de Convergència y Unió, y Arjona Santana, por el Grupo Socialista, así como la señora López Garnica, por el Grupo Popular.

Se aprueba la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió, con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Página
7125

Protocolo, hecho en Copenhague el 17 de marzo de 1999, por el que se modifica el Convenio entre España y Dinamarca para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Copenhague el 3 de julio de 1972 Página
7125

En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió; González Laxe, por el Grupo Socialista, y Morales Montero, por el Grupo Popular.

Se aprueba el protocolo por 122 votos a favor, 1 en contra y 93 abstenciones y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

HABILITACIÓN DE TODO LOS DÍAS Y HORAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999 Página
7126

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) Página
7126

Convenio celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, hecho en Bruselas el 28 de mayo de 1998, y Declaraciones que efectuará España al mismo Página
7126

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Protocolo celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en asuntos matrimoniales, hecho en Bruselas el 28 de mayo de 1998, y Declaraciones que efectuará España al mismo 7127

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Segundo Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 19 de junio de 1997, y Reserva que formulará España al mismo 7127

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Texto revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, hecho en Roma el 18 de noviembre de 1997 7127

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Protocolo de enmienda a la Carta Social Europea, hecho en Turín el 21 de octubre de 1991 7127

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996 7127

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza

<i>al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>		<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>	
	Página		Página
Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Ciudad de México el 3 de diciembre de 1998	7128	Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y China sobre modificación del Convenio sobre transporte aéreo civil entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China, hecho en Pekín el 19 de junio de 1978	7129
<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>		<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>	
	Página		Página
Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y Declaración relativa a la adopción simultánea del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y del Protocolo relativo a la interpretación con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de dicho Convenio, hechos en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaraciones que efectuará España a aquél	7128	Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Moldova sobre transporte internacional por carretera, hecho en Varsovia el 20 de mayo de 1999	7129
<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>		<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>	
	Página		Página
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Sudáfrica, hecho en Pretoria el 30 de septiembre de 1998	7128	Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Eslovaca sobre la cooperación en materia de la lucha contra la delincuencia organizada, hecho en Bratislava el 3 de marzo de 1999	7129
<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>		<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>	
	Página		Página
Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, firmado en Bruselas el 26 de mayo de 1997, así como Reserva y Declaración que España va a formular al mismo	7128	Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1998	7129
<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>		<i>No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.</i>	
	Página		Página
		Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, por el que se prohíbe la clonación de seres humanos, hecho en París el 12 de enero de 1998	7129

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Moscú el 17 de mayo de 1999 y Notas Verbales de fecha 13 y 27 de julio de 1999 mediante las que España y la Federación de Rusia han procedido a subsanar un error observado en la versión española del artículo 2.3 del citado Convenio

7129

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.

Página

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO

7129

Página

Proposición de Ley para la asistencia y amparo de los españoles privados de libertad en el extranjero (Autor: Grupo Parlamentario Socialista)

7130

El señor Díez González defiende la toma en consideración. La señora Vindel López consume un turno en contra. El señor Díez González consume un turno a favor.

La señora Vindel López interviene de nuevo en virtud del artículo 87. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Caballero Lasquibar, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vacos; Carrera i Comes, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió, y Díez González, por el Grupo Socialista, así como la señora Vindel López, por el Grupo Popular.

Se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista por 94 votos a favor, 115 en contra y 8 abstenciones.

Página

Proposición de Ley de modificación del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (Autor: Grupo Parlamentario Mixto)

7137

El señor Cámara Fernández defiende la toma en consideración. El señor Utrera Mora consume un turno en

contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència y Unió; Serrano Álvarez-Giraldo, por el Grupo Socialista, y Utrera Mora, por el Grupo Popular. El señor Cámara Fernández interviene de nuevo en virtud del artículo 87.

Se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto por 11 votos a favor, 114 en contra y 76 abstenciones.

Se levanta la sesión a las veintidós horas.

Se abre la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

— LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 1999.

La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 16 y 17 de noviembre de 1999.

¿Hay alguna observación sobre las actas? (Pausa.)
¿Se pueden dar por aprobadas por asentimiento? (Pausa.)
Se aprueban.

— ELECCIÓN PARA CUBRIR EL CARGO DE VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA MESA (520/00001).

La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día: Elección para cubrir el cargo de Vicepresidente Primero de la Mesa.

Como, consecuencia de la renuncia del excelentísimo señor Senador don Joan Rigol i Roig, está vacante el cargo de Vicepresidente Primero de la Mesa de la Cámara. Para cubrir dicha vacante, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular han presentado la candidatura del excelentísimo señor don Jaume Cardona i Vila. El artículo 6.º del Reglamento prevé que la votación para la elección de este cargo se realice por papeletas.

En forma previa se ha sorteado el nombre del Senador por el que ha de empezar la votación. En este caso, la votación comenzará por la Senadora doña María Isabel Flores Fernández.

Quiero recordar a sus señorías que en las papeletas se escribirá un solo nombre.

Ruego a los señores secretarios que procedan a llamar a los senadores para votar.

Por la señora Secretaria Primera (Rodríguez Saldaña), por el señor Secretario Segundo (Ríos Pérez), por el señor Secretario Tercero (Galán Pérez), y por la señora Secretaria Cuarta (Gorostiaga Sáiz) se procede al llamamiento de las señoras y los señores Senadores a partir de la citada. Finalizado el llamamiento, dijo:

La señora PRESIDENTA: Por favor, abran las puertas por si hay algún Senador que todavía no haya ejercido su derecho al voto. *(Pausa.)*

Vamos a proceder al escrutinio. *(Pausa.)*

Terminado el escrutinio, dijo:

La señora PRESIDENTA: Señores Secretarios, ¿cuál es el resultado de la votación? *(Pausa.)*

Efectuado el escrutinio, el resultado es el siguiente: Votos emitidos, 211; a favor de la candidatura del excelentísimo señor don Jaume Cardona i Vila, 127; votos en blanco, 82; votos, nulos, dos.

En consecuencia, ha sido elegido Vicepresidente Primero del Senado el excelentísimo, señor don Jaume Cardona i Vila, a quien ruego que pase a ocupar su lugar en la Mesa. *(Aplausos.)*

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN:

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR A LAS CORTES GENERALES, ANTES DE FINALIZAR LA PRESENTE LEGISLATURA, EL PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO QUE CONTEMPLA LA LEY 23/1998, DE 7 DE JULIO, EN SU ARTÍCULO OCTAVO, ASÍ COMO LOS REGLAMENTOS DICTAMINADOS POR EL CONSEJO DE COOPERACIÓN Y QUE DESARROLLAN DICHA LEY (671/000087).

La señora PRESIDENTA: Punto tercero del orden del día: Mociones consecuencia de interpelación. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales, antes de finalizar la presente Legislatura, el Plan Director de la Cooperación Internacional para el Desarrollo que contempla la Ley 23/1998, de 7 de julio, en su artículo octavo, así como los reglamentos dictaminados por el Consejo de Cooperación y que desarrollan dicha Ley.

Para el turno a favor, tiene la palabra la Senadora Martín i Vigil.

La señora MARTÍN I VIGIL: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, previamente a la defensa de la moción consecuencia de interpelación, y dado que soy la primera per-

sona que interviene esta tarde en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero aprovechar para mostrar nuestra felicitación, al recién elegido Vicepresidente Primero de la Cámara, el Senador Cardona i Vila, y desearle toda suerte de aciertos en su tarea, que redundarán en beneficio de los trabajos de toda la Cámara.

El motivo de mi presencia en esta tribuna es la defensa de la moción consecuencia de la interpelación que el Grupo Parlamentario Socialista presentó hace quince días, es decir, el 17 del presente mes, en esta misma Cámara, interpelación referida a la situación que al día de hoy padece la ayuda española a la cooperación, concretamente, la ayuda española oficial destinada a contrarrestar los efectos del huracán Mitch en Centroamérica. En la interpelación que realizamos en aquella fecha hicimos un repaso y expusimos unas reflexiones sobre lo que, a nuestro juicio, es la deficiente situación del grado de ejecución de las ayudas comprometidas en la zona de Centroamérica después del desastre que supuso el Mitch, hace ya más de un año.

Entonces, preguntábamos al Gobierno qué había sucedido, por qué se había ejecutado una parte tan pequeña de la ayuda comprometida, por qué la cuantía de la ayuda había sido diferente a la que aparecía en un primer momento y también por qué había preferido unos instrumentos más que otros de los que se pueden arbitrar en aplicación de la Ley, aprobada hace ya un año y medio, aunque es cierto que dicha Ley se encuentra aún hoy sin desarrollar. Preguntábamos al Gobierno por esa cuestión y, en parte, lógicamente, discrepábamos en la valoración sobre el grado de cumplimiento de la ejecución de esas ayudas.

En cualquier caso, interesa hoy más a nuestro Grupo afirmar aquellos aspectos que creemos compartir en el contexto de la ayuda oficial a la cooperación para el desarrollo, es decir, en la coincidencia sobre la necesidad de estructuración del marco legal que permita subsanar las carencias que hoy en día todavía padecemos en cuanto a que el sistema oficial de ayudas tiene necesidad de regulación, motivo por el cual, se elaboró hace un año la Ley de cooperación, que también fue ampliamente consensuada, ya que fue casi unánimemente aprobada en ambas Cámaras; una Ley en cuya elaboración participaron con gran esfuerzo y trabajo no solamente los partidos políticos y los grupos parlamentarios, sino también la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y algunos otros sectores.

En definitiva, de la respuesta del Gobierno, pero también de otras expresiones que se produjeron en la Cámara, más concretamente, de la que se produjo por parte del Senador Varela, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, entendimos que una parte de la responsabilidad acerca del grado de incumplimiento de las ayudas referentes al Mitch venía determinada por la falta de desarrollo de la Ley, así como del resto de instrumentos del Plan Director que señala la Ley y que ésta compromete para su desarrollo.

En ese sentido, el Gobierno, respondió poco. Es verdad que en aquella ocasión, hace quince días, el Vicepresidente Primero del Gobierno tuvo a bien pormenorizar las ayudas de los distintos Ministerios más que explicar y compromete-

ter el desarrollo de la Ley; es verdad que se refirió a la buena marcha de los cinco Reglamentos pendientes de aprobación por el Consejo de Ministros; es verdad que no entró en el incumplimiento de la aprobación del Plan Director, pero, en cualquier caso, nuestro Grupo, después de escuchar la intervención del Vicepresidente Primero del Gobierno entendió y entiende que hay interés en que eso ocurra, lo que pasa es que quizá la confrontación evidente entre distintos Ministerios y quizá una escasa voluntad política por agilizar —o dar cumplimiento, porque, a estas alturas, ya no se trataría de agilizar— esta cuestión, nos ha llevado, un año y medio después de la aprobación de la Ley, a presentar una iniciativa que pretende impulsar aquello que nos comprometidos a desarrollar en su momento para dar cumplimiento a una Ley —insisto— ampliamente consensuada.

Sus señorías saben con toda seguridad que el Plan Director es el que orientará la planificación de las ayudas, no sólo en el tiempo, sino también en las cuantías de los recursos, que habrá que dotar presupuestariamente, así como su distribución y los incrementos, que concretarán los diferentes planes anuales en los que también debe desarrollarse el Plan cuatrienal.

Sus señorías también saben que dicho Plan ya fue dictaminado en el mes de julio por el órgano pertinente, es decir, por el Consejo de Cooperación. Hay que decir también que éste está formado por entidades, asociaciones e instituciones, que trabajan y son responsables de ello y que quieren seguir siéndolo, pero ha sido abandonado por sectores importantes que lo integran. Hace más de un mes, más de 90 organizaciones no gubernamentales abandonaron dicho Consejo, justamente por el incumplimiento del Gobierno en la aprobación del Plan Director y hace unos pocos días los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, lo abandonan por la misma razón.

La señora PRESIDENTA: Senadora Martín i Vigil, le ruego que concluya.

La señora MARTÍN I VIGIL: Termino, señora Presidenta.

En consecuencia, la preocupación, la sensibilidad y la responsabilidad en esta cuestión sobrepasa la de los grupos parlamentarios. Es decir, la sociedad, las entidades y otras instituciones, están también preocupadas y que el deseo de los grupos parlamentarios de que se desarrolle la Ley de cooperación para cumplir mejor algo tan importante es compartido. Por tanto, creo que podemos entender que esta Cámara también colaborará en ese impulso, aprobando esta moción para que el Gobierno tenga a bien, antes de que finalice esta legislatura, presentar el Plan Director y los reglamentos ya dictaminados que desarrollarán la Ley.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Martín i Vigil.

¿En turno en contra algún Senador o Senadora quiere hacer uso de la palabra? (*Pausa.*)

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.

El señor ALBISTUR MARÍN: Muchas gracias, señora Presidenta.

Anuncio, que nuestro Grupo va a votar a favor de esta moción, fundamentalmente porque durante el debate del anteproyecto de ley, que posteriormente se convirtió en Ley, mantenido en la preparación de las enmiendas y en las discusiones mantenidas con los órganos correspondientes del Gobierno, fue uno de los puntos en los que más insistió, precisamente porque en los, proyectos presentados anteriormente —el último en 1995—, en torno a una necesaria ley de cooperación, no incluían ninguna planificación en materia de política de cooperación internacional que no solamente hablara de las prioridades y de los objetivos de tal política, sino que, además, diera cuenta de la coordinación a tener con lo que se llama la cooperación descentralizada, realizada por las Comunidades Autónomas y muchos municipios del Estado y, además, la realizada e impulsada desde las organizaciones no gubernamentales.

Se ha planteado siempre la diferenciación de dos tipos de planes, que el artículo 15 de la Ley también recoge que deben ser presentados en el Congreso de los Diputados, de forma inmediata a la aprobación de la Ley, cosa que se hizo hace ya algo más de 15 meses.

Esto no se ha cumplido. Tampoco hemos tenido ningún plan anual. A la altura de la legislatura en la que nos encontramos —habría que decir prácticamente bajura de la legislatura—, la propuesta que hoy se hace a través de esta moción es casi una acción voluntarista, pero que merece la pena ser apoyada, fundamentalmente para destacar que en algo tan importante, como la cooperación internacional, y con una Ley que pretendía recoger la problemática general y llegar hasta la máxima concreción posible de los estamentos e instituciones que realizan la cooperación, nos encontremos —repito que a estas alturas— sin tener una idea clara de en qué objetivos y con qué fines se han gastado los recursos destinados a la cooperación.

Además, habría que entrar en un asunto clave que no está suficientemente clarificado, como es la distinción entre la cooperación técnica, la ayuda humanitaria y los demás aspectos de la cooperación, dedicados fundamentalmente a los temas de formación, educación, etcétera.

Mi Grupo va a apoyar esta moción, fundamentalmente por el aspecto testimonial, para recordar al Gobierno que debería haberse presentado ante estas Cámaras un programa, un proyecto o un plan que clarificara cuál es el horizonte de la cooperación internacional. Ha habido suficientes muestras de la necesaria solidaridad con países del Tercer Mundo, con países emergentes, en respuesta a circunstancias ajenas a la planificación humana. Las catástrofes han obligado a que los diferentes Gobiernos de Europa, y en particular el Gobierno del Estado y las Comunidades Autónomas, hayan tenido, que disponer de fondos para atender de manera urgente necesidades de la población que ha sufrido graves daños como consecuencia de dichas catástrofes originadas por diferentes huracanes y terremotos. Todo ello debería haber sido contemplado y no improvi-

sado, como se ha producido de hecho como consecuencia de la ausencia de un plan director de cooperación internacional. Tenemos necesidad de ese plan, por eso negociamos incluirlo en la ley, por eso surgió este artículo 8.º y por eso el conocimiento de esta Cámara y del Congreso de los Diputados es necesario para poder impulsar con un acuerdo unánime la política de cooperación, que es absolutamente necesario que sea consensuada como una expresión de los contenidos de solidaridad que comparte.

Nada más, sólo quiero reiterar que mi Grupo apoyará esta moción.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Albistur.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Varela.

El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.

En nombre de mi Grupo, yo también anuncio que votaremos positivamente esta moción que tan acertadamente ha presentado la Senadora Martín i Vigil. Debo repetir lo que vengo diciendo desde hace un mes aproximadamente en que tratamos este asunto aquí, primero en una pregunta y después en el debate sobre la interpelación: que enfocamos esta cuestión con un ánimo totalmente positivo porque sería lamentable que en asuntos de cooperación internacional, de ayuda al Tercer Mundo tuviéramos debates partidistas. Por tanto, desde este ánimo positivo, vamos a votar a favor de esta moción.

Cuando hace quince días se produjo el debate respecto a la, interpelación que presentaba la Senadora socialista, el representante del Gobierno, a la acusación que le hacía dicha Senadora de que el Gobierno bloqueaba el desarrollo de la Ley de cooperación, contestó que no era así, y yo le leí entonces el prólogo de un libro que ha publicado una ONG tan importante como es Intermón sobre la realidad de la ayuda al desarrollo, que decía que el contenido más importante del texto de la Ley de Cooperación es la regulación del Plan Director, el cual no se ha desarrollado, y que esta dilación ha originado una importante decepción en los representantes de la sociedad civil que se ocupan de esas cuestiones. En su respuesta, el Vicepresidente Segundo del Gobierno no contestó a esta cuestión de si iban a presentar o no el Plan Director, si iba a ser debatido en las Cortes. Por tanto, la moción que presenta la Senadora socialista es muy pertinente, ya que si se acaba esta legislatura y el Gobierno no presenta el Plan Director en las Cortes Generales para su debate, la política de cooperación de este Gobierno se verá seriamente dañada, lo que sería una lástima.

Por tanto, insisto, desde el ánimo positivo que caracteriza a nuestro grupo, en que, aunque poco, todavía queda, un margen, de tiempo suficiente para que este Plan Director sea debatido y aprobado; Plan que fue aprobado por la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional el 23 de julio, para ser elevado al Consejo de Ministros. Pensamos que ha habido tiempo suficiente para que su aprobación fuera un hecho. No ha sido así. Debemos insistir al

Gobierno para que no cause más decepción en la sociedad civil que tan generosamente se ocupa de estas cuestiones; que apruebe de una vez este Plan Director, que se produzca el debate requerido por las Cámaras y, aunque sea al final de esta legislatura, podamos tener un Plan Director que pueda regir de manera coherente y planificada los próximos cuatro años.

En la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados celebrada el 29 del pasado septiembre, el Secretario de Estado, señor Villalonga, repitió dos o tres veces, su compromiso, con las siguientes palabras: Es voluntad del Gobierno cumplir el compromiso de que este documento —el Plan Director— sea aprobado en Consejo de Ministros y se inicie su tramitación parlamentaria, es decir, el debate en las Cortes.

Creemos todavía en la voluntad del Gobierno para que esto sea una realidad. La verdad es que a medida que pasa el tiempo nos cuesta creer que esta voluntad se ejercite, pero desde nuestro voto positivo a la iniciativa presentada por la Senadora socialista animamos al Gobierno a que presente de una vez el citado Plan Director para culminar de una manera muy correcta la acción gubernamental en el tema de cooperación internacional.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bellido.

El señor BELLIDO MUÑOZ: Gracias, señora Presidenta.

Ante todo, quiero felicitar en nombre de nuestro Grupo Parlamentario, al Senador Cardona por su, designación como Vicepresidente de la Cámara; designación que personalmente, como Presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, me alegra, ya que es el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

Nuestro grupo anuncia de antemano el voto favorable a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Y va a ser favorable porque intervienen muchas voluntades para que efectivamente, se lleve a efecto lo que se pretende en esta moción: interviene la voluntad del Gobierno cuando remitió el proyecto de ley de cooperación al Parlamento español; la propia voluntad del Gobierno, puesta de manifiesto por distintos miembros del mismo en cuanto a su decisión de aprobar el Plan Director y los distintos decretos en la presente legislatura y, fundamentalmente, la voluntad de las Cámaras, de los representantes del pueblo, de todos en concreto, tanto en el debate de la propia ley como en el debate de esta moción que impulsa y anima al Gobierno para que, antes de terminar esta legislatura, lo apruebe.

La tramitación de este plan es larga, por lo que, en contra, de lo comentado por el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos con respecto a lo que podían haber sido las ayudas en el caso de los países afectados por el huracán Mitch si hubiéramos tenido desa-

rollado este Plan Director, he de afirmar que evidentemente en octubre o noviembre de 1998 era imposible contar con él en base al proceso de elaboración que ha seguido.

En su redacción han intervenido la Universidad del País Vasco, la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido sometido a consulta de todas las Comunidades Autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de las organizaciones no gubernamentales, de los sindicatos y de la patronal. Ha pasado por el Consejo de Cooperación, así como por el Consejo Interministerial de Cooperación al Desarrollo, contando con el consenso de toda la Administración.

Por tanto, ha tenido un largo trayecto, en el que, como decía la semana pasada el Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores en esta Cámara, a preguntas del Senador Castro Rabadán, el Gobierno se ha encontrado con dificultades de tipo competencial y presupuestario. En cualquier caso, entendemos que el proceso de elaboración ha sido transparente, abierto, participativo y consensuado, y todos los grupos parlamentarios hemos aportado algo al mismo. Y no sólo conocemos, por supuesto, las líneas básicas y estratégicas, sino incluso todo el contenido del Plan Director.

Por ello —y con esto termino, señora Presidenta—, nuestro Grupo va a apoyar esta iniciativa socialista en la seguridad de que antes de que termine la presente legislatura el Gobierno de la nación dará cumplimiento a la misma.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.

Por tanto, ¿puede darse aprobada por asentimiento esta moción consecuencia de interpelación? (*Pausa.*)

Así se considera. Muchas gracias.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE TOMÉ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SE RECONOZCA EL DERECHO A PERCIBIR EL COMPLEMENTO POR RESIDENCIA, EN IGUALES CONDICIONES, PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS EQUIPARANDO, AL MISMO TIEMPO, DICHO COMPLEMENTO AL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, CEUTA Y MELILLA (671/000088).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se reconozca el derecho a percibir el complemento por residencia, en iguales condiciones, para

el personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado, de la Administración Tributaria y de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, equiparando, al mismo tiempo, dicho complemento al de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ceuta y Melilla.

A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos enmiendas: una, por el Grupo Parlamentario Popular, y otra, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción originaria, y por tiempo de cinco minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

Al margen de que todos los grupos hayamos firmado —creo que en estos momentos— una propuesta que sería la síntesis de la moción que he presentado, quisiera argumentar el tema de fondo, que ya fue motivo de debate durante una interpelación en el Pleno anterior.

Para situar el problema hay que indicar que estamos hablando de la retribución por residencia especial en algunas zonas del Estado español. Esta retribución se viene percibiendo por parte de los funcionarios públicos desde la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964. Las cantidades a asignar se han ido regulando por acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 1992 y por desarrollo de la Orden Ministerial de 29 de diciembre de ese mismo año.

En estos momentos se recogen las cantidades retributivas que perciben los funcionarios públicos según los lugares de destino, siendo las mayores las relativas a Ceuta y Melilla; a continuación, las establecidas para otras islas del archipiélago canario; después, las correspondientes a las islas de Gran Canaria y Tenerife, y finalmente, las previstas para las islas Baleares y el Valle de Arán. Todos los importes fueron recientemente actualizados de nuevo en el anexo octavo de una resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del 4 de enero de 1999. Todo ello se refiere al personal funcionario.

En lo que se refiere al personal laboral, hasta este momento no ha habido un trato igual. No existía con carácter general una normativa que lo regulase, y dependía siempre de la situación de los más de 50 convenios colectivos laborales en el ámbito de la Administración del Estado. Recientemente, el 16 de noviembre de 1998, se firmó el convenio único. En el artículo 75.6 de dicho convenio colectivo se establece que el personal laboral incluido en dicho convenio percibiría un complemento de residencia del 25 por ciento del salario base para Ceuta y Melilla y las islas Canarias salvo Gran Canaria y Tenerife; para el resto, caso de las Islas Baleares, los que estuviesen percibiendo complementos de residencia mantendría este complemento, bastante inferior, por cierto, en sus actuales cuantías, como complementos personales. Por tanto, no se reconocía el derecho en las Islas Baleares del complemento de residencia, sino a título fundamentalmente de complemento personal, sin tener en cuenta ese aspecto fundamental.

Por tanto, hay que señalar varias cosas: primero, que en las Islas Baleares tienen cuantías siempre inferiores, y segundo, que no está como derecho de complemento de residencia, por lo que se firma una discriminación.

El señor Acebes, ante la interpelación que formulé el pasado Pleno, me contestó que se debe de modificar el complemento de residencia para incluir al personal de las Islas Baleares que no está afectado por el mismo o no tiene convenio más favorable. Nos dijo aquí que este tema tendría que tratarse en la Comisión negociadora, con lo que yo estoy de acuerdo, pues quedan por discutirse en esta Comisión los remanentes de la masa salarial correspondiente al año 1999. Además, y esto es importante, nos dijo también aquí que las modificaciones del complemento de residencia para el personal laboral debería tener en cuenta la misma proporción que existe en el personal funcionario entre las distintas islas, adelantando que el coste aproximado estaría en torno a unos 51 millones de pesetas. Pero creo yo que el señor Acebes se refería a la relación de las cantidades que el personal funcionario cobra por este concepto que, como ya he expresado, es altamente discriminatorio con respecto a otras comunidades. En este sentido, refiriéndose al personal funcionario, el señor Ministro dijo que se está estudiando y trabajando para que no exista ningún tipo de diferencia respecto a otras islas y para que en situaciones de homogeneidad no haya diferencias entre funcionarios. Para ello, dijo, se haría una resolución de la Secretaría en la que se pudiese paliar cualquier otro detalle que evitase diferencias entre unas y otras islas. Esto es lo que dijo el señor Ministro.

Bien, señorías, en mi opinión, el artículo en cuestión en los laborales incurre en vulneración de derechos fundamentales. La omisión del archipiélago balear, en que incurrieron los firmantes —incluida, por supuesto, la Administración— del convenio colectivo vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, que tiene su trasposición en los artículos 4.1.c) y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores. No es el momento de entrar a premonizar repaso de la indemnización por residencia en el ámbito funcional, o de los diversos complementos por residencia pactados en múltiples convenios colectivos sectoriales; baste constatar que se trata de un concepto remunerado de gran tradición que pervive entre las retribuciones de los funcionarios públicos y se mantiene en numerosos convenios colectivos. Su razón de ser era de compensar las desventajas económicas que supone residir en determinadas zonas del territorio nacional, ya sea por causas de la insularidad, Canarias y Baleares, ya sea por su especial aislamiento, Ceuta, Melilla y Valle de Arán, en su momento especialmente.

Voy a terminar diciendo, como referencia simplemente que el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que los convenios colectivos deben observar el debido respeto a las leyes, cuanto más a los preceptos constitucionales.

Por su parte, el ya citado artículo 17.1 del mismo cuerpo legislativo predica la nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que contengan discriminación desfavorable o favorable en materia de retribuciones.

Por último, la igualación del destino en las Islas Baleares debería producirse con el de las islas Canarias mayores que tienen adjudicado un 10 por ciento del salario base, habida cuenta de su análoga capacidad de comunicación, por más que la distancia sea mayor.

Independientemente de estas precisiones, quiero dar solución a este problema. En la interpelación, el señor Ministro contestó de forma positiva. Se trataba, fundamentalmente, de concretar en una moción esta supresión de la discriminación. Nada más llegar el día de la interpelación a mi Comunidad, unos trabajadores laborales me trajeron unos cuantos folios en los cuales el Ministro de Trabajo y Seguridad Social —el Ministerio— no daba la razón a esos trabajadores y les planteaba que, por tanto, no había lugar a una modificación del convenio colectivo. De ahí esta moción de hoy.

Me alegro de que los diferentes grupos se muestren sensibles respecto a la consecución de un acuerdo de todos sobre esta cuestión que permita llevar este asunto a la Mesa Negociadora para el Personal Laboral en el Convenio Único, y a la Mesa de la Función Pública para los funcionarios, con el fin de dar una solución definitiva a un problema de discriminación. En el caso de que no se produzca esa solución, yo, como es lógico, continuaré intentando conseguir que esto se modifique. Por ahora prefiero pájaro en mano que ciento volando. Ésta es la razón por la que acepto la enmienda que también he firmado y, por supuesto, me congratulo de que sea por unanimidad de todos los grupos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.

Para la defensa de la enmienda a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el Senador Sanz.

El señor SANZ PÉREZ: Gracias, Presidenta.

No voy a entrar en algunas cuestiones que ha planteado el Senador Cámara, porque él mismo las ha definido. Está contento con el resultado de la interpelación que tuvo lugar con la presencia del Ministro en el Pleno pasado, y que usted ha calificado de positiva. Me alegro de que opine así, pues eso es prueba de que cuando el Gobierno detecta algún problema se pone manos a la obra e intenta solventarlo.

Sus señorías saben que, tanto lo relativo al personal laboral como a los funcionarios, se rige por normas sustancialmente diferentes, una de las cuales es el Estatuto de los Trabajadores —todo el personal laboral—, pero también, por la infinidad de convenios que existen, porque afortunadamente hay un solo convenio único, que se firmó recientemente para cerca de 70.000 trabajadores. Pero, en resumidas cuentas, hemos de felicitarnos por el consenso alcanzado entre todos los grupos políticos.

La enmienda que se presenta como alternativa en el día de hoy en la Cámara en el apartado del personal laboral plantea que el Senado inste al Gobierno para que dé instrucciones a los órganos competentes y estudien la modifi-

cación del artículo 75.1.6 del Convenio Único firmado hace escasas fechas, para asignar el complemento de residencia a los trabajadores laborales de las Islas Baleares. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en este apartado. Creo que es importante que se plantee este asunto y se le dé solución en la Mesa Negociadora del Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado; que se incluya a este personal laboral destinado en las Islas Baleares.

Hay que decir, sobre todo, que, como consecuencia de lo expuesto en la interpelación, afortunadamente —repito— podemos dar una solución y analizar esa diferencia que existe en cuanto a los pagos de complemento de residencia entre Ceuta y Melilla, donde se paga ese 25 por ciento, o en Gran Canaria y Tenerife, que está en el 10 por ciento, y el resto del archipiélago canario, que está en el 25 por ciento.

Me gustaría entrar a defender que lo más lógico es que sea la Comisión Negociadora de este Convenio —hay que ser respetuosos y escrupulosos con las palabras que se dan y con lo que se firma— y, por lo tanto, me reafirmo en lo dicho por el señor Ministro.

Respecto al segundo punto, que es el régimen general del complemento de residencia para los funcionarios, estamos hablando de datos sumamente importantes, y de ahí la trascendencia de que planteemos que se examine el complemento por residencia del personal en activo del sector público en el marco de la Mesa de la Función Pública, porque estamos hablando de cerca de 26.000 funcionarios públicos; estamos hablando de que en Ceuta y Melilla tenemos 7.291 funcionarios públicos que cobran un complemento de residencia de 2.460 millones de pesetas; estamos hablando de que en las islas menores de Canarias hay 1.845 funcionarios, a los que se les asignan 495 millones; estamos hablando de que en Gran Canaria y Tenerife existen 11.300 funcionarios, o estamos hablando de Baleares, en la que existen 5.600 funcionarios. Por lo tanto, es una cuestión importante y creemos que es necesario su estudio detallado y minucioso.

A este respecto quiero destacar algunos datos relativos al régimen de complemento de los funcionarios. Hay normas importantes que arrancan de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado del año 1964, al igual que una serie de órdenes y de reglamentos planteados desde el año 1992 hasta el último, que es el anexo octavo de la Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, del 4 de enero de 1999.

En consecuencia, creo que es necesario, a la vista del tiempo transcurrido, valorar en sí la situación actual, cuyas circunstancias han variado, con objeto de adecuar los complementos por residencia a las condiciones existentes en las diferentes zonas.

Entendemos también —y precisamente por ello presentamos el texto alternativo a la moción— que no aspira a que el Gobierno lleve a cabo una equiparación de todas las zonas, sino que pretende estudiar y analizar los complementos de residencia que en la actualidad se asignan a los funcionarios públicos.

En este análisis que nosotros planteamos en esta enmienda alternativa solicitamos, por ejemplo, la necesidad de estudiar o considerar la evolución de diferentes facto-

res. Es necesario estudiar para este complemento de residencia la lejanía del territorio peninsular, porque no es lo mismo la situación de un funcionario que viva en Baleares, que está a 300 kilómetros de Valencia, por ejemplo, que la de un funcionario de Canarias, que está a cerca de 2.000 kilómetros de la península, y no es lo mismo hablar de las dificultades de transporte —afortunadamente cada vez son menores— que tienen los diferentes territorios, de la misma manera que habrá de tenerse en cuenta, en mayor o menor medida, la dificultad para proveer los diferentes puestos de trabajo.

Por lo tanto, hay que analizar diferentes factores, diferentes condicionantes para solucionar este problema, y antes de que se inste al Gobierno a que lo haga, es mejor, más positivo y más prudente instar al Gobierno a que lo estudie y lo analice en coordinación y colaboración con los que conocen mucho mejor este problema, que son los propios funcionarios y representantes de los trabajadores. Por este motivo, la segunda parte de la enmienda responde a que se considere que el método de trabajo idóneo es analizar, como digo, estos y otros factores que inciden en la cuantía del complemento de residencia para que el Gobierno, posteriormente, adopte con elementos de juicio suficientes las medidas de adecuación del complemento de residencia que se consideren procedentes.

Para terminar, señora Presidenta, quiero felicitarle por el consenso habido entre todos los grupos políticos y, sobre todo, agradecer ese consenso.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sanz.

Para la defensa de la otra enmienda presentada a esta moción por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Socías.

El señor SOCÍAS PUIG: Señora Presidenta, retiramos la enmienda en aras del consenso y nos sumamos a la que ha presentado el Grupo Popular.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Socías.

¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario Mixto autor de la moción originaria? (*Pausa.*)

Tiene la palabra el Senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Únicamente quiero agradecer la intervención del Senador del Grupo Parlamentario Popular y, asimismo, dar las gracias al resto de los grupos por su apoyo y recordar simplemente, sin acritud, que lo del estudio de los funcionarios no es «ad kalendas graecas». El señor Ministro dijo aquí que podía haber una resolución de la Comisión; por tanto, se puede estudiar, efectivamente, pero recuerdo simplemente que la cuestión del hecho insular se recoge en toda la legislación existente actualmente, entre la que destaca una Ley orgánica que, por supuesto, recoge el hecho insular como hecho diferencial. Por tanto, nadie se puede escudar en la expresión «conjunto del Estado» para no recoger el hecho in-

sular como un hecho diferencial importante en relación con la solución en este caso del problema de los funcionarios de mi Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.

¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (*Pausa.*)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Capdevila.

El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.

Aunque se dé por supuesto, vaya por delante, en primer lugar, mi felicitación y la de mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, al Vicepresidente Primero de la Mesa del Senado por su reciente nombramiento.

La moción consecuencia de interpelación presentada por el Senador Cámara, del Grupo Parlamentario Mixto, insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se reconozca el derecho a percibir el complemento por residencia, en iguales condiciones, para el personal funcionario y laboral de la Administración general del Estado, de la Administración Tributaria y de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, equiparando, al mismo tiempo, dicho complemento al de la Comunidad Autónoma de Canarias, Ceuta y Melilla en función del hecho insular.

El propio Senador Cámara ha puesto de manifiesto que el pasado día 17 de noviembre, con ocasión de la interpelación presentada, de la que trae consecuencia esta moción, el Ministro de Administraciones Públicas, señor Acebes Paniagua, reconoció la percepción de la retribución consecuencia de la indemnización por residencia de destino que vienen percibiendo los funcionarios públicos desde la promulgación de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964, retribución que varía proporcionalmente de mayor a menor cantidad en función de los distintos destinos y en el siguiente orden: Ceuta o Melilla, todas las islas del archipiélago canario, salvo la Isla de Gran Canaria y la de Tenerife que van a continuación. Y finalmente, se contemplan las retribuciones previstas para las Islas Baleares y el Valle de Arán, retribuciones que reconoció el propio Ministro que fueron actualizadas el día 4 de enero de este año.

Respecto al personal laboral, se reconoció que tampoco existía una norma generalizada, y que dicho personal se regulaba por medio de diversos convenios que finalizaron con motivo de la firma del Convenio único para el personal de la Administración del Estado de 16 de noviembre de 1998.

Por consiguiente, entendemos que la retribución por complemento de destino para los funcionarios del Estado y para el personal laboral está más o menos regulada en toda esa normativa y en el Convenio único. Lo que no está previsto, y así lo puso de manifiesto este Senador con ocasión de la interpelación, es la equiparación entre la retribución

que perciben los funcionarios de las Islas Baleares con respecto a los de las islas Canarias, equiparación que con la enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha logrado el consenso de todos los demás grupos, viene a someter a estudio esta cuestión para lograr un mejor equilibrio entre funcionarios y personal laboral de las Islas Baleares con respecto a los de las islas Canarias.

Por todo ello, nuestro grupo parlamentario apoya la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, la transacción acordada por todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Capdevila. Senador Socías, ¿desea intervenir? (*Asentimiento.*) Tiene su señoría la palabra.

El señor SOCÍAS PUIG: Gracias, señoría.

Nuestro Grupo considera de justicia lo que se solicita en la primera parte de la moción consecuencia de interpelación, en el sentido de que se equipare el complemento por residencia para el personal laboral con el de los funcionarios de la Administración del Estado en las Islas Baleares.

Nos felicitamos por el alto grado de consenso que ha suscitado esta moción en el sentido de dejar la puerta abierta a un posterior estudio de modificación de los complementos de residencia en todo el territorio nacional para que de alguna manera se pueda analizar la cuestión de las distancias. No todos estamos a la misma distancia —como muy bien nos han recordado, Canarias está a 2.000 kilómetros y Baleares a 300 kilómetros de las costas levantinas—, y a eso hay que añadir la dificultad de comunicación. Es decir, un territorio puede estar muy próximo a la península y la dificultad de comunicación ser muy evidente, como sucede en el caso de Formentera.

Por tanto, nuestro Grupo cree que, además de valorarse la distancia o la facilidad de comunicación, también habrá que valorar en el estudio que realice esta Comisión la doble o triple insularidad que a veces se produce y que dificulta, a pesar de la cercanía con el territorio continental, el desplazamiento a la hora de hacer gestiones, y es que, por desgracia, en un Estado autonómico como el nuestro todavía tienen que hacerse en la capital del Estado.

Pensamos que es importante atender a la equiparación de los territorios no continentales, adaptándonos progresivamente a lo que marcan las normativas de la Unión Europea respecto a los territorios insulares.

Para finalizar, quiero volver a felicitarnos por el elevado grado de consenso alcanzado. En ese sentido, tan sólo he de decir que votaremos afirmativamente la moción.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Socías.

¿Puede entenderse aprobada por asentimiento la moción consecuencia de interpelación? (*Pausa.*)

Queda aprobada en los términos de la enmienda suscrita por los distintos Grupos.

MOCIONES:

— DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS Y MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, EN LA PROXIMIDAD DE LA FECHA QUE SE SEÑALE PARA CELEBRAR LAS ELECCIONES GENERALES, SE LLEVE A CABO UNA CAMPAÑA ESPECÍFICA, INSTITUCIONAL Y EXPLICATIVA SOBRE LA FORMA DE UTILIZAR LA PAPELETA OFICIAL QUE EN CADA PROVINCIA SE APRUEBE PARA ELEGIR A LOS SENADORES (662/000223).

La señora PRESIDENTA: Siguiendo punto del orden del día: Mociones. Moción de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto por la que se insta al Gobierno para que, en la proximidad de la fecha que se señale para celebrar las elecciones generales, se lleve a cabo una campaña específica, institucional y explicativa sobre la forma de utilizar la papeleta electoral oficial que en cada provincia se apruebe para elegir a los Senadores.

Por acuerdo adoptado en el día de hoy por la Junta de Portavoces, sólo habrá un turno de portavoces, de cinco minutos cada uno y de mayor a menor, para la defensa de la misma.

Por lo tanto, comenzamos por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el Senador Ruiz Rivero.

El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, la proximidad de la convocatoria de las elecciones generales supone —como ya es sabido por todos ustedes— la puesta en marcha de aquello que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en su capítulo III, define como el sistema electoral. Es cierto que, en la práctica, el grueso de ese sistema electoral lo conforman los contenidos políticos de las distintas campañas electorales promovidas desde las diferentes formaciones políticas, o, cuando menos, la importancia de los mensajes programáticos dejan en la sombra al resto de cuestiones que, no por ser de menor complejidad, encierran menor importancia.

Si bien es cierto que las administraciones públicas no escatiman ni esfuerzos ni recursos a la hora de procurar que los contenidos programáticos sean capaces de llegar al elector —por ejemplo, con la cesión gratuita de espacios televisivos a los distintos partidos que concurren a los comicios—, también es cierto que todo eso, aun siendo necesario, no es suficiente. Falta cerciorarse, asegurarse de que la voluntad del votante queda manifiesta en el voto sin lugar a equívocos, porque si la decisión del elector no fuera la que deja expresa en su papeleta del voto, o ésta debe ser anulada por errores formales, todo el esfuerzo anterior, tanto la elaboración de los programas y campañas electorales de los partidos políticos como el intento por parte de

la Administración para que esos contenidos lleguen a todo el mundo, hubiera sido inútil, resintiéndose notablemente el espíritu democrático de esa consulta electoral.

Debemos de tener la seguridad de que el voto es reflejo fiel de la opción por la cual se ha decidido el votante, y eso, que debería ser normal, parece que se quiebra con cierta continuidad en las elecciones de los representantes de esta Cámara. El número de papeletas del Senado declaradas nulas por su uso incorrecto no parece disminuir en ninguno de los comicios celebrados a tal efecto, y la causa más evidente de esa incorrección es, a todas luces, la obligación de completar la papeleta del voto para dejar clara la opción política más valorada personalmente por el individuo, dejando atrás modelos más simples que se destinan a otras instituciones, donde basta con el sencillo ejercicio del depósito de la papeleta del voto en la urna. Ciertamente, ése es el motivo que provoca esa confusión.

Con ese ánimo, con el de recoger el voto emitido y con el de recoger lo más fielmente posible la voluntad del votante, el Grupo Parlamentario Popular suscribe la moción que hoy se presenta aquí, para que el Gobierno, a través de una campaña específica y ante la proximidad de las elecciones generales, sea capaz de explicar a los electores el uso correcto de la papeleta destinada a la constitución de esta Cámara.

Para acabar, señorías, quiero decir que, entre otras, es nuestra obligación no solamente defender y mejorar el ejercicio de la democracia sino que debemos también procurar que ponerla en práctica sea posible y, además, sea fácil.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ruiz Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Arévalo.

El señor ARÉVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, uno de los primeros problemas con los que se encuentran los miembros de las mesas de las elecciones generales son las consultas que inmediatamente reciben sobre el uso de las papeletas para elegir el Senado. En las últimas celebradas, las de 1996, creo que fueron mayoría los colegios electorales que lucían cerca de las papeletas algún escrito —hecho por el presidente, por alguno de los vocales o por los interventores— sobre la forma de completar la papeleta del Senado. En numerosas ocasiones se elevaban consultas a las Juntas Electorales, pero su resolución de última hora muchas veces no se hacía efectiva. Se da la circunstancia de que los electores introducen en el sobre la papeleta sin poner las cruces en los nombres deseados, señalan más de tres nombres, tachan algún nombre, trocean la papeleta, etcétera.

Hay que reconocer que la Junta Electoral Central y todas las Juntas Electorales han cuidado mucho esta cuestión y, con muy buen criterio, han señalado una interpretación sobre el voto emitido que podemos resumir así: es válida la papeleta que no contiene dudas sobre la voluntad del vo-

tante y es nula la papeleta donde no es clara la voluntad del votante. Esta doctrina irreprochable no siempre es bien interpretada por algunas mesas electorales.

Tenemos que reconocer que es una papeleta confusa, muy extensa y que, a veces, se presentan muchas candidaturas para conseguir acceso a la publicidad o al censo, sin ninguna aspiración a conseguir escaños, pero que —como están en su derecho— se dificulta la papeleta y se la hace más complicada.

Por otra parte, la elección de los Senadores se lleva a cabo mediante un sistema de listas abiertas, muy reclamado para tantas otras instituciones y que, por sí mismo, necesita ser entendido y bien utilizado. Puesto que es reclamado para otras instituciones nosotros deberemos cuidar de que las listas abiertas, en el caso del Senado, sean bien entendidas e interpretadas.

Las papeletas del Senado anuladas se cuentan por cientos de miles; por cada una de las papeletas del Congreso de los Diputados que es anulada, se anulan 5 del Senado. Por tanto, es una situación que hay que corregir y no hay mejor manera para hacerlo que explicar a tiempo cómo se debe hacer la votación con esta papeleta. La elección de los Senadores tiene que facilitarse para que los españoles puedan expresar libremente en su papeleta la opción que desean. Además, es de justicia que el Senado tenga la consideración que constitucionalmente le corresponde, el reconocimiento que su trabajo merece y la atención ciudadana que a su representación corresponde. Es preciso que no sólo su trabajo sea del más alto nivel, como sin duda lo es, sino también que cuando llega el día de elegir a sus miembros, los votantes conozcan sin dificultades la forma de ejercer su derecho al voto, eligiendo libremente los de su preferencia. Para facilitar esta labor, el Gobierno debe cumplir puntualmente uno de sus derechos en la campaña institucional, que haya una campaña propia clara y objetiva, y que en los medios de comunicación —públicos y privados— se explique la forma de ejercer el derecho al voto para elegir los Senadores de cada provincia. El Gobierno tiene que cumplirlo. Lo necesitan los candidatos y lo agradecerán los electores.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Carrera.

El señor CARRERA I COMES: Gracias, señora Presidenta.

Con suma brevedad, casi telegráficamente, intervengo no sólo para confirmar nuestra posición favorable y unánime de toda la Cámara a esta moción presentada conjuntamente con el resto de los grupos parlamentarios, sino también para hacer constar que a uno le es difícil reconocer que ni siquiera en el momento de votar los votantes saben qué hacer con las papeletas del Senado. Vendría a ser como una frustración general tener que reconocer públicamente, y en esta Cámara, que ni en este momento el Senado tiene la suficiente personalidad como para que sus votantes sepan qué es lo que hay que hacer.

Nuestro Grupo, aparte de dejar constancia de esta frustración, repito, ha firmado esta moción, y la vamos a votar favorablemente confiando en que sirva para clarificar e informar sobre la forma de utilizar la papeleta oficial.

Nada más. Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Carrera.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra su portavoz, el Senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señora Presidenta.

El texto de la moción que tenemos en nuestras manos lo dice ciertamente todo. Los portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra lo han matizado perfectamente y, por si fuera poco, nuestra firma al texto presentado también lo pone de manifiesto. Señora Presidenta, nuestro voto será favorable.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Zubia.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.

El señor ROMÁN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.

Intervengo para anunciar nuestro voto favorable y trasladar una recomendación que me hacía el Senador Saavedra, que considero es razonable, por si fuera posible. Se trataría de hacer una corrección en el mismo contenido de la moción, que consistiría en que en donde se habla de provincias se añadiera el término «o islas». En todo caso, señorías, estoy de acuerdo con los argumentos planteados por los anteriores intervinientes y nuestro grupo votará también favorablemente.

Gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.

¿Puede considerarse aprobada por asentimiento? (*Pausa.*)

Queda aprobada por asentimiento.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE RESPALDE ANTE EL CONSEJO DE EUROPA LA ASPIRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA A SER SEDE DEL INSTITUTO EUROMEDITERRÁNEO DE HIDROTECNIA, Y A QUE COLABORE EN EL POSTERIOR DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL REFERIDO INSTITUTO (662/000222).

La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a que respalde ante el Consejo de Europa la aspiración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a

ser sede del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, y a que colabore en el posterior desarrollo y puesta en marcha del referido Instituto.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el Senador Sepúlveda.

El señor SEPÚLVEDA RECIO: Gracias, señora Presidenta.

La iniciativa que un grupo de miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha tomado a principios de este año para conseguir la creación de un Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, y que hoy queremos respaldar en esta Cámara, puede culminar en un doble éxito para España si prospera esta moción siguiendo la senda del diálogo y del consenso que ha emprendido desde su andadura inicial. Y este éxito puede ser para España, en primer lugar, porque la ubicación de este organismo en nuestro territorio va a suponer un beneficio científico, económico, social, para el tratamiento de los problemas derivados del agua, tan importantes hoy en día y que afectan de una manera tan especial al área mediterránea. Y, en segundo lugar, porque gracias a esta iniciativa, Murcia puede convertirse en la sede de este instituto, lo que la convertiría en foco y referencia obligada para el mundo científico en general del conocimiento y tratamiento de los diversos problemas hídricos existentes.

Señorías, Murcia ha sido y es desde siempre una región vinculada al agua, a su exceso, a su carencia, a su cultura, lo que le ha permitido ir acumulando el bagaje necesario para valorar y aprovechar al máximo este recurso natural, pero sin desperdiciar la fuente de riqueza que entraña. Prueba de ello es el importante crecimiento de los cultivos agrícolas, que constituyen la base especial de su exportación. La Región de Murcia no puede desaprovechar, por tanto, una oportunidad como la que ahora se nos ofrece, entendiendo por tal el establecimiento de un Instituto científico de estas características, que no puede sino beneficiar en todos los órdenes a esta región, a la España árida y, por añadidura, a toda la cuenca mediterránea.

Señorías, me estoy refiriendo a un región dinámica y moderna, que quiere afrontar los retos futuros de su prosperidad y ve que ésta es una buena ocasión para ampliar el campo de actuación de todas aquellas empresas que se dedican a la ingeniería hidrotécnica, a la implantación de nuevos proyectos tecnológicos, en definitiva, a crear riqueza y empleo en un sector estratégico como el de la mejora y aprovechamiento del ciclo integral del agua, ofreciendo, asimismo, la coyuntura ideal para el resto de regiones españolas interesadas en el mismo ámbito de actuación.

Éstas son, sin duda, algunas de las razones fundamentales por las que la moción que hoy debatimos en esta Cámara ha recibido todo el apoyo de las instituciones murcianas, tanto de su Gobierno autonómico como de los círculos culturales y sociales más influyentes. La manifestación más clara de este respaldo ha tenido lugar en un reciente Pleno, celebrado el pasado 11 de noviembre, en la Asamblea Regional de Murcia, donde todos los partidos

políticos con representación parlamentaria abordaron esta iniciativa desde el más saludable espíritu constructivo y de consenso. Porque no hay que olvidar que hay muchos ejemplos en la historia reciente de Murcia, en los que se ha hecho patente la inquietud de esta región por superar la situación de aridez o sequía de esta tierra y por encarar su recuperación, con notables aportaciones científicas y jurídicas, como el Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Sudeste, que vio la luz al principio de la segunda mitad de este siglo, responsable de la realización de estudios e informes básicos relacionados con el acueducto Tajo-Segura. Y más recientemente, en 1995, la creación de un Centro de Investigación de Tecnologías Avanzadas de Regadío, de acuerdo con el Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Debo mencionar también, en el ámbito de la ciencia jurídica, la importante colaboración que empezó a desarrollar en los años setenta el Instituto de Derecho Agrario de Murcia en relación con el conocimiento del derecho de aguas.

Todos estos antecedentes cierran, sin duda, una idea clave, y es que, si bien hasta ahora las tecnologías del uso y gestión del agua han sido utilizadas fundamentalmente para la producción agrícola, no es menos cierto que el futuro inmediato se encamina hacia el avance científico de las técnicas de uso y aprovechamiento racional del agua para el bienestar general de la población. El agua es un elemento vital para la mayoría de las actividades humanas, en la industria, en el sector energético, en la agricultura, en el transporte, para los hogares, en el campo de la medicina, etcétera. En todos estos casos nos enfrentamos a cuestiones de disponibilidad de estado físico, de pureza, de concentración de materias en suspensión o disueltas y sus efectos. El estudio del agua y la comprensión de sus múltiples funciones y usos son fundamentales para conformar una tecnología hídrica óptima. En un futuro próximo esos conocimientos serán fundamentales para tratar de superar esa fuente de conflictos potenciales que la prevista escasez de agua va a suponer en muchas regiones del mundo.

Partiendo, pues, del convencimiento general de la existencia en todo el mundo de una problemática común relativa al uso del agua, es por lo que el Consejo de Europa se plantea el establecimiento de un Instituto para la gestión del agua, con el fin de ayudar a resolver los problemas hídricos específicos de la zona mediterránea. Esta especificidad mediterránea surge no sólo de las estrechas relaciones de vecindad, sino también de un entramado de intereses comunes que recaen sobre los mismos recursos hídricos y sobre cultivos también similares. Esta coincidencia de intereses obedece, además, a la confluencia de unos factores climáticos con unos determinados tipos de suelos y de regímenes hídricos parecidos, que son característicos de lo que conocemos como clima mediterráneo.

De acuerdo con un reciente análisis mundial, los dos problemas más graves y acuciantes de la Humanidad en el próximo siglo serán el del crecimiento de la población y el de la escasez de agua en amplias zonas geográficas. A primera vista, el del agua podría parecer un simple problema socioeconómico, ya que habrá lugares que tendrán

recursos de agua y medios para explotarlos mientras que otros carecerán de ellos. Son muchas las circunstancias que harán que en las próximas décadas la disponibilidad del agua se convierta en un grave problema para la Humanidad. Entre ellas podríamos enumerar la escasez de agua, que puede ser captada para su uso a costo razonable, la desigualdad entre zonas áridas y corrientes fluviales, la irrigación intensiva para producir cosechas más abundantes, el despilfarro que supone el agua que se pierde por fugas en las canalizaciones, la contaminación de las industrias que no depuran el agua que utilizan, o la irrigación que contiene gran cantidad de pesticidas y fertilizantes contaminantes, la explosión demográfica precisamente en las zonas más necesitadas de agua y el cambio climático, respecto del que, si se confirman las previsiones de incremento de la temperatura del aire en 1,5 centígrados en unas pocas décadas, esto significará una reducción de las lluvias y del agua disponible en ríos y lagos. (*El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.*)

Por la enumeración de estos factores se resalta la importancia que se puede derivar para España de la instalación y funcionamiento del mencionado Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, pues, en realidad, señorías, muchas son las cosas que se pueden hacer hoy en día para luchar contra estos problemas.

Para ello, hay que partir de la base de que la ciencia y la tecnología actuales ofrecen un amplio abanico de posibilidades. En concreto, la tecnología hídrica se centra precisamente en la gestión de este recurso para distintos propósitos y en diversas condiciones. Pertenece a un campo muy complejo y muy importante de la ciencia y de la tecnología que versa sobre los problemas de limpieza del agua, ingeniería hidrológica, análisis de los sistemas de recursos hídricos, previsión de inundaciones, gestión de embalses y cauces, desalinización del agua, reciclaje, tecnología hidráulica aplicada a los pozos, tecnología aplicada a las válvulas y a las condiciones hídricas, tecnología de la irrigación, depuración, acuicultura y muchos otros temas que dan una idea de lo importante que puede ser para España respaldar este proyecto de creación del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia y su consiguiente ubicación en Murcia.

En este sentido, disponer en España de un centro de optimización centrado en las aplicaciones tecnológicas de este sector resultaría de gran ayuda para transformar los conocimientos existentes y emergentes en aplicaciones industriales dirigidas a resolver los diversos problemas hídricos. Dicho centro, al estar concebido como parte de una red de cooperación con otros centros, estaría además en condiciones de garantizar sus resultados en toda la región mediterránea.

Qué duda cabe que España goza hoy de una posición singular en el Mediterráneo, lo que le permite desempeñar un papel especial con los demás países ribereños y, especialmente, con los del sur ante sus socios europeos. Esto nos permite tomar la iniciativa en cuantas acciones de cooperación se adopten entre las dos riberas para fomentar la estabilidad y la prosperidad en la zona.

Tanto por su pasado histórico como por su situación geográfica la España actual puede desempeñar un importante papel en el diálogo euroárabe y en los contactos con las organizaciones internacionales de las que España es miembro. Éste es, por ejemplo, el impulso dado en el denominado proceso de Barcelona al enfoque colectivo y global de la Unión Europea en el área mediterránea, así como nuestro compromiso en seguir desarrollando este proceso y ejercitando políticas en pro de las regiones que componen el arco mediterráneo, que pueden ser sustentadas con recursos financieros adecuados. Así lo ha puesto de manifiesto la Ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino, en la reciente conferencia de Turín, al resaltar que la forma más efectiva de materializar esta solidaridad es a través de la cooperación, que tanto ha apoyado España a través precisamente de instrumentos de cooperación como la red mediterránea del agua, de sistemas de información como el SEMIDE, o de sus programas financieros como el MEGA.

En definitiva, señorías —y ya concluyo—, la moción que debatimos no pretende otra cosa que pedir al Gobierno de la Nación que apueste decididamente, en este caso concreto, por una inversión segura y necesaria de futuro, acorde con el rico patrimonio ambiental español, que nos convierte en el país europeo de mayor biodiversidad y que debemos transmitir a las generaciones futuras.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Sepúlveda.

¿Turno en contra? (*Pausa.*)

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.

El señor ROMÁN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente. Estando plenamente de acuerdo con mis compañeros de Izquierda Unida en la Región de Murcia, siento, señorías, una profunda —y entiéndanlo— sana envidia de que hayan conseguido en la Asamblea de Murcia ponerse de acuerdo en una reivindicación tan importante.

Podría decirle en este momento ¿y por qué no Almería? Yo, quizás, hubiese deseado que esa confrontación y esa batalla por el agua, en la que estamos sumidos en Andalucía, nos hubiera permitido que el Parlamento andaluz hubiera promovido alguna iniciativa de características similares.

Saben ustedes que ya hemos tenido ocasión de compartir reivindicación. Lo fue con motivo de albergar un instituto que pudiera estudiar y tomar medidas contra la desertización. Ni Murcia ni Almería tuvimos éxito. Al final quedó muy lejos de una zona, unos lugares, dentro del arco mediterráneo, que sufren especialmente el problema de la desertización y con intensidad el del agua.

La exposición de motivos podría ser perfecta e igualmente válida para una provincia como Almería, con un espectacular desarrollo, con un problema profundo en las necesidades de agua, tanto para abastecimiento como para

uso agrícola y también, por qué no, compartir esos estudios, ese instituto, que tiene que ver con la gestión del agua, algo que nosotros también necesitamos con urgencia.

Y sana envidia y, por tanto, estamos de acuerdo con esa capacidad de diálogo y de consenso, que ha permitido a la Asamblea de la Región de Murcia traer al Senado una iniciativa. Tomo nota.

Asimismo, quiero hacer una reflexión para mis compañeros de todo color político, de cualquier formación política en Andalucía para que podamos aprender que desde el diálogo y el consenso podíamos conseguir —y podíamos haberlo hecho, Senador Cobo— para Almería, para Granada, también dentro de ese arco mediterráneo, algo similar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Román Clemente.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.

El señor GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente. El Senador Sepúlveda, representante de la Comunidad Autónoma de Murcia, ha planteado una moción parlamentaria interesante porque Murcia es una región española que padece una gran sequía, una gran escasez de agua y, sobre todo, se han producido varios conflictos sociales y políticos, con ocasión de diferentes trasvases que hubo a lo largo de la legislatura pasada, como el conflicto que tuvo el señor Ministro Borrell con los Presidentes de las Comunidades Autónomas, en su día con María Antonia Martínez y con el señor Bono en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. También se hicieron gestiones para que pudiera ir a Murcia un centro europeo que luchara contra la desertización.

Por tanto, esta iniciativa parlamentaria es interesante, es buena, trata de traer a una zona mediterránea, con gran escasez de agua, un instituto técnico sobre la planificación hidrológica y sobre la problemática del estudio del agua.

En consecuencia, a nuestro grupo parlamentario le parece muy correcta la moción que ha defendido el Senador Sepúlveda, por lo que vamos a apoyarla.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Beguer.

El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, dice el preámbulo de la moción que acaba de defender el Senador Sepúlveda que el agua origina debates y tensiones en todos los países y que muy concretamente en la cuenca mediterránea, debido al reparto irregular en el tiempo y en el espacio, con ciclos de sequía importantes, la gestión de este recurso escaso es compleja y difícil. El preámbulo expone el agua como elemento natural para el

desarrollo de actividades económicas y como recurso escaso, especialmente en zonas áridas, como las del sureste español, pero no sólo existen las expuestas por el Senador Sepúlveda de la Región de Murcia, sino que el Senador Román ha hecho otra exposición referente a Almería, y probablemente podría extrapolarse a otros puntos de la península. Dice el preámbulo que existen zonas áridas en la España peninsular y también en la insular y que para aprovechar ese bien escaso se ha ido agudizando el ingenio de los ciudadanos, y es un ejemplo a seguir en el aprovechamiento de este recurso la actuación que se ha hecho en tal sentido en el sureste español.

Quiero relacionar este aspecto con un libro que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación editó en 1994, titulado «El enigma del agua en Al Andalus», que se refiere al problema que ha supuesto el agua en un largo periodo de tiempo porque ha sido un bien y qué es lo que ha hecho el hombre, la Humanidad, los hispanos a través de los siglos y a través de los árabes para el aprovechamiento del agua. En su presentación decía la entonces Secretaria de Estado de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona: como los árabes, nuestra sociedad debe resolver serios problemas relacionados con el agua, fomentar el ahorro en algunas regiones, evitar el deterioro de su calidad, asegurar el abastecimiento en lugares deficitarios. Tenemos a nuestro favor —decía— una tecnología avanzada y mayores recursos económicos, pero nos hace falta poner en marcha la imaginación y la voluntad. Quería relacionarlo porque justamente en el preámbulo de esta moción se hace referencia a la necesidad del ingenio para resolver cuanto se refiere a la problemática del agua, que además de necesitar una política de solidaridad, requiere un gran conocimiento de los problemas, de las distintas soluciones, una política de colaboración en distintos niveles, no sólo a escala regional sino también nacional e internacional. Insistimos en que se requiere imaginación, ingenio y voluntad.

Aplaudimos por tanto la iniciativa parlamentaria que se está tramitando en la actualidad en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para crear el Instituto Euro-mediterráneo de Hidrotecnia capaz de estudiar y de interrelacionar los proyectos y conocimientos de centros dedicados al agua en toda la cuenca del Mediterráneo, establecer una red de cooperación con distintos centros, realizar un esfuerzo en la investigación de soluciones a estos problemas, lo que sin duda ha de rendir frutos.

La propuesta, concretamente defendida por el Senador Sepúlveda, de que en la Región de Murcia se albergue este Instituto Euro-mediterráneo de Hidrotecnia nos parece perfectamente acertada, no sólo porque sea una zona en la que existe una inquietud, bastante continuada desgraciadamente, por la problemática de la aridez y de la sequía, sino porque se ha demostrado, en primer lugar, porque el Senador Sepúlveda ha hablado de diversos centros de estudio existentes en esta región y, en segundo lugar, porque nosotros creemos que esta voluntad, esta imaginación, este ingenio y esta preparación lo tienen las gentes de la Región de Murcia y, por tanto, están plenamente capacitados, naturalmente que con la ayuda tanto del Gobierno autonómico como del central y de aquellas instituciones que en

un momento determinado, en estos momentos el Senado, pueda dar su apoyo. La Región de Murcia está plenamente capacitada, repito, para albergar de un modo eficaz el Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia y, por tanto, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió*, da pleno soporte a esta propuesta. Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Gallego López.

El señor GALLEGO LÓPEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, la exposición del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Sepúlveda, es lo suficientemente clara como para que suscite nuestro apoyo y sea fruto del consenso de todos, como han manifestado los distintos portavoces. Sé que con ella, y detrás de ella, está la tenacidad del Senador Fernández Aguilar que hace y seguirá haciendo un seguimiento riguroso de los avatares de este tema ante el Gobierno y ante el Consejo de Europa.

Hablamos nuevamente del agua en esta Cámara, y en unos días en que llueve. Se ha hablado también de ella al aprobar la reforma de la Ley de Aguas; en el Consejo de Ministros se trató del Plan Nacional de Regadíos, y se dejó sobre la mesa para otra ocasión el Plan Hidrológico Nacional. Son temas donde no ha sido posible el consenso, aunque en cuestiones de agua éste es deseable, y aún necesario, así como el acuerdo y el encuentro, pues el agua es un asunto de Estado.

Esta tarde hablamos de un tema de consenso, de acuerdo, por el cual me felicito. Y al hilo de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular para que el Gobierno respalde ante el Consejo de Europa la aspiración de la Región de Murcia a ser sede del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia, se me ocurren varias reflexiones.

Se ha citado ya que esta propuesta se hizo también mediante moción conjunta de todos los Grupos en la Asamblea Regional y se ha indicado a grandes rasgos la tarea que tiene un instituto euromediterráneo de hidrotecnia en cuanto a los contenidos que no sólo se van a quedar en los campos de la teoría sino que también habrán de tener aplicación práctica, concreta e inmediata en las soluciones que se deriven de la investigación y de la experiencia acumulada de los siglos.

La existencia de un centro que aglutine, estimule y difunda los diferentes estudios y proyectos acerca del agua y la colaboración científica internacional redundará en beneficio de una zona, el Mediterráneo, sometida a una operación antropológica, agrícola, turística e industrial que está cambiando sus características naturales. Hay una labor ingente para este Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia aplicada a lo que supone el consumo humano del agua. El Mediterráneo atrae a sus márgenes a una multimillonaria población estable, a la que se une la presión turística estacional que regenera; hay que buscar las técnicas para el abastecimiento del agua, y no son suficientes los ríos, ni

las aguas subterráneas ni incluso las desaladoras que se están construyendo. Esto genera una serie de vertidos y la depuración de los mismos para su reutilización debe llevar a cabo también un estudio de técnicas que abaraten su coste y se puedan aplicar de una manera más eficaz.

Y qué decir del regadío, el histórico y tradicional regadío de un Mediterráneo, cuyo clima y suelo es adecuado para una agricultura intensiva que necesita agua. Puntos de referencia en este centro van a ser las técnicas de aprovechamiento y ahorro de agua, de las cuales algunas regiones son pioneras; en la industria, algunas consumidoras de gran cantidad de agua y productoras también de gran cantidad de residuos; otro tema que preocupa a todo el Mediterráneo: la prevención de catástrofes en sus dos límites: las inundaciones y las sequías extremas; ese fenómeno al que se ha hecho referencia, que es la desertización, la erosión y, en definitiva, el cambio climático.

Todo ello se engloba en el concepto de desarrollo sostenible, con el presupuesto básico de considerar el agua como un recurso frágil, escaso; y aunque renovable, las provisiones de renovación están condicionadas por la presión que sobre ella se ejerce con más demanda, con insuficientes medidas de depuración y reutilización, y con el agravante de la influencia ejercida por el cambio climático, que sobre todo afecta al sur de Europa, como antes se ha dicho.

En este contexto solicitamos que la sede del Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia sea Murcia, donde ya existe, por cierto, un Instituto Universitario del Agua, que también se ha citado. Pero también lo pedimos porque Murcia, por su tradición y su historia, siempre ha estado ligada al agua; lo estuvo en el pasado, lo está en el presente, y lo estará en el futuro. El agua es, pues, también el futuro de Murcia.

Por tanto, desde nuestra experiencia, nuestra realidad y nuestra historia podemos ofrecer en el momento actual un entorno adecuado para que se estudie todo lo relacionado con el agua. Pero Murcia debe ser considerada en y desde el arco Mediterráneo, donde es conocida la política de la Unión Europea de consolidar relaciones regionales supraestatales con la idea de incentivar la cooperación en cuestiones comunes. En este sentido, desde 1992 las regiones españolas ribereñas del Mediterráneo empezaron a plantearse bases comunes de política territorial. La escasez de agua y la necesidad de que exista una gestión similar son asuntos clave, aunque a nivel europeo los problemas tienen características distintas si se trata de Francia, Italia, o Grecia, y adquieren mayor complejidad si contemplamos el norte de África y aun el Oriente Medio.

La Conferencia de Barcelona sentó bases para la interrelación con esos países mediterráneos, los cuales tienen un rasgo común: a todos les preocupa el agua y tienen una larga trayectoria en lo que a su uso y tratamiento se refiere, aunque lo más conocido sea la experiencia de la regulación del Nilo y las tecnologías punta que se utilizan en Israel; por cierto, adaptadas y aplicadas en Murcia con bastante éxito.

Un centro de investigación y desarrollo como debe ser el Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia tiene que

proporcionar un soporte científico para las decisiones políticas que deben adoptarse a nivel de España, de la Unión Europea y de las relaciones euromediterráneas.

El agua no suele aparecer bien ubicada en los informes europeos sobre ordenación del territorio, agricultura, o turismo, por la diversa incidencia de los recursos hídricos en los distintos países y por la diferente problemática que se genera en cada caso. Pero si la ordenación del territorio se puede considerar como la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad —tal como fue definida en la Carta Europea de Ordenación del Territorio, en 1982—, la planificación territorial se muestra como un instrumento adecuado para el desarrollo interregional; y en ella tiene cabida la planificación hidrológica, que en sus grandes líneas debe ser suprarregional, y en algunos extremos, supranacional.

Se abre, pues, un amplio campo de trabajo para los estudiosos del agua en todo el Mediterráneo. La repercusión de sus investigaciones en otros campos, como la economía y la sociología, dará lugar a expectativas atrayentes; e incluso las decisiones políticas que se tomen en el Mediterráneo habrán de tener en cuenta el agua: la que hay, la que falta, las nuevas fuentes, y la depuración, por supuesto. Por eso también la geoestrategia tendrá que considerarla.

Podríamos seguir enumerando razones y temas que llenan de contenido a un organismo que está llamado a ser el punto de confluencia de todo lo que hasta ahora está disperso en foros locales, desde los cuales emanarán hacia el Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia los conocimientos suficientes para aplicar soluciones eficaces a este problema.

Por todo ello, apoyamos esta moción —con el añadido particular de que yo soy murciano—, y esperamos contar en España, en Murcia, con el Instituto Euromediterráneo de Hidrotecnia.

Muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gallego López.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sepúlveda.

El señor SEPÚLVEDA RECIO: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, agradezco el apoyo de los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

En cuanto al Senador Román Clemente, estoy convencido de que Almería sería una magnífica sede de este Instituto, pero me va a permitir que en este caso arrime el ascua a mi sardina y lo dejemos en Murcia, provincia que, como bien se ha dicho aquí, cuenta con una sensibilidad especial para todo lo relacionado con el agua.

También quiero tener un recuerdo especial para el Senador Gallego, del que sé que lleva mucho tiempo defendiendo todos los intereses del agua de Murcia y, por Murcia, para la región. Desde luego hay algo claro: desde el consenso se pueden conseguir las metas más importantes para todos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Sepúlveda.

Terminado el debate, vamos a pasar a la votación.

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (*Pausa.*) Queda aprobada.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE DECLARA QUE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE PAZ Y VALORES DEMOCRÁTICOS REQUIERE LA RENUNCIA Y LA CONDENA DE LOS ATAQUES, SABOTAJES Y DEMÁS FENÓMENOS QUE CONSTITUYEN LA LLAMADA VIOLENCIA CALLEJERA COMO MEDIO PARA CONSEGUIR REIVINDICACIONES POLÍTICAS, POR LA QUE SE EXIGE A LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES QUE PLANEAN Y REALIZAN TALES ACCIONES EL CESE INMEDIATO DE LAS MISMAS, Y POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS A ESTE RESPECTO (662/000221).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos, a continuación, a debatir la moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se declara que la consolidación de las expectativas de paz y valores democráticos requiere la renuncia y la condena de los ataques, sabotajes y demás fenómenos que constituyen la llamada violencia callejera como medio para conseguir reivindicaciones políticas, por la que se exige a los grupos y organizaciones que planean y realizan tales acciones el cese inmediato de las mismas, y por la que se insta al Gobierno a la adopción de diversas medidas a este respecto.

A esta moción se ha presentado una enmienda por los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senadores Nacionalistas Vascos y Mixto. En consecuencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1 de la norma supletoria de la Presidencia del Senado sobre tramitación de mociones, se entenderá que esta enmienda sustituye a la moción.

Para la defensa de la enmienda a la moción, tiene la palabra, por tiempo de diez minutos, el Senador Rojo.

El señor ROJO GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente.

Cuando el 16 de septiembre de 1998 ETA anunció el alto al fuego indefinido, aquella decisión fue recibida por todos con alivio y esperanza, también con prudencia, porque no era todavía la paz. Por fin llegaba la hora de construir y de normalizar definitivamente la vida política en Euskadi. Pero todos éramos conscientes de que la suspensión indefinida de atentados terroristas se hacía bajo condición de satisfacer las reivindicaciones políticas soberanistas de ETA y con la amenaza implícita en la tregua de volver a cometer atentados, si no había tales concesiones políticas. Esto desgraciadamente es lo que nos ha trasladado ETA en su comunicado el 28 de noviembre.

Han transcurrido 14 meses desde entonces y este tiempo nos ha dejado a todos claro el alcance del alto al fuego que ETA anunció. No fue una tregua completa, sino limitada a la acción directa de otros comandos. No fue una suspensión de todas las formas de violencia practicadas con fines políticos de ETA y las organizaciones de su entorno, sino una suspensión limitada a aquellas de mayor gravedad, como los secuestros y los asesinatos. De este modo continúa ejerciéndose, como ocurría antes de su tregua, violencia contra personas y sectores sociales con fines políticos. No es una violencia que mata, pero sí es una violencia que no deja vivir. Hoy sigue habiendo como antes continuas coacciones y amenazas a ciudadanos del tipo y condición que ellos eligen.

Hasta abril pasado, el país padeció una fuerte oleada de coacciones, amenazas y atentados de violencia callejera, que se interrumpieron tras la Semana Santa, remitieron durante la campaña electoral de las elecciones del 13 de junio, y han vuelto a recrudecerse en las últimas semanas.

El 18 de mayo el «Lehendakari» y los grupos parlamentarios nacionalistas firmaban el acuerdo de bases de colaboración parlamentaria, que contiene un capítulo de principios políticos que tratan de avanzar sobre una apuesta inequívoca por las vías exclusivamente políticas y democráticas: abogar por la desaparición plena de todas las acciones y manifestaciones de violencia y obligación de afrontar las dificultades con el compromiso de que todas las energías, iniciativas y respuestas sean canalizadas a través de procedimientos estrictamente democráticos. Desgraciadamente tampoco esta posición política ha conseguido ser eficaz hasta el momento como las acciones continuas de violencia callejera se encargan de demostrar.

El «Lehendakari» en el Pleno de política general del 24 de septiembre se consideró moral y políticamente obligado a hacer expresa su posición política sobre la violencia callejera. Para ello decía: Es preciso también desterrar definitivamente la práctica de la violencia callejera. No sólo anunció un objetivo, sino que fijó un compromiso: hay que ir a un espacio de ausencia de violencia. La violencia no contribuye, dificulta el proceso político, es una práctica contraria a los derechos humanos; es una práctica que descalifica a quien la ejerce y sus objetivos, que justifican el inmovilismo, que no se corresponde con una apuesta por las vías políticas y democráticas. En definitiva, enfatizaba, cualquier tipo de violencia es éticamente condenable, moral y humanamente rechazable y políticamente injustificable. —Esto lo decía el «Lehendakari», transmitiéndolo a la sociedad vasca—.

Cuando han pasado dos meses, todo lo que el Lehendakari puso de compromiso ha quedado en intenciones, y donde había ilusión ha quedado frustración.

El Pleno del Parlamento Vasco del pasado 5 de noviembre debatió sobre la violencia callejera. No hubo forma de que se llegara a un compromiso entre las fuerzas políticas nacionalistas que apoyan al Gobierno; ni tampoco prosperó un acuerdo entre todas las fuerzas políticas democráticas en la Cámara vasca. No hubo acuerdo en nada. La pregunta sería: ¿Por qué viene fracasando esta política en

la erradicación de la violencia callejera? A mi juicio, porque le faltan referentes de principios. La violencia no es algo que habrá de desaparecer en el futuro como consecuencia de un proceso, sino un factor incompatible con el proceso mismo, si es que se quiere que éste sea democrático.

Me van a permitir que les lea lo que el Diputado General de Guipúzcoa hizo público ante los recientes atentados de violencia callejera: Digan lo que digan, por mucho que hablen de libertad, por mucho que se consideren «abertzales» y «gudaris», por mucho que se refieran al contexto y a no sé qué causas, quienes prenden fuego y queman la libertad de pensamiento, persiguiendo y coaccionando a ciudadanos por su ideología, son fascistas.

Señorías, hoy sigue habiendo, como antes, continuas coacciones y amenazas a cargos públicos para impedirles el libre ejercicio de la representación política de los ciudadanos que los han elegido. Hoy sigue habiendo, como antes, amenazas a sectores sociales y a personas claves en el funcionamiento democrático de la sociedad: a periodistas, para coartar la libertad de información; a jueces y tribunales, para condicionar su independencia a la hora de impartir justicia. Hoy sigue habiendo, como antes, intentos de extorsión a empresarios, bajo amenaza de atentar contra su vida y sus bienes si no contribuyen económicamente a ETA. Hoy sigue habiendo, como antes, coacciones y amenazas a los enseñantes, para impedirles el libre ejercicio en los institutos y en la Universidad. Hoy sigue habiendo, como antes, actos de vandalismo y sabotaje contra sedes de partidos políticos, bienes y establecimientos de cargos públicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y empresas públicas y privadas.

Sabemos, además, que esta violencia con fines políticos obedece a una estrategia planificada, y que la ejecución de ésta, hoy como antes de la tregua, se ha encargado a personas y grupos cuya referencia política está en el entorno de ETA.

Señorías, ETA es la única responsable de la situación de violencia que padecemos y que, desgraciadamente, quiere recrudecer a partir del 3 de diciembre. Esta violencia, señorías, se dirige selectivamente contra quienes no estamos de acuerdo ni con la autodeterminación ni con la soberanía ni con la construcción nacional vasca, entendidas como claves políticas que conducen a la separación de España como meta política en el sentido que la dogmática radical reivindica, y que nos lleva a la ruptura social y no a la convivencia en paz.

Señorías, esta convivencia democrática en Euskadi se viene construyendo y se construirá en el futuro desarrollando el proyecto político de autogobierno que iniciamos con la Constitución Española y con el Estatuto de Autonomía. Por eso, quienes creemos en estos valores, reclamamos nuestro derecho a defender una política autonomista y constitucionalista, con plena libertad, sin sufrir por ello coacciones, amenazas, extorsiones o atentados. Y reclamamos más aún: la protección y el amparo de las instituciones democráticas, del Parlamento y del Gobierno.

La tregua de ETA abrió una importante expectativa en la ciudadanía. Hoy, esa expectativa se ha quebrado, ETA

es la responsable, y también aquellos que secundan sus órdenes.

La posibilidad de que termine la violencia como medio de conseguir reivindicaciones políticas es deseada por todos. Los socialistas no queremos frustrar ni contribuir a frustrar estas esperanzas, pero la tregua no acabó con la violencia —hoy lo sabemos bien—, y no podemos conformarnos con que esto siga siendo así. La violencia debe desaparecer para que el debate político sea libre. Por eso, las expectativas suscitadas en su momento por la tregua de ETA no nos llevaron a ser complacientes con el entorno social que apoya y justifica la violencia, sino muy exigentes. Ellos tienen que asumir que lo coherente con las esperanzas de paz es que también se suspenda definitivamente toda violencia. Y deben desaparecer sin condiciones. Es una cuestión de principios democráticos, de derechos y libertades, que cualquier demócrata debe defender con pasión. Lo contrario, señorías, es fascismo. Cuando partidos políticos deben decidir sus posiciones bajo coacción y amenaza, hay fascismo. Cuando sectores neurálgicos de una sociedad no pueden ejercer su función sin sufrir coacciones o atentados, hay fascismo. Y hoy, en Euskadi, desgraciadamente, señorías, hay fascismo, y los comportamientos y agresiones fascistas los soportamos casi exclusivamente quienes no claudicamos ante las reivindicaciones extremistas.

Por eso, señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista plantea a la Cámara la aprobación de la moción que estamos debatiendo, con las enmiendas que hemos suscrito los grupos parlamentarios, en la que pedimos que el Senado apoye y ampare a todos los ciudadanos coaccionados, amenazados o que se ven amedrentados por el mantenimiento de sus legítimas ideas.

Señorías, lo que se plantea en esta moción es una básica cuestión de libertad, no sólo de seguridad y solidaridad. El libre ejercicio de pensar y expresar como uno quiere es el principio básico de la democracia. Por eso, pido el apoyo de la Cámara y el compromiso de las autoridades competentes para que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos que vienen impidiendo esta libertad.

También se pide una declaración pertinente del Senado para la consolidación de las expectativas de paz, la exigencia de la renuncia y condena de la violencia como medio para conseguir reivindicaciones políticas y, consecuentemente, solicitamos la condena de los fenómenos de violencia callejera, la exigencia de que quienes la practican cesen de inmediato en la misma y que el Estado persiga con diligencia y eficacia tales acciones delictivas que garanticen la libertad y la seguridad de la ciudadanía.

Para ello, señorías, resulta imprescindible la cooperación entre gobiernos, el del señor Aznar y el del señor Ibarretxe, y la de todas las fuerzas políticas democráticas por encima y más allá de que se comparta o no la política.

Señorías, termino pidiendo a la Cámara el apoyo a esta moción. Se lo pido por imperativo democrático, porque más allá de nuestras diferencias políticas lo que reclamamos es libertad, algo que puede resultar incomprensible en una sociedad democrática, pero es una realidad que no podemos obviar.

Señor Presidente, señorías, tienen que saber una vez más los terroristas y quienes les apoyan que no nos resignaremos ni un minuto a sufrir coacciones, amenazas o violencias, que no consentiremos que la sufra nadie por mantener opiniones contrarias al proyecto político de quienes justifican la violencia para conseguir fines políticos, y que pediremos en todo momento que las instituciones protejan la libertad y seguridad de todos. Es un deber el que tenemos como miembros de esta Cámara para con quienes sufren la violencia, y les pido por ello su voto favorable.

Gracias. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Rojo.

Abrimos turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.

El señor ROMÁN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Intervendré con brevedad, pero no por ello con menos intensidad, para mostrar la satisfacción por el acuerdo al que hemos podido llegar todos los grupos sobre este texto para el que se han hecho con generosidad todos los esfuerzos y que refleja el sentir —así lo deseo y espero— de esta Cámara de hacer frente a esta grave situación, y mucho más en unos momentos con una realidad distinta a la que existía en el momento en que se registró la moción.

Por tanto, mis palabras serán, como he dicho antes, breves pero firmes en la defensa de esta iniciativa que todos hemos acordado.

Gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el Senador Zubia.

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor Presidente.

Señorías, la iniciativa que en forma de moción nos trae a este Pleno el Grupo Parlamentario Socialista está en la línea de otras que este mismo Grupo ha presentado en las últimas fechas en distintas instituciones. Recientes son, en este sentido, los debates habidos en el Parlamento Vasco y en el Ayuntamiento de Bilbao, por citar dos ejemplos significativos, que han tenido especial eco en los medios de comunicación.

La base sobre la que se sustentan todas estas iniciativas, y por ende la moción hoy defendida por el Senador Rojo, se halla en la denominada violencia callejera o, si alguno de ustedes lo prefiere, en la no menos conocida «kale borroka».

Ciñéndonos exclusivamente a la iniciativa presentada en esta Cámara, es obligado decir de entrada que poco podía sospechar el grupo proponente el día de su presentación, el 22 de noviembre, es decir, hace tan sólo ocho días, que este debate de hoy se iba a producir en condiciones bien distintas a las que se daban el referido día 22.

Debatimos la moción que nos ocupa en un contexto y unas circunstancias que, desgraciadamente, poco o nada tienen que ver con las de hace ocho días.

El Grupo Socialista presentaba su iniciativa estando plenamente vigente la tregua de ETA, pero su defensa y consiguiente debate tienen lugar en un momento en que esa tregua tiene fecha de caducidad. Es ésta una realidad, una cruda realidad que no puede ocultarse, que debe estar presente en el día de hoy en esa Cámara, y de la que procede dejar constancia.

Me limitaré tan sólo a eso, a poner de manifiesto que la cuestión que centra nuestro debate, la violencia callejera, con toda la gravedad que encierra —que no es poca—, no es que vaya a pasar exactamente a un segundo plano, pero sí pasa a encuadrarse dentro de unas coordenadas en un escenario o marco mucho más amplio, que supera al actual, y que lo hace mucho más inquietante y preocupante.

Este nuevo marco al que me refiero, señorías, nos exige a todos —y lo digo con mayúsculas—, a todos, retomar de forma inmediata cuantos esfuerzos sean necesarios para evitar, no ya que la violencia callejera desaparezca, que también, sino que ETA vuelva a actuar.

No es momento, por tanto, de reproches ni de ahondar en diferencias. Tampoco de resignación. Quedan tres días para llegar a ese 3 de diciembre que todos hemos marcado en nuestro calendario y al que dirigimos permanentemente la mirada. Aprovechémoslos para la reflexión, el análisis y, sobre todo, y ahora más que nunca, para el diálogo.

Pero volvamos, señorías, al contenido estricto del debate de hoy, que es, como decíamos, el de la violencia callejera.

Hace justamente dos meses, con motivo del debate de política general celebrado en el Parlamento Vasco, el «Lehendakari», a la hora de hacer una valoración de la situación del momento y del camino recorrido desde la perspectiva del proceso de paz, señalaba expresamente que veía indicadores positivos de avance más que indicadores negativos. Y precisamente entre los elementos o indicadores negativos, señalaba de manera expresa los brotes puntuales de violencia callejera.

Ya sé que a muchos de ustedes el término «puntuales» utilizado por el «Lehendakari» a la hora de referirse a los brotes de violencia callejera les parecerá excesivamente benevolente, pero, créanme, señorías, nada más lejos de la intención del «Lehendakari» al emplear el mencionado vocablo que minusvalorar u ocultar la gravedad de tales acciones violentas. Lo que el «Lehendakari» quería resaltar era —y esto responde a datos totalmente objetivos y contrastables— que los actos encuadrados dentro de eso que se ha dado en llamar violencia callejera, no sólo no han aumentado desde la declaración de tregua de ETA sino que han disminuido, y que tal disminución se ha producido, además, de manera muy notable y muy considerable.

¿Y qué es lo que ocurre? Pues algo muy simple. Que hasta entonces, hasta la tregua, la acción de ETA eclipsaba en muy buena medida esa violencia callejera, que se movía en un discreto segundo plano —si se me permite la expresión— fundamentalmente por lo que a nivel de medios in-

formativos se refiere. Pero existía —¡vaya si existía!—, y con una virulencia en nada comparable a la de los últimos 14 meses.

Desaparecida por suerte la violencia de ETA, la callejera adquiere un mayor protagonismo que no significa, ni debe confundirse, con un incremento o recrudecimiento de la misma, entre otras cosas porque, como ha quedado dicho, lisa y llanamente no se corresponde con la realidad.

Señorías, precisamente ésta ha sido una de las cuestiones que nos generaban una mayor preocupación en relación con el texto de la moción que ahora debatimos, en tanto que en el mismo se habla —felizmente podemos decir ya se hablaba— de un recrudecimiento de la violencia callejera desde que se celebraron las últimas elecciones autonómicas, lo que era tanto como decir desde el anuncio de la tregua dada la práctica coincidencia de fechas.

Como digo, en el texto final, consensuado entre todos los grupos parlamentarios, ha quedado reflejado este extremo en lo que, sin duda, son sus justos términos, ya que se habla, no ya de recrudecimiento, sino de un fenómeno que persiste.

Podría pasar ahora a referir otras diferencias que manteníamos respecto al texto originario de la moción, pero, vista la disposición del grupo autor de la iniciativa —justo es reconocerlo— y la posición abierta que han mantenido todos los grupos, sin excepción, de esta Cámara a la hora de buscar un acuerdo unánime, no tendría sentido por mi parte hurgar en algo superado que ha quedado felizmente convenido. No es, además, momento —lo decía con anterioridad— de hablar de desencuentros o dudas, sino de acuerdos. En este caso, el acuerdo se ha alcanzado y es pleno.

El texto consensuado viene a recoger el sentir y la posición de los grupos de esta Cámara, incluido el del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Todos, todos hemos aportado algo y todos, todos hemos renunciado a algo, pero éste, y no otro, es el camino.

La moción que dentro de unos momentos vamos a aprobar consta de cuatro puntos, además de su parte introductoria o expositiva. De ésta, de la parte expositiva, tan sólo les diré que, si proceden a la lectura de su primer párrafo, comprobarán que recoge, casi literalmente, el propio discurso del «Lehendakari» en el último debate de política general. El «Lehendakari», tras resaltar la necesidad de profundizar en los textos de distensión y humanización, dedicaba todo un apartado de este capítulo a la violencia callejera. Como el Senador Rojo ha dicho hace un momento, decía: La violencia no contribuye, dificulta el proceso político; es una práctica contraria a los derechos humanos; es una práctica que descalifica a quien la ejerce y sus objetivos, que justifica el inmovilismo y que no se corresponde con una apuesta por vías políticas y democráticas. Añadía: En definitiva, quiero hacer expresa mi posición al respecto de que cualquier tipo de violencia es éticamente condenable, moral y humanamente rechazable, y políticamente injustificable. Palabras éstas nada equívocas del «Lehendakari» que este grupo parlamentario hace suyas y que forman parte, incluso literalmente, de la moción que vamos a aprobar.

En cuanto a la parte dispositiva de la moción finalmente resultante, que consta de cuatro puntos, he de señalar que el primero consiste en una declaración del Senado; viene a ser una especie de compendio de cuanto se contiene en el preámbulo, y a ello se ha referido expresamente el Senador Rojo. Los tres restantes están dirigidos al Gobierno. No voy a entrar ahora en la exposición pormenorizada de su contenido; lo ha hecho ya el grupo autor de la iniciativa y, sin duda, lo harán también quienes me sigan en el uso de la palabra.

Todos ellos, los cuatro puntos, tienen su importancia —lo digo para que no haya dudas— y con todos ellos estamos plenamente de acuerdo. Pero sí deseo referirme, si quiera brevemente y de manera específica, al punto número 3, es decir, a lo que denominamos en el texto consensuado gestos de distensión y humanización y búsqueda de consenso para promover una verdadera cultura de paz. Sin olvidarnos del resto, en este punto depositamos una buena parte de nuestras esperanzas. No podemos, señorías, estar más tiempo anclados en el enfrentamiento dialéctico, y lo ha dicho también el «Lehendakari». Es necesario sustituir la fase de confrontación por una fase de entendimiento; la cultura, si como tal puede considerarse, de la confrontación debe ser sustituida por una cultura de la paz.

Llegado a este punto, señorías, no puedo resistirme a la tentación de leerles íntegramente el mencionado punto 3: Se insta al Gobierno a profundizar en los gestos de distensión y humanización, y a promover buscando el consenso político y la colaboración con las demás instituciones, especialmente las autonómicas, una verdadera cultura de paz, empezando por los comportamientos, las actitudes y los medios empleados en la democracia para la defensa de las ideas, propuestas u opciones de cada cual. ¡Ojalá! seamos capaces de poner en marcha este texto, que dentro de unos momentos vamos a aprobar, desde ahora mismo.

Éste, y no otro, es el deseo de este portavoz y de su grupo parlamentario, que celebra el acuerdo alcanzado aunque el momento no se preste precisamente a celebraciones.

Muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Zubia.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Carrera.

El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en el transcurso de estos últimos días comentaba al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Senador Laborda, si dada la situación actual —con el anuncio del fin de la tregua por parte de ETA— tenía razón de ser el debatir una moción sobre la violencia callejera. Incluso había un párrafo —no digo hay— en la exposición de motivos todavía más explícito, que decía que la situación de violencia así generada es contradictoria con el alto el fuego indefinido declarado por ETA en el mes de septiembre de 1998 y, de persistir, frustrará la oportunidad y expectativas

de paz que aquella declaración suscitó en la sociedad vasca, haciéndolas inverosímiles.

La situación ha variado y las expectativas de paz no dependen ahora de más o menos violencia sino de otras coordenadas bien distintas. Por mi parte, les diría todavía más, que el primer punto de la moción hacía referencia a la consolidación de las expectativas de paz y valores democráticos y sigo creyendo que hablar hoy de que las expectativas de paz pueden variar según la violencia —cuando se ha roto la tregua por parte de ETA— en principio, deja o dejaba a la moción fuera de lugar en el tiempo.

Haciendo un poco de historia les diré que incluso hablé con la Senadora Vindel y ella me comentó la posibilidad de una declaración conjunta o institucional que asumiera el fondo y el espíritu de la moción, y debo decir que, en estos momentos de contactos, yo hubiera apostado claramente por esta declaración institucional —que sin duda asumiera el espíritu de la moción— dado el momento en el que estamos.

Incluso, como recordará el Senador Laborda, apostaba en algunos momentos por el hecho de que se hubiera retirado la moción y, con toda libertad y franqueza parlamentaria, le planteaba si no sería bueno retirarla y promover otro tipo de iniciativa. Me daba la sensación —aunque al final voy a reconocer que no es así— de que cuanto menos interfiramos en estos momentos, aunque sea con pleno derecho porque lo tenemos, en la toma de posiciones, contactos, estrategias y voluntades, será mucho mejor. De todas formas, la situación es la que es, la moción está aquí y, por tanto, mantenemos este debate y su votación correspondiente.

Se han planteado distintas posibles enmiendas, han continuado los contactos a fin de encontrar una posición consensuada y, finalmente, tenemos una enmienda de sustitución, defendida por el Senador Rojo, que parece que vamos a apoyar todos los grupos. Ésta es una situación nueva que me parece que realmente hay que remarcar. Porque no es ésta una cuestión que en estos momentos deba servir para posicionamientos partidistas aunque éstos fueran legítimos.

Por lo tanto, es cierto que todas mis reflexiones anteriores, todas las dudas que he comentado a sus señorías quedan superadas por el texto de esta enmienda de sustitución, al quedar superados estos planteamientos iniciales con la modificación del texto, ya que se habla de la incorporación de la violencia callejera protagonizada por determinadas bandas —que anteriormente no se hacía referencia a ello—; se remarca que persiste todavía en el País Vasco y en Navarra —cosa de la que tampoco se hacía mención—; se hace constar la supresión del alto el fuego por expectativas y por la voluntad de paz existente en la sociedad vasca, se incorpora que deben ser las autoridades policiales y judiciales quienes persigan de oficio estas actividades delictivas, así como los puntos concretos de la moción, en especial el 1, 3 y 4. En cuanto al 1, se habla de incompatibilidad entre valores y principios democráticos y la llamada violencia callejera; en el 3, se dice que hay que profundizar con gestos —y éstos son importantes— y, en el 4, se incorpora que hay que buscar la cooperación eficaz entre las distintas administraciones y que el País Vasco debe

adecuarse al marco de los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad prevista en el artículo 17.4 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Finalmente, con este debate —me permito decir sereno y acotado—, hacemos una buena y ajustada aportación a este momento delicado, pero sigo creyendo que no está cerrado a algunas expectativas de futuro.

Por lo tanto, Senador Zubia, me sumo a este reto, a este grito de responsabilidad que usted ha dejado en esta Cámara para que todos juntos seamos capaces de superar este momento delicado y esta responsabilidad conjunta ayude a estas expectativas de futuro.

Gracias, señor Presidente. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Carrera.

El Grupo Parlamentario Socialista no hace uso del turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Escobar.

El señor ESCOBAR DE LAS HERAS: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, compartimos con quienes me han precedido en el uso de la palabra que es tiempo de consenso, que es tiempo de unidad, y por ello no quisiera apartarme del texto de la moción que vamos a aprobar, del debate sereno y acotado —me parecen certeras esas palabras—, porque, señorías, creemos que el texto final que esta Cámara aprobará ilustra meridianamente la unánime voluntad —y esto es importante— de los partidos aquí representados y, por extensión, en general, a la sociedad.

En nombre de mi grupo —ahora con mayor motivo que nunca—, hemos de ser una sola voz y debemos recoger el clamor de todo un pueblo, de toda una sociedad, y apostar por la paz, y cuando se apuesta por la paz se ha de hacer en toda su dimensión.

Señorías, construir la paz efectivamente implica atajar, perseguir, condenar, con toda la firmeza que sea necesaria, todo tipo de violencia, y todo tipo de violencia incluye por supuesto a la violencia callejera. Y es menester recordar que, desdichadamente, se han producido 413 episodios de violencia callejera en el País Vasco desde aquel lejano 16 de septiembre de 1998. Y en este planteamiento y en este contexto este partido mantiene y mantendrá el más firme compromiso en esa apuesta por la paz desde el consenso, desde la colaboración, desde la firmeza y también desde el marco constitucional.

Pero hablar de paz, señorías, en los municipios vascos es, en primer lugar, reconocer una vez más la extraordinaria labor de todas las administraciones responsables, la cooperación, la colaboración y entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Policía Autónoma Vasca y de los propios partidos políticos. Y en este contexto, es menester traer a esta tribuna este anhelo compartido, hay que poner aquí de manifiesto, recordar y ensalzar, que en la consolidación de la paz hay unos protagonistas principales. Esos protagonistas son, precisamente, las ciudadanas y los ciudadanos de la tierra vasca y, especialmente, aquellos

que, como nosotros, señorías, defienden unas siglas políticas; aquellos que, como nosotros, militan, simpatizan o, simplemente, representan a su gente, que es, en definitiva, lo que nosotros hacemos: representar a la gente que nos ha elegido. Es ocasión de reconocer su ejemplar aportación en la erradicación de la violencia callejera. Y es menester hacer un ejercicio de reconocimiento colectivo a su labor, precisamente porque conviven cotidianamente con la violencia callejera, porque la sufren, muchas veces en silencio, de manera anónima, y porque están pagando diariamente un precio callado para que esa paz titubeante pueda ser una realidad cotidiana en el País Vasco. Es menester, insisto, señorías, rendir un especial tributo a esa gente que, anónimamente, está desafiando diaria y cotidianamente episodios de violencia.

Estas consideraciones nos llevan inevitablemente a lo que aquí se ha planteado, a lo que planea en estos momentos sobre la mente de todos, que es esa preocupación compartida que supone la ruptura de la tregua por parte de ETA. Un hecho que, desdichada y desafortunadamente, nos hace rebasar la letra de esta moción y parece condenarnos a retroceder en el tiempo, en ese tremendo error, como decía el Presidente Aznar.

Señorías, el camino andado, el avance de toda una sociedad, no puede ni debe desmoronarse así como así; muy al contrario, nos corresponde ahora a los aquí presentes, a los Senadores y Senadoras, redoblar los esfuerzos de todos en torno a la libertad, con serenidad, con firmeza, pero también, señorías, con esperanza. Y aunque quizás éste no sea el momento para licencias poéticas, ya que hablamos de andar, yo creo que es bueno, saludable, permitirnos esa concesión a la licencia poética, a Machado, de que se hace camino al andar y que al volver la vista atrás, se ve la huella que nunca se ha de volver a pisar. Es tiempo de caminar juntos y no volver a pisar huellas indeseables.

Es todo, muchas gracias. (*Aplausos.—La señora Presidenta ocupa la Presidencia.*)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

¿La moción enmendada puede entenderse aprobada por asentimiento? (*Pausa.*) Queda aprobada.

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN EN EL SENADO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, A TRAVÉS DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SANIDAD, ANALICE LAS NECESIDADES SOCIALES, NÚMERO Y PERFIL PROFESIONAL DE MÉDICOS ESPECIALISTAS PARA LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS EN ESPAÑA (662/000218).

La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno para que, a través del Consejo Interterritorial de Sanidad, analice las necesidades sociales, número y perfil profesional de médicos especialistas para los próximos diez años en España.

Tiene la palabra el Senador Cardona.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Señorías, en el Pleno celebrado el día 2 de noviembre pasado, el Presidente Rigol decía en su despedida: Aquí todos somos políticos, y los políticos sabemos dónde estamos hoy, pero no sabemos dónde estaremos pasado mañana, porque nuestros cargos son provisionales. De hecho, en democracia los cargos son del pueblo y nosotros vamos pasando por ellos cuando así se nos indica. Y hacía referencia también a que no ejercemos estos cargos simplemente ejerciéndolos, sino que también ponemos parte de nuestros sentimientos.

Pues bien, señora Presidenta, señorías, yo he de ser más consciente, si cabe, de la circunstancialidad del alto honor que sus señorías han hecho al elegirme para este cargo. Déjenme expresarles los sentimientos que me embargan en estos momentos y en los anteriores y decirles que los pondré todos a disposición de la institución para mejor servirlos.

Permitan también que muestre públicamente mi agradecimiento a mi Partido, Unió Democràtica de Catalunya, a la Coalición de la cual formo parte, Convergència i Unió, y, de forma muy especial y particularmente, a mis compañeros de Grupo, y decirles que procuraré estar a la altura del cargo y de mi antecesor en él, el Presidente Rigol.

A todos y cada uno de sus señorías, a todas y cada una de las señoras Senadoras y de los señores Senadores, moltes gràcies, muchas gracias.

Y ciñéndome ya a la moción, tengo que decirles que en un mundo como el actual, con una gran tendencia a la globalización en todos los aspectos y en el que las cosas se suceden con una gran rapidez, el futuro depende de nuestra capacidad de adaptación a los grandes cambios técnicos, sociales, de toda índole, que se preñen de inmediato. Toda sociedad que se precie, tenga autoestima y no quiera perder el tren de la modernidad necesitará tomar decisiones valientes, a su tiempo y razonadas, sobre la base de una buena información y estudios correspondientes pero que la anticipen en lo posible a las nuevas y grandes transformaciones.

Entre los retos a los que hay que hacer frente tenemos el de la formación humana y técnica de nuestros profesionales, que, cimentada en una adecuada base humanística y en adquisición de los conocimientos tecnológicos más avanzados y pertinentes, sería el fundamento para superar situaciones difíciles que representen una forma de ganar el futuro. Tradicionalmente, las dificultades que se han ido superando con una buena formación, siendo suficiente esta condición para encontrar un lugar de trabajo que satisficiera sus legítimas aspiraciones y diera contenido a su vida y dignidad a su personas. A las generaciones venideras, sin embargo, cada vez les será más difícil encontrar un puesto de trabajo que llene sus ambiciones, por muy diferentes motivos, pero, en todo caso, no bastará con un alto nivel formativo. Será menester, hará falta acometer otras medidas de muy diversa índole, ciertamente, pero, si no somos capaces de preparar su futuro, tal vez nos lo puedan criticar y demandar.

Y como ocurre en otros ámbitos, asimismo sucede con las especialidades médicas. En cuanto al proyecto SLIM

de la Comisión Europea, respecto a la simplificación normativa, la incorporación a la libre circulación de médicos originarios del este europeo coincide con el preceptivo e inmediato reconocimiento de títulos. El impacto de esta situación para España dependerá de la capacidad de haber prevenido el ajuste entre la formación de médicos especialistas y las necesidades de médicos especialistas. La incorporación de cinco países del Este de Europa al derecho comunitario de libre circulación de profesionales puede suponer una consecuencia nada parecida a la libre circulación entre los actuales socios de la Unión. Primero, porque las retribuciones de los médicos de estos países del Este son muy inferiores y, segundo, porque el idioma no les será obstáculo alguno, toda vez que las relaciones que durante años han mantenido con países hispanoamericanos les pone en una situación aventajada.

La evolución demográfica y las necesidades sociales cambiantes provocan un desajuste entre la demanda social de prestaciones de salud y los recursos humanos y económicos para atenderlas. Es fácil intuir, por ejemplo, que en los próximos años habrá más demanda de expertos en geriatría que en pediatría, dada la tendencia actual, y natural, al envejecimiento de la población, o de siquiátras para aplicar los planes de salud mental de la Administración.

La demanda social de médicos especialistas, en número y perfil profesional, debe condicionar la estrategia de formación de médicos especialistas, con el objetivo fundamental de adecuar la oferta y la demanda.

Por tanto, es necesario ese encaje racional entre la cantidad de médicos especialistas que se forman y las necesidades de éstos en número para atender la demanda de prestaciones de la sociedad española en los próximos años.

Con un buen análisis de las necesidades de médicos especialistas en los próximos diez años y con la adecuación de las estrategias educativas de pregrado y postgrado a los resultados de este análisis y de sus necesidades, pretendemos conseguir los siguientes objetivos: En primer lugar, prevenir las necesidades de salud de la sociedad española en los próximos diez años, atendiendo a la evolución demográfica y definiendo prioridades. Por tanto, el principal objetivo y el primer motivo debe ser prevenir las necesidades de salud de la sociedad española.

En segundo lugar, adecuar la formación de médicos especialistas a las necesidades de la sociedad previstas en estos próximos años.

En tercer lugar, sustituir una política sanitaria de acomodación a las circunstancias, por una de real previsión de necesidades.

Y en último y cuarto lugar, defender los legítimos intereses de los ciudadanos españoles, eso sí, sin vulnerar los preceptivos compromisos europeos inherentes a la libre circulación de profesionales.

Un posible método operativo podría ser la creación de un grupo de trabajo para el territorio Insalud y uno para cada una de las Comunidades Autónomas que tienen transferida la sanidad. Asimismo, se podría crear un grupo de trabajo coordinador, a nivel estatal, integrado por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Sanidad y Consumo, del Consejo Nacional de

Especialidades, representantes de universidades, en concreto, facultades de medicina, sociedades científicas, etcétera.

Por todo ello, tengo el honor de presentarles, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la siguiente moción: El Senado insta al Gobierno para que, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, analice las necesidades sociales, número y perfil profesional de médicos especialistas para los próximos diez años en España.

Con el convencimiento de que será estudiada detenidamente por todos los grupos y pidiéndoles el voto favorable a la misma, muchas gracias, señora Presidenta, señoras y señores Senadores.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cardona.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora López Garnica para la defensa de la enmienda.

La señora LÓPEZ GARNICA: Muchas gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, quiero felicitar al autor de esta moción por su reciente elección como Vicepresidente Primero de la Cámara. Yo estoy convencida de que estará a la altura de las circunstancias y le deseo toda clase de éxitos por el bien del Senado.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta esta moción, mediante la cual propone al Senado que inste al Gobierno para que, a través del Consejo Interterritorial de Salud, analice las necesidades sociales, número y perfil profesional de médicos especialistas para los próximos diez años en España.

En estos momentos el Grupo Parlamentario Popular somete a la consideración del autor de la iniciativa una enmienda transaccional al texto, cuyo contenido voy a exponer y defender, con la convicción de que va a ser aceptado tanto por el Senador proponente de la moción, como por el resto de los grupos de la Cámara.

En primer lugar, las bases de la formación médica especializada en España se recogen en el Real Decreto 127/84, que regula, tanto dicha formación como el acceso al título de médico especialista. En este Real Decreto se determinan las características del actual sistema de formación, que permite obtener el título de especialista. Deben destacarse dos aspectos: por una parte, el tipo de formación, y por otra, el tipo de acceso a la misma.

En lo que se refiere al proceso formativo hay que señalar que esta formación tiene lugar en centros y en unidades docentes pertenecientes al sistema sanitario que están especialmente acreditados para ello. Esta formación se desarrolla durante un período fijado en el tiempo de práctica profesional supervisada y programada. Asimismo el proceso formativo es supervisado por el personal del propio sistema sanitario. Con respecto a la forma de acceso a la formación especializada, el Real Decreto citado prevé como método general una prueba teórica anual de carácter estatal, que es lo que conocemos vulgarmente como examen MIR. Por otra parte, una directiva de la Comunidad

Europea, la 86/457, refundida en otra directiva, obliga a los Estados miembros a exigir a los licenciados en medicina a partir de 1995 una formación específica en medicina general para todos aquellos que vayan a ejercer como médicos generalistas en el marco de un régimen de Seguridad Social. En España el título que acredita esta formación específica es el de medicina familiar y comunitaria, por lo que se debe abrir, y así se hizo, una posibilidad de una plaza de postgrado en dicha especialidad a todos los licenciados en medicina a partir de 1995, para los que se realiza una prueba de ingreso específica.

En cuanto a su evolución en el tiempo, el número de centros acreditados para la docencia por este sistema MIR ha pasado de los 96 existentes en 1987 a los 227 actuales, y el número de unidades docentes ha pasado de 1.500 a 2.300. En la actualidad, las plazas de formación son, unas 6.145.

De lo expuesto podemos concluir que la legislación actual exige que todos los licenciados en medicina que desean formarse como médicos especialistas o generalistas lo hagan a través de un único sistema formativo que es el sistema MIR. Este sistema de formación, debido a su especial imbricación en el sistema sanitario, tiene como característica limitante, hay que reconocerlo, una marcada falta de elasticidad, lo que podría impedir la absorción de manera rápida por unos excesos de demanda formativa. Por último, el análisis de las tasas de médicos en activo y de nuevos licenciados en países de nuestro entorno refuerza la idea de que es necesario continuar en la trayectoria marcada durante los últimos años de disminución del número de licenciados.

No me voy a extender mucho, pero hay que afirmar que para realizar cualquier estudio de evaluación de necesidades de especialistas habría que definir con precisión los conceptos de oferta y de demanda que habría que manejar en el campo de cada una de las especialidades médicas, con el objeto de llevar a cabo un análisis exhaustivo de la situación real a partir de la cual puedan realizarse los correspondientes estudios proyectivos en el tiempo, siempre de carácter estimativo, lo que implicaría abordar muchas dificultades.

Por estos motivos, se considera que la realización de un trabajo de la naturaleza del que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió plantea, exige la utilización de manera sucesiva y secuencial de un enfoque cuantitativo y de otro posterior cualitativo en el que sería conveniente recabar la colaboración de grupos de expertos que podrían ser, como ya están actuando en este terreno, las comisiones nacionales de las diferentes especialidades médicas y farmacéuticas a fin de matizar los resultados obtenidos de los estudios de oferta y demanda.

Como bien conocerá el Senador Cardona, están llevando a cabo desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, acciones previas a cualquier tipo de estudio exigido por la iniciativa y que son actuaciones de diseño, necesarias para que pueda llevarse a cabo con posterioridad el estudio que demanda su iniciativa.

En cuanto a la determinación de la oferta, que sería ni más ni menos que cuantificar el número de especialistas de

cada especialidad, el Ministerio ya ha mantenido contactos con diferentes subsecciones generales del propio Ministerio así como del Ministerio de Educación y Cultura con el fin de generar un fichero en soporte magnético que contenga una información tan completa como sea posible sobre las titulaciones oficiales de especialidades de que disponen los facultativos españoles en plena actividad. Fruto de estas actuaciones han sido las cesiones del Registro de Médicos Generalistas y del Archivo de Resoluciones conducentes a la expedición de títulos de facultativos especialistas, que están siendo actualmente objeto de fusión y de posterior depuración y, del mismo modo, se han realizado gestiones con objeto de incorporar al fichero que se está elaborando el Registro de Títulos del Ministerio de Educación y Ciencia.

En cuanto a la determinación de la demanda sería, ni más ni menos, que cuantificar las necesidades de médicos en cada una de las especialidades en el horizonte de los diez años que plantea la moción, se están realizando actuaciones previas, como he dicho antes, consistentes en la cuantificación de facultativos en activo en estos momentos en el Sistema Nacional de Salud. Posteriormente, su cuantificación y fusión con los datos determinarán que en el plazo de un año podamos ya contar con un primer documento sobre las necesidades de especialistas que, una vez analizado por las comisiones nacionales de las diferentes especialidades se trasladará, como debe ser, al Consejo Interterritorial de Salud para que inicie una fase de contraste con los datos estandarizados que vayan suministrando tanto el Insalud como los distintos servicios de salud de las Comunidades Autónomas.

Por todo lo expuesto, es criterio de este Grupo que, para que pueda garantizarse con rigor la validez del estudio que se realice, es necesario, antes de someterlo a la consideración del Consejo Interterritorial de Salud, que se concluyan estas actuaciones previas a las que me he referido, por lo que no consideramos oportuno que en este momento se encomiende al Consejo Interterritorial la realización de un nuevo estudio que no haría sino duplicar las tareas y, además, se corre el riesgo de introducir algún grado de confusión.

Además, la orden ministerial anual del Ministerio de la Presidencia, junto con los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas selectivas para el acceso a las plazas MIR, es anualmente informada con carácter previo por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas y por las diversas Comunidades Autónomas. Por tanto, ha de suponerse que éstos habrán analizado, entre otros factores, los que apuntaba el Senador Cardona como base de esta moción.

De una forma explícita, se contempla la intervención del Consejo Interterritorial de Salud en la redacción del Real Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, por el que se regula un procedimiento especial al acceso al título de médico especialista de los médicos sin titulación, también llamados MESTOS; es decir, que ya se ha tenido en consideración por este Consejo uno de los objetos de atención propuestos por el impulsor de la iniciativa.

Por otra parte, España es miembro de un órgano consultivo del Consejo de Europa, que se llama «La Unión

Europea Médica de Especialidades», una de cuyas funciones es realizar estudios demográficos para así recomendar a cada país las necesidades que van teniendo en cuanto a especialistas.

Hay otras actividades parlamentarias, repito que sería muy largo de explicar. Trato de dibujar la realidad; no partimos de cero. Tanto desde el Gobierno como desde el propio Consejo Interterritorial de Salud, desde Europa, desde las propias Cortes Generales se está trabajando en este sentido, y esto es lo que justifica el texto de la enmienda transaccional que, sin más, paso a leer.

Dice así: «El Senado insta al Gobierno para que prosiga los trabajos actualmente en marcha dirigidos a analizar el número, perfil profesional y situación de los médicos especialistas existentes, así como las previsiones para los próximos diez años en cuanto a necesidades de facultativos especialistas, número, perfil profesional, especialidad, ámbito de trabajo, etcétera y para que en el menor plazo posible remita el mencionado estudio de oferta y necesidades de profesionales médicos al Consejo Interterritorial de Salud, al objeto de su estudio y toma en consideración».

Se trata, señorías, de instar al Gobierno a la conclusión de unos trabajos que ya están en marcha en diferentes frentes para posteriormente someterlos a la consideración del Consejo Interterritorial de Salud para la realización de un análisis definitivo sobre las necesidades de médicos especialistas en los próximos diez años en España.

Por todo ello, termino solicitando al Senador Cardona, así como a los demás grupos de la Cámara, que acepten el texto transaccional.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora López Garnica.

Por el Grupo de Convergència i Unió, autor de la moción originaria, tiene la palabra el Senador Cardona.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.

Aunque posteriormente intervendré en el turno de portavoces, en este momento sólo lo hago para anunciar que aceptamos la enmienda.

Nuestra moción no prevé el método que se debe utilizar, y aunque yo me he referido a uno, lo he hecho sólo por apuntarlo. En todo caso, me parece conveniente el sugerido por la Senadora López Garnica, u otro diferente si fuera más operativo.

Por tanto, aceptamos la enmienda ya que no modifica el fondo de nuestra moción.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cardona.

Abrimos turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.

El señor GATZAGAETXEBARRÍA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.

Después de haber escuchado atentamente las intervenciones del Senador por Lleida, señor Cardona, nuevo Vicepresidente Primero, y de la Senadora navarra, doña Rosa López, nuestro Grupo no tiene mucho más que añadir y se incorpora al consenso que ellos han logrado. Nos encontramos nuevamente ante un debate planteado por expertos y técnicos en la materia —como lo son cada uno de ellos en sus respectivos ámbitos de actuación médica—, que han centrado el tema en el escrito inicial del Grupo de Convergència i Unió, con las incorporaciones propuestas por el Grupo Parlamentario Popular.

Consideramos correcta la enmienda de modificación que se ha presentado, ya que plantear en estos momentos al Consejo Interterritorial de Salud la realización de un estudio es una labor nada operativa al encontrarse el Consejo en la fase de terminación de todo su trabajo administrativo. No podemos olvidar que tiene una composición paritaria, ya que está integrado por diecisiete representantes de las Comunidades Autónomas, que están siendo objeto de renovación, y por diecisiete representantes de la Administración central que pueden verse en ese caso, bien gane las elecciones el Partido Popular y llegue un nuevo equipo del Ministerio de Sanidad, bien las gane el Partido Socialista.

Así pues, nos parece más correcto instar al Gobierno a realizar algo que obviamente ya debe estar haciendo, porque en el territorio Insalud debe contar con una previsión sobre las necesidades de asistencia y formación de médicos especialistas. En el País Vasco, donde tenemos competencias exclusivas en lo concerniente a la gestión del personal sanitario, nosotros seremos obviamente los que digamos cuántos médicos especialistas en cada una de las especialidades queremos en nuestros hospitales; y deberemos acudir al mercado de los médicos que han sido objeto de formación a través del procedimiento reglamentado, es decir, el acceso a la formación mediante la superación de las pruebas de médico interno o residente. En ese sentido, en el País Vasco cada dos años y medio o tres se realiza un estudio en el ámbito del Osakidetza como el que aquí se propone. Así pues, nos parece adecuado lo que se solicita a nivel del territorio Insalud. *(El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)*

Pero también vamos a apoyar esta iniciativa porque, no solamente es necesario un encaje entre la necesidad de médicos especialistas y la formación que se debe dar a los médicos que salen de la universidad, sino, además, un debate previo. Así, debemos preguntarnos: ¿cuántos médicos hacen falta? ¿Qué tipo de coordinación o colaboración existe al respecto con las universidades? Por tanto, al instar al Gobierno no sólo estamos instando al Ministerio de Sanidad para que actúe en el territorio Insalud, sino también al Ministerio de Educación, que es el competente en materia de acreditación y expedición de títulos.

Pero hay que contar con un problema añadido en el ámbito de la autonomía universitaria —que en lo concerniente a esa alta inspección ya ha sido transferida a todas y cada una de las Comunidades Autónomas; creo que la úl-

tima ha sido la Comunidad Autónoma de Madrid—, y es hasta qué punto puede incidir el Gobierno en la formación universitaria de licenciados en medicina al existir esa autonomía universitaria, cuyo núcleo esencial podría infringirse de alguna manera si el Gobierno entrara a regularla tangencial o verticalmente. Pero esta Cámara, como reflejo de la soberanía popular, sí tendría algo que decir sobre la necesidad de un encaje en esa fase previa del número de licenciados en medicina que son precisos para atender a las previsiones y a la problemática social y asistencial que tiene en este momento la sociedad española.

Por las consideraciones explicitadas es por lo que nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar la moción con la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular, aceptadas por el de Convergència i Unió.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.

El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente. Quiero agradecer las intervenciones habidas hasta ahora, fundamentalmente la de la Senadora López Garnica.

Voy a hablar sobre los antecedentes de esta iniciativa. A principios del año 1998, en Cataluña se hablaba del temido e inevitable «numerus clausus». Se constituyó una Comisión coordinadora para la orientación de los estudios de la profesión médica, constituida a título personal por el Presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, el señor Miquel Bruguera, el Director General del Instituto de Estudios de la Salud, el señor Albert Oriol, y los rectores de varias universidades de Cataluña, que elaboraron un documento con este título, planteando la necesidad de reducir el número de alumnos matriculados a un ritmo de un 2 por ciento anual en los próximos años, con el fin de que los recién titulados pudieran ser absorbidos por el mercado laboral. Asimismo, el documento propugnaba que la oferta global de plazas en las facultades de medicina en los próximos años se acercase al índice de una plaza por cada diez mil habitantes.

Estoy de acuerdo, por tanto, por completo con la intervención del Senador Gatzagaetxebarría en el sentido de que sería procedente un análisis y un estudio por parte de las Comunidades Autónomas, puesto que ellas son precisamente las que tienen más a su alcance conocer dichas necesidades.

Durante los años sesenta y setenta, en Cataluña, como en el resto de España, se produjo un incremento del número de licenciados, que motivó la instauración de un cierto «numerus clausus», y se consiguió reducir la cifra de 22.000 nuevos estudiantes de medicina por año a los 4.800 aproximadamente de ahora. Sin embargo, esta cantidad está todavía un 15 por ciento por encima de los máximos recomendables y, además, existe un importante número de licenciados en paro o subempleados que no tienen oportunidad de acceder al tan cacareado y único sistema de ac-

ceso a las especialidades de formación de especialistas, como es el MIR.

Otros antecedentes son la constitución de una comisión de formación de posgrado a mediados del año 1998, presidida por el Subdirector del Servicio Catalán de la Salud, en el cual se hablaba de planificación de necesidades futuras de especialistas tanto desde el punto de vista cuantitativo —cuántos médicos harían falta— como cualitativo —el perfil de los profesionales—, teniendo en cuenta también la repercusión sobre los profesionales ya en ejercicio y, sobre todo, en materia de formación continuada, porque de ello depende en gran medida la salud de los ciudadanos, que es lo que nos tiene que merecer mayor preocupación.

También se inició un llamado proyecto sinergia. Se hizo una primera reunión de un comité de expertos, constituida por el propio ex Senador, don Josep María Bertrán, Presidente del Colegio de Médicos de Tarragona, el doctor Viardell, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, el señor don Luis Cavero, Presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y el doctor Gallego de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista, y participaron también representantes del Servicio Catalán de la Salud y del Instituto de Estudios de la Salud.

Tampoco quiero dejar pasar la ocasión de recordar a los miembros de la Comisión de Sanidad y al antiguo portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el Senador Bellido —la Senadora López Garnica también tiene constancia de ello—, los contactos y las conversaciones que tuvimos con el entonces Presidente de la Comisión, el doctor Sainz, buscando la posibilidad de la constitución de una comisión de estudio en el propio Senado o bien otra iniciativa parlamentaria. Ésta es la iniciativa parlamentaria que nosotros proponemos en este momento.

Asimismo, no quiero dejar de reconocer que hay noticias de que el propio Ministerio de Sanidad está realizando estudios propios. La Senadora López ha hecho referencia a estudios previos que pueden ser interesantes en éste sentido, y que pueden suponer un primer paso y el inicio de esa constitución.

Sólo me queda señalar que el propio Subsecretario del Ministerio de Sanidad, el señor Castellón, decía en una revista profesional de este mes de noviembre que sería conveniente tener un registro nacional de médicos, y reconocía que quizá no se planifique con la finura con la que se debería, a causa de la falta de datos, pero se hace. Nosotros podemos saber qué enfermedades van a ser más prevalentes, qué avances técnicos se van a producir, etcétera.

Sólo quiero dejar constancia de esto y, cómo no, agradecer tanto la intervención de los portavoces de todos los grupos como su posición, a expensas de lo que pueda decir el representante del Grupo Parlamentario Socialista, que aún tiene que intervenir.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (AguilarBelda): Gracias, Senador Cardona.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Arjona.

El señor ARJONA SANTANA: Señor Presidente, señoría, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió pide al Gobierno que, a través del Consejo Interterritorial de Sanidad, se analicen las necesidades sociales, número y perfil de los profesionales médicos especialistas para los próximos diez años en España.

Al Grupo Parlamentario Socialista le parece oportuno que se haga esta reflexión, pues todo lo que sea analizar una situación que de hecho se produce o puede producirse en el inmediato futuro puede y debe ser estudiada para buscarle soluciones. Ahora bien, creemos que se exagera cuando se plantea poco menos que una invasión pacífica de médicos de países del Este, incorporados al Derecho Comunitario, por la libre circulación de profesionales.

Creemos que estar en Europa tiene grandes ventajas, pero puede tener algunos inconvenientes. En este caso, lo necesario es estudiar con profundidad, que es el planteamiento que se trae a la Cámara, las ventajas e inconvenientes de la incorporación de esos profesionales médicos en el ámbito de nuestro país, de forma que podamos adaptar lo mejor posible la oferta y la demanda que se produzca.

Hay que argumentar en favor de ese estudio las nuevas necesidades que tenemos de especialidades o subespecialidades en patologías o situaciones que se derivan de la evolución demográfica. Así, es una realidad que hoy posiblemente sea muy amplio el número de pediatras y ginecólogos que podemos tener debido a nuestra baja natalidad, y sea ya escaso el número de geriatras, reumatólogos, oncólogos o neurólogos debido a nuestras altas expectativas de vida y a la necesaria mejora de esa calidad de vida y de un número muy importante —y cada vez lo es más— de población por asistir.

Creemos, por supuesto, que es importante estar preparados para cubrir las necesidades de la sociedad española que se están demandando en un campo tan importante como el de las especialidades médicas, así como adecuar los contenidos y la formación de los médicos para que puedan cubrir esa demanda que seguro se va a producir.

De cualquier forma, quisiéramos conocer —hoy aquí ya hemos conocidos algo— qué es lo que llevaba avanzado el Gobierno en este campo y si tenía algún trabajo o estudio al respecto. Nosotros creemos que era absolutamente necesario conocer esa cuestión, y hoy hemos tenido un avance que ha presentado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Lo que conocíamos hasta ahora era el estudio más profundo que se ha realizado en este campo, que se llevó a cabo en el año 1984, siendo Ministro Ernest Lluch, y que creemos que hasta ahora había dado un buen juego.

De cualquier manera, es bueno programar y atender las necesidades que tenemos. Así, desde el Grupo Socialista pensamos que aun considerando que es necesario el análisis de las necesidades que plantea la moción, tendrá pocas o nulas consecuencias porque, a estas alturas de la legislación, sea cual sea el acuerdo que adoptemos, el destino de la moción, posiblemente, será su decaimiento y habrá que volver a traerla a la Cámara en la próxima legislatura.

En la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Popular se plantea que se prosigan los trabajos que ya están en marcha —nos alegramos hoy de haber conocido esos trabajos, porque no teníamos noticia de los mismos— en el menor plazo posible, pero no existe ningún plazo posible para iniciar ese estudio puesto que, como decía anteriormente, la legislatura está terminada y no tendremos oportunidad de poner en marcha lo que aquí aprobemos hoy.

En todo caso, nuestro Grupo va a votar a favor por las consideraciones anteriormente expuestas y por creer positivo que este tema en concreto sea tratado, debatido y, como va a ocurrir en este caso, aprobado en esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Arjona.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora López Garnica.

La señora LÓPEZ GARNICA: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al Senador Cardona la aceptación del texto transaccional, así como el talante y el contenido de las intervenciones de todos los portavoces.

Quiero comentarle al Senador Gatzagaetxebarría que el contenido de esta moción no hace referencia al número de licenciados en medicina. Como ha expuesto el Senador Cardona, ya se han implantado hace años, con carácter más o menos general, aunque de manera desigual, los «*numerus clausus*», lo que ha hecho disminuir el número de licenciados por año. Por el contrario, la moción se refiere a la formación de especialistas, lo que no tiene que ver con la autonomía universitaria, puesto que este programa se hace exclusivamente en centros hospitalarios acreditados al efecto.

Creo que es importante que, aunque sea en las postrimerías de la legislatura, esta Cámara haya adoptado un acuerdo con una visión de futuro que adelanta a nuestra sociedad a las posibles necesidades y se puede llegar con esto a hacer una estimación prospectiva en un plazo no superior a diez años, porque tampoco es aconsejable un plazo mayor por las variaciones demográficas.

En cuanto a lo que comentaba el Senador Cardona de no asustarnos por la invasión de médicos de países del Este, en realidad no he hecho comentarios sobre el argumento que el Senador Cardona ha utilizado en la explicación de su moción debido a que desde el año 1986, fecha en que España entró en la Comunidad Económica Europea, ha habido alrededor de unas 900 solicitudes de médicos de la Unión Europea, es decir, no ha habido una gran invasión y, por lo tanto, no se prevé lo contrario.

Los argumentos que exponía el Senador Cardona en la moción quizá estaban un tanto confusos, de alguna manera entremezclados, pero nosotros los hemos tomado en consideración porque solamente el factor demográfico, la evolución demográfica, es razón suficiente como para que España haga un estudio de este tipo.

En todo caso, quiero mostrar a todos los portavoces y a la Cámara mi satisfacción, ya que en esta mi última inter-

vención en el Pleno de la Cámara —por lo menos de momento, porque tal y como decía el Senador Cardona los políticos sabemos dónde estamos hoy, pero no sabemos dónde vamos a estar pasado mañana—, se ha conseguido de todos los portavoces este consenso y que hayamos elaborado una moción que mire al futuro porque, como decía el Senador Cardona, cualquier sociedad que se precie y que tenga autoestima debe mirar al futuro y más, desde luego, en el tema de la atención sanitaria a nuestros ciudadanos.

Muchas gracias. (*Aplausos.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora López Garnica.

Por las intervenciones que han tenido en el debate, ¿se puede aprobar por asentimiento? (*Pausa.*)

Queda aprobada por asentimiento la moción con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— PROTOCOLO, HECHO EN COPENHAGUE EL 17 DE MARZO DE 1999, POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y DINAMARCA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN COPENHAGUE EL 3 DE JULIO DE 1972 (S. 610/000266) (C. D. 110/000267).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Pasamos al punto quinto del orden del día: Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados. Protocolo, hecho en Copenhague el 17 de marzo de 1999, por el que se modifica el Convenio entre España y Dinamarca para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Copenhague el 3 de julio de 1972.

En relación con este Protocolo, no se han presentado propuestas dentro del plazo señalado al efecto.

¿Desea intervenir algún grupo parlamentario? (*Pausa.*)

Tiene la palabra el Senador Carrera.

El señor CARRERA I COMES: Muchas, gracias, señor Presidente. Voy a intervenir con suma brevedad.

Tal y como manifestamos en la Comisión correspondiente en la sesión celebrada el jueves pasado, el redactado actual de este Convenio comporta, a nuestro entender, un gravamen económico para los funcionarios de Embajada de España en Copenhague. Este debate lo mantuvimos en la Comisión y, además, todos los grupos estábamos de acuerdo en que realmente había que intentar resolver esta problemática.

Es cierto que en el transcurso de toda esta tramitación ha habido intentos para solucionarlo. Hubo contactos e intentos a todos los niveles para ver si existía la posibili-

dad de que este asunto se pudiera resolver, pero no ha sido así. Por otra parte, entendemos que tampoco resulta del todo fácil, y por eso mismo dejamos constancia de ello. Pero también es cierto que el problema continúa existiendo y que, por tanto, la solución final aún no ha llegado.

Sobre la base de todo lo que acabo de exponer, nuestro Grupo Parlamentario se va a abstener en la votación de este Convenio.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene la palabra el Senador González Laxe.

El señor GONZÁLEZ LAXE: Muchas gracias, señor Presidente.

En la misma línea del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, nuestro Grupo considera que el problema continúa ahí. Hemos dado un plazo de tiempo para que se pudiera solucionar la demanda que plantean funcionarios no pertenecientes al Cuerpo Diplomático y un grupo de personal laboral no perteneciente al cuerpo Diplomático que trabajan en los distintos servicios de la Embajada de España en Copenhague.

Por tanto, en la medida en que todavía no está solucionado ese problema, debo anunciar que nuestro Grupo también se va a abstener en la votación.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador González Laxe.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Morales.

El señor MORALES MONTERO: Señorías, en aras de la brevedad voy a contestar desde el escaño.

Como ustedes saben muy bien, ya en Comisión mantuvimos nuestro criterio, y manifestamos que comprendemos el problema de esos funcionarios y personal laboral que trabajan en nuestra Embajada, pero tengo que decir que la cuestión que en este momento nos ocupa se ha planteado con posterioridad a que sus compañeros en el Congreso, señorías, votaran en favor de la ratificación de este Convenio. Por tanto, ha sido ya ratificado en la otra Cámara.

El Grupo Parlamentario Popular entiende el problema y por eso mismo se ha propuesto resolverlo, pero como sus señorías han reconocido, no se puede resolver de inmediato. Se trata de un problema económico que posiblemente se podrá solucionar en la próxima legislatura. Repito que nosotros comprendemos el problema y reconocemos que tienen ustedes razón.

Pero yo quiero pedirles a sus señorías, que reflexionen en que esta circunstancia no es sólo de Dinamarca sino también de todos los países nórdicos: Suecia, Noruega, etcétera.

Señorías, ustedes saben que no es normal la no ratificación de un convenio debido a problemas —llamémosles— de índole doméstica. Por tanto, nuestro Grupo va a ratificarlo, eso sí, con el convencimiento de que vamos a solu-

cionar el problema de esos empleados públicos y laborales. Tengan ustedes la completa seguridad de que el Grupo Parlamentario Popular va a intentar resolverlo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Morales.

Vamos a votar la concesión de autorización del citado protocolo.

Se inicia la votación. (*Pausa.*)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 122; en contra, uno; abstenciones, 93.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): En consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado protocolo.

— HABILITACIÓN DE TODOS LOS DÍAS Y HORAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1999 (550/000032).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Quiero comunicar a sus señorías que la Mesa del Senado, en sus reuniones de los días 23 y 30 de noviembre de 1999, oída la Junta de Portavoces, ha acordado solicitar al Pleno la habilitación de todos, los días del mes de diciembre de 1999 para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2000, así como la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social y cuantas iniciativas tengan entrada en la Cámara o puedan ser incluidas en la sesión plenaria que comienza el día 13 de diciembre.

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (*Pausa.*)

Queda aprobado.

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

— CONVENIO CELEBRADO CON ARREGLO AL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, SOBRE LA COMPETENCIA, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA MATRIMONIAL, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE MAYO DE 1998, Y DECLARACIONES QUE EFECTUARÁ ESPAÑA AL MISMO (S. 610/000271) (C. D. 110/000272).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Convenio celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, hecho en Bruselas el 28 de mayo de 1998, y Declaraciones que efectuará España al mismo.

No se han presentado propuestas en relación con este convenio.

¿Algún grupo desea intervenir? *(Pausa.)*

¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? *(Pausa.)*

Queda aprobado.

— PROTOCOLO CELEBRADO CON ARREGLO AL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DEL CONVENIO SOBRE LA COMPETENCIA, EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES EN ASUNTOS MATRIMONIALES, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE MAYO DE 1998, Y DECLARACIONES QUE EFECTUARÁ ESPAÑA AL MISMO (S. 610/000272) (C. D. 110/000273).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo celebrado con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en asuntos matrimoniales, hecho en Bruselas el 28 de mayo de 1998, y Declaraciones que efectuará España al mismo.

No se han presentado propuestas en relación con este protocolo.

¿Algún Senador desea intervenir? *(Pausa.)*

¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? *(Pausa.)*

Queda aprobado. En consecuencia se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento y obligarse por medio del citado protocolo.

— SEGUNDO PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, HECHO EN BRUSELAS EL 19 DE JUNIO DE 1997, Y RESERVA QUE FORMULARÁ ESPAÑA AL MISMO (S. 610/000273) (C. D. 110/000274).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Segundo Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 19 de junio de 1997, y Reserva que formulará España al mismo.

No se han presentado propuestas en relación con este Protocolo.

¿Algún grupo desea intervenir? *(Pausa.)*

¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? *(Pausa.)*

Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado Protocolo.

— TEXTO REVISADO DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA, HECHO EN ROMA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1997 (S. 610/000274) (C. D. 110/000275).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Texto revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitarias hecho en Roma el 18 de noviembre de 1997.

No se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? *(Pausa.)*

¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? *(Pausa.)*

Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado texto.

— PROTOCOLO DE ENMIENDA A LA CARTA SOCIAL EUROPEA, HECHO EN TURÍN EL 21 DE OCTUBRE DE 1991 (S. 610/000275) (C. D. 110/000276).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo de enmienda a la Carta Social Europea, hecho en Turín el 21 de octubre de 1991.

Tampoco se han presentado propuestas en relación con este Protocolo.

¿Algún grupo desea intervenir? *(Pausa.)*

¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

¿Puede entenderse aprobado por, asentimiento? *(Pausa.)*

Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Protocolo citado.

— PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, DEL CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, HECHO EN DUBLÍN EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996 (S. 610/000276) (C. D. 110/000277).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996.

No se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? *(Pausa.)*

¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? *(Pausa.)*

Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Protocolo citado.

— ACUERDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HECHO EN CIUDAD DE MÉXICO EL 3 DE DICIEMBRE DE 1998 (S. 610/000277) (C. D. 110/000278).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Acuerdo de cooperación económica y financiera entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, hecho en Ciudad de México el 3 de diciembre de 1998.

Tampoco se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? *(Pausa.)*

¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? *(Pausa.)*

Queda aprobado. En consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo citado.

— PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, CON CARÁCTER PREJUDICIAL POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DEL CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Y DECLARACIÓN RELATIVA A LA ADOPCIÓN SIMULTÁNEA DEL CONVENIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DEL PROTOCOLO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN CON CARÁCTER PREJUDICIAL, POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DE DICHO CONVENIO, HECHOS EN BRUSELAS EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1996, Y DECLARACIONES QUE EFECTUARÁ ESPAÑA A AQUÉL (S. 610/000278) (C. D. 110/000279).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación, con carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y Declaración relativa a la adopción simultánea del Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y del Protocolo relativo a la interpretación con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de dicho Convenio, hechos

en Bruselas el 29 de noviembre de 1996, y Declaraciones que efectuará España a aquél.

No se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? *(Pausa.)*

¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? *(Pausa.)*

Se aprueba y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado Protocolo.

— ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA, HECHO EN PRETORIA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1998 (S. 610/000279) (C. D. 110/000280).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Sudáfrica, hecho en Pretoria el 30 de septiembre de 1998.

Tampoco se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? *(Pausa.)*

¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? *(Pausa.)*

Se aprueba y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo citado.

— CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DE LA LETRA C) DEL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA LUCHA CONTRA LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LOS QUE ESTÉN IMPLICADOS FUNCIONARIOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS O DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, FIRMADO EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 1997, ASÍ COMO RESERVA Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR AL MISMO (S. 610/000280) (C. D. 110/000281).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, firmado en Bruselas el 26 de mayo de 1997, así como Reserva y Declaración que España va a formular al mismo.

No se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? *(Pausa.)* ¿Turno de portavoces? *(Pausa.)*

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? *(Pausa.)*

Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado Convenio.

— CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y CHINA SOBRE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO SOBRE TRANSPORTE AÉREO CIVIL ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, HECHO EN PEKÍN EL 19 DE JUNIO DE 1978 (S. 610/000281) (C. D. 110/000282).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre España y China sobre modificación del Convenio sobre transporte aéreo civil entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China, hecho en Pekín el 19 de junio de 1978.

No se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? (*Pausa.*)

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (*Pausa.*)

Se aprueba y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado Canje de Notas.

— ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MOLDOVA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN VARSOVIA EL 20 DE MAYO DE 1999 (S. 610/000282) (C. D. 110/000283).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Moldova sobre transporte internacional por carretera, hecho en Varsovia el 20 de mayo de 1999.

No se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? (*Pausa.*) ¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (*Pausa.*)

Así se acuerda y, en consecuencia, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Acuerdo citado.

— CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ESLOVACA SOBRE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, HECHO EN BRATISLAVA EL 3 DE MARZO DE 1999 (S. 610/000283) (C. D. 110/000285).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Eslovaca sobre la cooperación en materia de la lucha contra la delincuencia organizada, hecho en Bratislava el 3 de marzo de 1999.

No se han presentado propuestas.

¿Algún grupo desea intervenir? (*Pausa.*)

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (*Pausa.*)

Se aprueba y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del Convenio citado.

— PROTOCOLO ADICIONAL A LA CARTA SOCIAL EUROPEA, HECHO EN ESTRASBURGO EL 5 DE MAYO DE 1998 (S. 610/000284.) (C. D. 110/000286).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1998.

No se han presentado propuestas.

¿Algún Grupo desea intervenir? (*Pausa.*)

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (*Pausa.*)

Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del protocolo citado.

— PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO CON RESPECTO A LAS APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA Y LA MEDICINA, POR LA QUE SE PROHÍBE LA CLONACIÓN DE SERES HUMANOS, HECHO EN PARÍS EL 12 DE ENERO DE 1998 (S. 610/000285.) (C. D. 110/000287).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, por la que se prohíbe la clonación de seres humanos, hecho en París el 12 de enero de 1998.

No se han presentado propuestas a este convenio.

¿Algún Grupo desea intervenir? (*Pausa.*)

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (*Pausa.*)

Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del protocolo citado.

— CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDE-

RACIÓN DE RUSIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MOSCÚ EL 17 DE MAYO DE 1999, Y NOTAS VERBALES DE FECHA 13 Y 27 DE JULIO DE 1999 MEDIANTE LAS QUE ESPAÑA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA HAN PROCEDIDO A SUBSANAR UN ERROR OBSERVADO EN LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL ARTICULO 2.3 DEL CITADO CONVENIO (S. 610/000286.) (C. D. 110/000284).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Moscú el 17 de mayo de 1999, y Notas Verbales de fecha 13 y 27 de julio de 1999 mediante las que España y la Federación de Rusia han procedido a subsanar un error observado en la versión española del artículo 2.3 del citado Convenio.

No se han presentado propuestas a este Convenio.

¿Algún Grupo desea intervenir? (*Pausa.*)

¿Turno de portavoces? (*Pausa.*)

¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (*Pausa.*)

Queda aprobado por asentimiento y se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del citado Convenio.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:

— PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA ASISTENCIA Y AMPARO DE LOS ESPAÑOLES PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL EXTRANJERO (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) (622/000015).

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Punto sexto del orden del día, toma en consideración de proposiciones de Ley del Senado. Proposición de Ley para la asistencia y amparo de los españoles privados de libertad en el extranjero, del Grupo Parlamentario Socialista.

No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa.

Para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Díez.

El señor DIEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, en el pasado período de sesiones se trató de llegar a un acuerdo parlamentario con todos los grupos de la Cámara que hiciese posible la toma en consideración de esta proposición de ley. No fue posible.

En éste penúltimo Pleno de la legislatura quisiéramos llegar a un acuerdo que permita abordar en la próxima legislatura la mejora de la asistencia de los españoles privados de libertad en el extranjero con la aprobación de esta proposición de ley.

El trámite previsto en los Reglamentos del Congreso y del Senado, como sus señorías conocen, permite tramitar una proposición de ley con la participación de todos los grupos parlamentarios con el mismo procedimiento que el establecido en un proyecto de ley del Gobierno, es decir, con presentación de enmiendas, y poder modificar y adecuar en interés de todos los grupos a través de un consenso que podía permitir someter a la consideración del Parlamento una situación importante para muchos ciudadanos españoles en prisión y para sus familias.

En el último Pleno del Senado vamos a discutir un texto importante que hace referencia a los inmigrantes en España, partiendo precisamente de una proposición de ley que en su día presentó en el Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió, que permitió a lo largo de esta legislatura que todos los grupos parlamentarios pudiesen hacer aportaciones.

Por lo tanto, éste es el interés y la intención del Grupo Parlamentario Socialista al presentar el 26 de febrero esta proposición de ley para que pudiera ser discutida y poder llegar a un acuerdo parlamentario.

El artículo 25.2 de la Constitución Española reconoce que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, a la vez que concede determinados derechos fundamentales a los condenados. En virtud de tales principios fue redactada la normativa vigente en materia penitenciaria, como es la Ley Orgánica General Penitenciaria, y como posteriormente se ha venido desarrollando con los Reglamentos penitenciarios que hacen posible el desarrollo de esa importante Ley Orgánica. Deseo referir a sus señorías que esta Ley Orgánica es la primera que se aprueba en las Cortes Generales después de aprobada la Constitución. No obstante, dicha normativa no regula la singular situación de los nacionales españoles privados de libertad en el extranjero. Ante el aumento progresivo de las personas en esta situación, urge la necesidad de la presente proposición de ley para que los referidos principios constitucionales y legales se extiendan a dicho colectivo de afectados, de manera que los poderes públicos españoles y sus representaciones diplomáticas u oficinas consulares les asistan y les amparen.

La labor asistencial y de ayuda previstas en la presente proposición de ley tienen como fin primordial velar por los derechos humanos de los nacionales españoles en el ámbito penitenciario de países extranjeros, contribuyendo con ello en las tareas de reeducación, reinserción y resocialización de los detenidos o reclusos, en virtud de sentencias que contemplan penas y medidas de seguridad privativas de libertad. El contenido de la proposición de ley, por lo tanto, lleva al ámbito de la responsabilidad de las oficinas consulares o de la Administración española en el exterior una serie de disposiciones generales, que abarcan el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación, las autoridades competentes, el respeto a la soberanía y leyes del país de condena, la asistencia y amparo de los españoles privados de libertad en el extranjero, la regulación del uso de los datos de carácter personal, el ingreso en un estableci-

miento penitenciario, la ubicación en el centro de detención o penitenciario, la agrupación de los presos españoles, los servicios durante la privación de libertad y las necesidades básicas, la asistencia sanitaria, los medios de información y cultura, los paquetes y encargos, los objetos personales, la transferencia de fondos, la colaboración con la asistencia jurídica, los registros y cacheos, las comunicaciones y visitas, la comunicación y acceso con los afectados, la comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores español, las gestiones consulares a favor de los condenados, el Libro de Registro de Visitas, la periodicidad de las visitas, el plan de visitas, la información facilitada a las personas privadas de libertad, las peticiones y quejas ante la Administración penitenciaria, las entidades colaboradoras, las medidas de seguridad y medidas disciplinarias, y el tratamiento penitenciario. En definitiva, un conjunto de artículos que terminan con los servicios de Seguridad Social, la solicitud de traslado, el procedimiento de traslados, gastos del traslado, etcétera. En total, 46 artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final.

Recientemente, el Consejo General de la Emigración, reunido en Madrid los pasados días 15, 16 y 17 de noviembre, representativo, como sus señorías conocen, de 1.500.000 españoles residentes en el extranjero, aprobó por unanimidad una resolución que afectaba precisamente a la necesidad de atención a los ciudadanos españoles privados de libertad en el extranjero. No es casual que sea el Consejo General de la Emigración, es decir, los representantes de los ciudadanos españoles que están residiendo fuera de España, quienes se preocupen por una realidad como es la de nuestros compatriotas que están en dificultades. Dificultades que en gran medida son atendidas por los representantes de ese Consejo de la Emigración en el exterior, en comunicación directa con nuestras autoridades consulares y con nuestra representación diplomática en el exterior. Este Consejo General de la Emigración también se preocupaba por la situación de estos nacionales españoles y planteaba la necesidad de una norma legal que permita resolver los problemas no resueltos por la Ley General Penitenciaria, en aspectos y capítulos muy importantes, pendientes de resolución en estos momentos, que afectan, lamentablemente, cada día a un mayor número de familias y ciudadanos españoles.

De ahí que, a la vista de que no se ha presentado ninguna proposición alternativa, pidamos un gesto en este penúltimo Pleno de esta legislatura, que permita abordar en la próxima legislatura un problema nuevo que las Cortes Generales tienen la obligación de abordar porque, en definitiva, con esta proposición estamos atendiendo a una situación de manera que se tienda a garantizar los derechos constitucionales y legales de los nacionales privados de libertad en el extranjero, que coinciden con los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos.

Y en ese sentido, espero de sus señorías un apoyo a esta proposición de ley, que no es otra cosa que buscar abordar un problema latente de la sociedad española, aunque nuestros nacionales estén en prisión fuera de España.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Díez.

Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Vin-del.

La señora VINDEL LÓPEZ: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna para consumir un turno en contra de la hipoteca parlamentaria que nos acaba de presentar el Senador Díez.

La proposición que acaba de defender desde esta tribuna el Senador Díez para la asistencia y amparo de los españoles privados de libertad en el extranjero obedece, es cierto, a un muy loable propósito y a una motivación, señorías, digna de todo aprecio, porque lo que intenta es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos españoles, ya sean detenidos, presos o condenados en el extranjero, y garantizar, además, la plena efectividad de sus derechos fundamentales, incluso fuera de nuestro país.

En el Grupo Popular nos hubieran gustado dos cosas: En primer lugar, nos hubiera gustado que esta proposición de ley —transcendental, desde luego— hubiera venido acompañada de los requisitos que exige el artículo 108 del Reglamento. Y, además, también nos hubiera gustado que se hubiera elaborado —como así quedamos— un texto por consenso, pero luego, al final de mi intervención, me referiré a él. (*El señor Vicepresidente, Cardona i Vila, ocupa la Presidencia.*)

En cuanto a toda esta panoplia de artículos, repartidos en tres títulos, dos disposiciones adicionales y una final, quiero decir, en relación con su contenido, que es necesario tener muy presente, a la hora de tramitar esta proposición, el principio de territorialidad, de forma que los ciudadanos españoles detenidos, procesados y condenados en el extranjero están plenamente sometidos a la legislación del país en que se encuentran. No es posible, por lo tanto, desde un punto de vista técnico, aplicar en ningún aspecto el ordenamiento jurídico español.

Así, por lo tanto, resulta muy dudosa la eficacia de una norma que lo que pretende es incidir en cuestiones propias de la política penitenciaria de países extranjeros. Me estoy refiriendo a las condiciones de la prisión —artículos 6 y 7 de la proposición—, al agrupamiento de presos españoles —artículo 8—, a las medidas de seguridad y disciplina —artículo 27— y al tratamiento penitenciario —todo el título III—, cuando, además, la propia iniciativa del Grupo Socialista reconoce esta misma limitación ya en el artículo 3 de esta proposición.

Además, algunos de sus artículos son innecesarios, señorías, porque se refieren a derechos ya reconocidos en otras normas vigentes del ordenamiento, por ejemplo, el artículo 4, que se refiere al respeto de los españoles y a los derechos de los españoles y al principio de igualdad; o, si lo prefieren, el artículo 5, uso de datos de carácter personal; o, si prefieren, el artículo 18 y siguientes y concordantes, actuación de los órganos consulares; o, por ejemplo —se me ocurre sobre la marcha—, el artículo 38, solicitud de medidas de gracia; y, por último, en este apartado de artículos completamente innecesarios, el artículo 40, sobre la libertad condicional. Esto sólo por citar unos cuantos de

los 46 artículos, por lo que se refiere a los que son innecesarios.

Pero es que, además, hay otros que presentan graves deficiencias técnicas e imprecisiones o presentan un detalle más propio de un reglamento. Por ejemplo, señorías, el artículo 7.2. Este artículo es el relativo a españoles privados de libertad que tengan hijos menores de edad, de cuyo traslado a España deberá hacerse cargo la representación diplomática española. Pero el texto presupone que ese menor también es español que, además, no existen parientes en el país de condena, ni hay oposición por parte de las autoridades locales a que ese menor salga; no exige el consentimiento de la persona detenida, ni tampoco contempla el supuesto de que no sea el padre o la madre, sino que sea un simple tutor. O, si lo prefieren sus señorías, otro ejemplo, también en este artículo 7, pero en su número 3, que otorga al representante diplomático o consular unas funciones cuasi jurisdiccionales, al establecer que, en caso de conflicto entre los cotitulares de la patria potestad de un menor de tres años, será dicho representante —el consular— quien decida si el menor debe permanecer en prisión con el progenitor o se le traslada a España, nada más, señorías, y nada menos.

Pero, además, la inexigencia del consentimiento del detenido también aparece en otros artículos, que, si se interpretan literalmente, van en contra de sus derechos a la libertad y a la intimidad y, por tanto, podrían ser tachados desde ya como inconstitucionales, como, por ejemplo, el artículo 12, en cuanto a la recepción de paquetes por la Oficina Consular o el artículo 21, que se refiere al Libro de Registro de Visitas de los afectados o, si lo prefieren, el artículo 44, que concede el derecho a solicitar el traslado a España para el cumplimiento de la condena. Y cito textualmente con comillas: «En caso de no existir Convenio.» Se cierran las comillas.

Precepto, señorías, difícilísimo de entender, porque los traslados para el cumplimiento de condena se fundamentan en la existencia de un convenio bilateral o multilateral que los regule, pero si no lo hay no hay traslado.

Para el excesivo nivel de detalle, yo les remitiría, señor Presidente, señorías, al artículo 9, que, en sí mismo, es contradictorio con el número 3. Pero, además, en virtud de esta proposición y de este despropósito, las Oficinas Consulares quedarían transformadas en servicios sociales penitenciarios, algo, desde luego, para lo que no están concebidas ni permitidas en un país extranjero. Por otra parte, desde aquí tampoco pueden regularse las condiciones penitenciarias en el extranjero.

Y, finalmente, en cuanto a nuestra oposición de fondo, les diré que, además, esta proposición de ley supone conceder —fíjense qué ironía— más derechos a los presos españoles en el extranjero que en cárceles españolas. Ni más, ni menos.

Aprovechando, señor Presidente, que me queda algo de tiempo, quiero hacer referencia a un par de cosas que ha manifestado el Senador Díez.

En primer lugar, permítanme, señorías, que les refresque la memoria. Esta proposición de ley fue retirada en mayo de 1991, en virtud de un consenso, al cual todos di-

jimos sí. Posteriormente, fue incluida dos veces en el orden del día de sucesivos Plenos y, por tanto, fue también retirada dos veces porque no la hemos vuelto a ver. Evidentemente, tendríamos los meses de junio, julio —agosto no lo voy a contar—, septiembre, octubre, noviembre. Senador Díez, casi cinco meses para elaborar un texto de común acuerdo. Yo, sinceramente, no entiendo qué entiende usted por consenso y por acuerdo. Porque aquí, lo único que usted hace, aparte de enviar al Congreso de los Diputados una muy buena hipoteca parlamentaria, es decir: Éste es nuestro texto y si ustedes están de acuerdo, vótenlo. Muy bonita manera de entender su señoría el consenso. Si esta proposición de ley, señorías, va al Congreso de los Diputados, no se aprueba; y ustedes lo saben porque la Legislatura va a terminar.

Por tanto, esta bellísima iniciativa, que, con la aportación de todos los grupos parlamentarios, seguro que habríamos hecho un magnífico trabajo tiempo atrás para el Congreso de los Diputados y se podría haber aprobado en condiciones y, sobre todo, en tiempo real, se queda en un mero brindis al sol, Senador Díez.

Si a usted no le importan las expectativas y la ilusión que genera en las familias de los presos españoles que están en el extranjero, al Grupo Parlamentario Popular sí, y, por tanto, vamos a votar en contra.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senadora Vindel.

Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Díez.

El señor DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Vindel, tiene usted muy mala memoria, la cual debiera refrescar.

Si el Grupo Parlamentario Socialista retiró en su momento en el Pleno de mayo, al que usted se refiere, la iniciativa, fue, precisamente, a propuesta suya, tratando de buscar un acuerdo, el cual debiera proceder de esos escaños porque la proposición estaba aquí. Hay un texto que usted ha ido diseccionando, artículo por artículo, y parecía la disección del debate. A mí me estaba alegrando porque esperaba que supondría, y supone, el debate parlamentario de una proposición de ley. Es decir, la presentación de enmiendas, su discusión, incluso de una enmienda a la totalidad, que cabe, como su señoría conoce perfectamente, en el debate de una proposición de ley y, en definitiva, tratar de resolver entre todos los grupos parlamentarios, un problema que existe y que usted no ha negado.

Ha entrado a diseccionar un texto, y el Grupo Parlamentario Socialista todavía está esperando, desde hace bastantes meses, a propuesta de su señoría, la aportación de un texto alternativo por parte del Grupo Parlamentario Popular. Usted lo ha llamado hipoteca; todas las leyes tienen una cierta hipoteca, obligan hipotecariamente al Gobierno. Se refería usted a que no se ha cumplido el artículo 108 del Reglamento. Este grupo parlamentario no tiene ninguna responsabilidad. Esta proposición de ley ha sido

calificada por la Mesa de la Cámara y ha entrado reglamentariamente en el debate parlamentario que en este momento estamos realizando. En el pasado período de sesiones lo hemos presentado en dos Plenos, y el Grupo Parlamentario Popular no ha presentado ningún texto alternativo, porque la realidad es que no tiene voluntad de que se discuta este asunto. Usted decía, y es una ironía, que con esta proposición de ley vamos a procurar que los ciudadanos españoles detenidos privados de libertad fuera de España vayan a tener mayores derechos que los ciudadanos españoles detenidos o privados de libertad en España. Es una cierta ironía, porque usted conoce perfectamente la circunstancia difícil de la mayoría de los ciudadanos españoles que están en prisión fuera de España. Es más, lo que garantizamos en esta proposición de ley es que nuestra Administración, nuestro Servicio Exterior fuera de España tenga mayores obligaciones legales, que en este momento únicamente las tiene por vía de reglamento interior del Ministerio de Asuntos Exteriores, como pueden ser las circulares interiores de dicho ministerio. En definitiva, hay vacíos legales en la Ley General Penitenciaria, en el Reglamento Penitenciario. No es casual que ni en la Ley General Penitenciaria que es del año 1979 ni en el Reglamento que la desarrolla no se haga referencia alguna a la situación de ciudadanos españoles trasladados desde otros países para cumplir condenas en España.

Hay otra serie de circunstancias que están en el articulado que podemos discutir en cuanto este texto vaya al Congreso de los Diputados, que se puede recuperar perfectamente en la próxima legislatura y discutirse, y le he puesto un ejemplo: la proposición de ley que *Convergència i Unió* presentó recientemente y que va a ser motivo de importante debate en el próximo Pleno de esta Cámara. Éste es el sentido de esta proposición, no es un sentido de brindis al sol, señoría, ni muchísimo menos, es el sentido de una realidad, de un problema que tenemos y al que debemos dar alternativas posibles a través de una Administración, a través de un Servicio Exterior de España que quiere además más competencias, y usted lo conoce perfectamente, quiere tener esas competencias para cumplir mejor sus obligaciones.

Me ha parecido un sarcasmo, y me gustaría que lo retirase, que diga su señoría que nuestras Oficinas Consulares se van a convertir en servicios de atención a los presos españoles en el exterior. No es ésa la pretensión, ni mucho menos, porque, además, una de las obligaciones de las Oficinas Consulares españolas fuera de España es precisamente atender las circunstancias de necesidad de los nacionales fuera de España, circunstancias de necesidad que van por todos los sitios, también a los nacionales que están en prisión. Y su señoría sabe que en muchos casos se atienden fuera de reglamento, fuera de norma, y hace falta que la norma esté establecida.

Y si le decía que los días 15, 16 y 17 de este mes, el Consejo General de la Emigración, que representa a ese millón y medio de residentes españoles fuera de España, se reúne en Madrid y aprueba por unanimidad una resolución que solicita a los poderes públicos una regulación adecuada de este problema, no es ninguna casualidad, porque

nuestros residentes y los representantes del Consejo de la Emigración fuera de España tienen también que suplir a veces deficiencias de nuestra propia Administración y atender no solamente a los ciudadanos españoles privados de libertad fuera de España sino también y fundamentalmente a sus familias, porque es un problema de doble sentido: el problema del ciudadano o de la ciudadana que se encuentra en prisión fuera de España y el problema de las casi 1.500 familias de ciudadanos españoles que están precisamente acusando la deficiencia de un Servicio Exterior que en ocasiones no tiene las competencias debidas para resolver y dar sentido a algo tan elemental como, por ejemplo, hacer llegar un paquete o unas gafas a un ciudadano que está en prisión y las necesita.

Señoría, creo sinceramente que usted en el fondo está de acuerdo con la proposición. Otra cosa son las directrices que ha recibido del Gobierno. Sabemos que al Gobierno no le gusta en modo alguno esta proposición de ley. Usted tiene que hacer su papel, pero sabe perfectamente que el sentido reglamentario de una proposición de ley no es otro que abrir un debate, buscar un consenso por el procedimiento que las Cámaras se han otorgado; la presentación de enmiendas, incluso a la totalidad o de textos alternativos. La realidad es que si en el debate del mes de mayo su señoría abundó y ofertó un consenso en torno a esta proposición y a este texto, mi Grupo y otros grupos parlamentarios hemos estado esperando, quizás en vano, que ese texto llegara, así como esa voluntad política, que a veces se traduce por las palabras, cosa que no ha ocurrido.

Este brindis al sol, como su señoría lo ha llamado, se necesita en este momento, hay muchos ciudadanos y ciudadanas españolas que están esperando una actuación real de las Cortes Generales para cubrir lagunas que no están suficientemente resueltas en la legislación española, y ya no hablo de la Ley General Penitenciaria y el Reglamento que la desarrolla, sino de otros ámbitos a los que nuestro Servicio Exterior está pidiendo aquellas herramientas, aquellos mecanismos que permitan atender mejor a ciudadanos que necesitan de esa atención.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.— La señora Vindel López pide la palabra.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Díez.

Senadora Vindel, ¿en concepto de qué quiere intervenir?

La señora VINDEL LÓPEZ: Por el artículo 87 del Reglamento. Además, creo entender que hay dos turnos a favor y dos en contra.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Sí, pero tienen que ser de grupos diferentes. En cualquier caso, tiene la palabra por el artículo 87.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir con brevedad. Senador Díez, siento muchísimo que le haya molestado que haya leído su texto y que lo califique como un mal texto, porque lo es. Un texto que puede ser tachado de inconstitucional, que se olvida del principio de territorialidad y que lo único que hace es aprobar una ley en papel mojado, realmente no merece la pena.

Dice usted que a mí me gusta ese texto y al Gobierno no. No nos gusta a nadie porque es muy malo. Señoría, como le he dicho al comienzo de mi intervención, su intención es muy loable y digna de mérito, aplauso y aprecio. Y si usted quiere que además le ponga una medalla, se la pongo.

Senador Díez, ¡qué más da! Pero vamos a ser serios. No juguemos con el calendario. No juguemos con la buena voluntad y las buenas intenciones de la gente, y no me venga diciendo a dos semanas de acabar una legislatura que hay muchísimos ciudadanos que están esperando esto porque lo llevan haciendo ya mucho tiempo, y usted lo ha reconocido en la tribuna.

No sé si usted habrá pensado, por no pertenecer al Grupo mayoritario de la Cámara, que éramos nosotros los que debíamos adoptar esta iniciativa. Pero, Senador Díez, ¡es que en el Grupo Popular no nos hacen falta medallas! He estado esperándole en mi despacho desde el mes de mayo, lo mismo que el resto de los portavoces. Es más, incluso hemos comentado entre nosotros: ¡Qué extraño que el Senador Díez, con el empeño que tiene en este tema, no nos haya convocado a una reunión! Porque estábamos muy dispuestos a trabajar y, como le he dicho antes, a conseguir un buen texto. Y a lo mejor habríamos llegado a tiempo.

Comprendo que su Grupo no haya podido operar conforme establece el artículo 108 del Reglamento. Está claro. ¿Cómo van a presentar una Memoria explicativa si ni siquiera saben ustedes las cantidades que se pueden asignar porque dejan ese tema como un concepto jurídico en blanco? Por tanto, no le eche la culpa a la Mesa. La culpa es suya.

Entiendo, señor Presidente, que este segundo turno tiene por objeto convencernos de que votemos a favor, pero tras la intervención del Senador Díez no nos queda más remedio que reafirmarnos en nuestra postura.

Para finalizar, Senador Díez, siento decirle que al presentar una proposición de ley a tan solo dos semanas de que finalice esta legislatura usted no ha hecho un papel, sino un «papelón».

Muchas gracias. (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senadora Vindel.

Senador Díez, ¿desea intervenir en este momento? (*Pausa.*)

Entonces, abrimos turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente.

Quiero expresar el acuerdo de nuestro Grupo —el mío en este caso, porque en estos momentos me encuentro solo— con esta proposición de ley por considerar que es oportuna, que es el momento de presentarla. E independientemente de la dialéctica que se utilice en esta Cámara, creo que éste es un tema de razones. Por tanto, si la toma en consideración de una proposición de ley se considera positiva, de pertenecer al Grupo mayoritario de esta Cámara yo no perdería ni un minuto y correría a estudiar qué introducir con el fin de mejorarla. Ni más ni menos. Y los rifirrafes deben estar al margen del tema de fondo, que consiste en qué hacer para proteger, defender y favorecer a los presos y sus familias, a los ciudadanos españoles que se encuentran en el extranjero en esas condiciones.

Insisto, hay que emplear la dialéctica con razones y no para hacer un brindis al sol negando lo que es evidente: la oportunidad de esta proposición de ley. Así pues, vaya por delante nuestro voto a favor.

Gracias. (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cámara.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Caballero.

El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.

Desde el escaño anuncio nuestro voto favorable a esta proposición de ley que presenta el Grupo Socialista para la asistencia y amparo de los españoles privados de libertad en el extranjero.

En anteriores intervenciones a propósito de este asunto nuestro Grupo ha manifestado el deseo y la necesidad de regular esta materia desde el consenso, dada la trascendencia de este asunto y su contenido. Sin embargo, parece obvio que en la presente sesión y en esta legislatura no va a ser posible que prospere esta proposición, a pesar de que aparentemente estamos todos de acuerdo en su necesidad e importancia.

Sirva, pues, nuestro voto favorable, no sólo como lógica continuidad de nuestro criterio, sino también como recordatorio y toma de posición para una futura legislación que habrá de llegar, toda vez que estamos hablando de la protección de los derechos y libertades de ciudadanos de nuestro país, que deben ser protegidos en todo tiempo y lugar conforme a los principios contenidos en el Título I de la Constitución, que definen nuestra común concepción del hombre y de sus intrínsecos valores.

Muchas gracias. (*Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Caballero.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Carrera.

El señor CARRERA I COMES: Senyor President, senyories. En esta iniciativa también tengo mis dudas sobre

qué utilidad va a tener si la toma en consideración de esta proposición de ley fuera aprobada cuando estamos al final de la legislatura, y este interrogante va a ser, más que mi hilo conductor, el que me lleve a la posición final de nuestro grupo.

Como digo, no sé cuál podría ser la utilidad, tampoco para qué va a servir el debate de esta iniciativa, cuando ya lo tuvimos en el mes de marzo, que fue cuando lo presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Entonces hubo consenso general de todos los grupos para retirarla e intentar presentar un texto conjunto, es decir, una proposición de ley avalada por los cinco grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, e incluso este Senador terminaba su intervención diciendo que también su grupo se sumaba al seguimiento y control para que se acotara a un tiempo prudencial lo que podría ser el debate posterior. Efectivamente este tiempo prudencial, por lo que sea, no se ha producido.

Así estamos. El nuevo texto no ha llegado. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista, aunque sea de una manera testimonial, ha tomado la decisión de presentarla de nuevo con el mismo texto anterior.

Señorías, les digo que aunque desconozco el camino final y su utilidad, que lo veo con todas las nebulosas del mundo dado que no se ha avanzado en un nuevo texto, y como sea que la toma en consideración permitiría en sus trámites posteriores —eso es cierto—, si los hubiera, la incorporación de todas las aportaciones del resto de los grupos, tampoco pasaría nada si prosperase esta iniciativa aunque fuera, como decía antes, como posición testimonial. Éstas eran un poco mis reflexiones, aunque luego al final la votación no sé si va a ser del agrado de sus señorías.

Pero realmente es así: si estamos en este punto; si se produjo el debate; si, además, al ser una toma en consideración permite todas las aportaciones posibles de los grupos que puedan intervenir, tampoco, repito, pasaría nada si prosperara y siguiera su camino esta proposición.

¿Por qué digo esto? Porque sin entrar en el texto ni en el contenido de los 46 artículos —como ha hecho la Senadora Vindel con conocimiento de causa— ni tampoco en las disposiciones adicionales y finales, nuestro grupo dice que la exposición de motivos contiene consideraciones que compartimos. Además me pareció que, además, hay informes totalmente contradictorios a este texto y, por lo tanto, deberían tenerse en cuenta. Pero lo que es la exposición de motivos, por tanto, la filosofía de lo que es la propia ley, nuestro Grupo la comparte. Así en la misma se dice: «El artículo 25.2 de la Constitución reconoce que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, a la vez que concede determinados derechos fundamentales a los condenados. En virtud de tales principios fue redactada la normativa vigente en materia penitenciaria.» «No obstante —continúa—, dicha normativa no regula la singular situación de los nacionales privados de libertad en el extranjero. El aumento progresivo de los mismos, urge a la necesidad de la presente ley para que los referidos principios constitucionales y legales se extiendan a dicho co-

lectivo de afectados de manera que los poderes públicos españoles y sus representaciones diplomáticas u oficinas consulares les asistan y amparen» —voy haciendo un paréntesis de este propio texto inicial—. «Los servicios regulados en la presente Ley se llevarán a cabo atendiendo al principio de individualización científica en la ejecución del tratamiento penitenciario de tal manera que se produzca una atención individualizada para cada recluso...» —creo que en esto estamos todos de acuerdo—. Sigo: «Principio inspirador del cumplimiento de la asistencia y amparo penitenciario regulados en la presente Ley será la consideración de que el detenido o condenado es sujeto de derecho y no se halla excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma, siendo acentuada dicha consideración ante la particular situación de los detenidos y presos y en países extranjeros.» Compartimos todo esto, y estoy convencido de que también lo hace el resto de la Cámara.

«Por todo ello, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad en el entorno habitual del recluso, por lo que las autoridades competentes procurarán reducir al máximo los efectos nocivos de la detención o el internamiento en países extranjeros, favoreciendo y fortaleciendo los vínculos entre los detenidos o reclusos con sus familias y las comunidades de donde proceden...» Va hilvanando todo esto un hilo conductor, que se basa en la reflexión que yo hacía llegar a sus señorías en cuanto a la posición, por lo menos en lo que se refiere a este texto, antes de llegar al articulado. Y continúo, pero ya voy llegando al final, señor Presidente. «... el contenido de la presente Ley debe ser una adaptación de la normativa actualmente vigente para el interior a las particulares circunstancias de una asistencia y amparo en territorio extranjero, siempre teniendo en cuenta la soberanía de dicho territorio. En consecuencia, esta norma supone una respetuosa intervención de las autoridades españolas en su cometido, sin menoscabo alguno...» (*El señor Carrera i Comes hace una pausa para beber agua.*) Perdón; si me permiten el inciso les diré que ésta es la repercusión emocional de otras situaciones vividas esta mañana fuera de este hemiciclo. (*Aplausos y risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Somos conocedores de esa situación, Senador Carrera. Le felicitamos. (*Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor CARRERA I COMES: Muchas gracias.

Sigamos, por favor, señorías. Perdonen el paréntesis cuando estamos hablando de un asunto que sigo remarcando que es de suma importancia.

«En consecuencia, esta norma supone una respetuosa intervención de las autoridades españolas en su cometido, sin menoscabo alguno de la jurisdicción territorial y del respeto de las normas propias de cada país.

En definitiva, la presente Ley tiende a garantizar los derechos constitucionales y legales de los nacionales privados de libertad en el extranjero, que coinciden con sus derechos humanos fundamentales.»

Todo encaja en un sentido que deberíamos compartir todos. A lo mejor algunas de sus señorías me van a decir, cuando manifieste el sentido de nuestra votación, que tampoco entienden; pero esta actividad parlamentaria también pasa por aquí.

Ésta es la situación final en la que estamos. Repito que a nuestro Grupo le parece asumible —y lo es— la exposición de motivos o introducción, y pienso que también lo es para el resto. No sé en cuanto al articulado, pero sí en cuanto a la exposición de motivos. Por el debate se ve que hay opiniones e informes que no están muy de acuerdo con el articulado. Conforme. No obstante, la tramitación posterior —repito— podría haberse mejorado sin duda. Lo que pasa es que creo que no hay tiempo para más, Senador Díez. Estamos fuera del calendario. Me duele, pero es así. Estamos en un debate que continúo considerando importante, pero estamos fuera de tiempo. No da para más y, por tanto, esta iniciativa no va a avanzar. Y en este caso no tanto por la propia oposición frontal —digamos— desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular: es que no hay calendario. Estamos aquí parados y, por lo tanto, esta iniciativa no va prosperar en ninguno de los sentidos.

Lo lamento, pero le adelanto que nos vamos a abstener.

Muchas gracias. (*Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Moltes gràcies.

No sé si los aplausos corresponden a la felicitación de la Cámara por la parte que le corresponde o por la intervención. En cualquier caso: moltes gràcies, Senador Carrera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Díez.

El señor DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Ante todo, quiero agradecer la posición que los grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra —el entusiasmo del Grupo Mixto, y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ambos a través de sus respectivos portavoces— han expresado ante esta iniciativa y, por qué no decirlo, también quiero dar las gracias al Senador Carrera porque, en el fondo, apoyan nuestra iniciativa, a pesar de la abstención, y es que entendemos que a veces algunas hipotecas de las que aquí han sido citadas —y no por mí precisamente, sino por el Grupo Parlamentario Popular— llevan a estas situaciones que, siendo excesivamente generoso, pueden ser calificadas como paradójicas, aunque se podría decir otra cosa.

No es comprensible que esta situación se produzca al final de la legislatura en una Cámara de adultos, de Senadores que conocen perfectamente el Reglamento y lo que es una proposición de ley, susceptible de ser enmendada en un trámite de Ponencia, Comisión y Pleno en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, en el Senado, porque lo que estamos pidiendo en este momento es una voluntad política para que en la próxima legislatura podamos abordar un texto entre todos, el que sea.

Quizá el ejemplo más palmario sea la reforma de la Ley de Extranjería a través de una iniciativa precisamente de su Grupo Parlamentario, de *Convergència i Unió*, que hicieron suya otros grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que estuvieron enmendando y que va a llegar dentro de dos semanas a esta Cámara. Se trata de una iniciativa loable que va a resolver un problema importante de muchos ciudadanos que están residiendo en España o que van a llegar a nuestro país.

Ese procedimiento es el que quizá vaya a cercenar el Grupo Parlamentario Popular con la votación siguiente, y es ese procedimiento el que nosotros estamos pidiendo.

Señora Vindel, es un texto modesto. No voy a utilizar términos displicentes, como su señoría ha hecho desde el escaño. Aquí no hay ninguna intención de colgarse medallas, ni mucho menos. Aquí hay una intención política para asumir en un debate político, en una Cámara parlamentaria, un problema que queremos abordar, si se quiere, con la entidad que los grupos parlamentarios han expresado antes; si se quiere, con la entidad de la exposición de motivos con la que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* esté absolutamente de acuerdo.

Su señoría no tiene razón en algunas consideraciones que ha hecho sobre algunos artículos de la proposición, pero no quiero entrar en ese debate, porque no es el debate de este momento, sino aceptar o no que queramos discutir sobre un problema. Ésa es la cuestión, y el Grupo Socialista plantea un articulado que asume y trata de resolver ese problema, y aquí está claro que hay unos grupos parlamentarios que quieren debatir sobre ese problema y hay un grupo parlamentario que no quiere hacerlo.

Y a usted, que ha hablado de hipotecas, le recuerdo, aunque usted se ha sonreído antes, que la verdadera hipoteca que tienen ustedes es la de un Gobierno que no quiere asumir ese problema. Ésa es la impresión que tengo por el conocimiento que poseo de las posiciones del Gobierno en relación con esta cuestión. Ésa es la realidad de una votación que es política.

Estamos aquí para resolver problemas desde la política, no de entrar en el tiquismiquis de que este artículo falta o sobra. Tenemos la oportunidad de hacerlo posteriormente. Aquí lo que estamos pidiendo es una voluntad política a la Cámara, y la Cámara tendrá que expresar con los votos cuál es su voluntad política para resolver un problema.

Señorías, muchas gracias a los grupos parlamentarios que van a apoyar esta proposición, y gracias también al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de *Convergència i Unió* porque, implícitamente —entendiendo la dificultad que tienen para apoyar esta iniciativa— apoyan el fondo del debate que estamos planteando.

Nada más, señorías. (*Pausa.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Díez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervendré con toda brevedad porque me da la sensación de que el asunto está más que debatido.

Tiene razón el Senador Díez cuando dice que estamos aquí para resolver problemas.

Tiene toda la razón. Es cierto. Lo que no sé es si además estamos para crearlos; pero si lo estamos, mi grupo, desde luego, no va a contribuir a ello ni siquiera medio minuto. Y es que, realmente, no entiendo absolutamente nada cuando a una Cámara de adultos —como ha dicho el Senador Díez— se le plantea, a dos semanas del cierre de una legislatura, nada más y nada menos que una proposición de ley que trata de aprobar derechos fundamentales de los ciudadanos españoles presos en el extranjero. Menos mal que su señoría ha reconocido que aquí no ha habido ningún consenso, y que lo único que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista es un planteamiento a través de esta proposición de ley.

Yo creía que las voluntades políticas se expresaban en esta Cámara vía mociones, vía declaración institucional suscritas por todos, insisto, suscritas por todos.

Señor Presidente, señorías, a nada que se hubiera empeñado el Senador Díez, puesto que él tomó la primera iniciativa, podíamos haber hecho un buen trabajo; podíamos haber hecho un trabajo extraordinario enriquecido por las aportaciones de los cinco grupos parlamentarios. Sinceramente, he de lamentar que se haya preferido no intentarlo y hacer pasar una proposición de ley por un consenso cuando en realidad se trata de un trágala. No se entra en el detalle porque no se tiene capacidad para rebatir lo que yo he dicho.

Pero déjenme que les diga lo último. El Grupo Parlamentario Popular, insisto, no va a consentir que se defrauden expectativas, anhelos e ilusiones de muchas familias. Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senadora Vindel.

Terminado el debate, vamos a proceder a la votación de la proposición de ley.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 94; en contra, 115; abstenciones, ocho.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Por consiguiente, queda rechazada la toma en consideración de esta proposición.

— PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO) (622/000018).

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición de ley de modificación del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

No se ha presentado ninguna enmienda alternativa.

Para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Cámara. *(Pausa.)*

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, estaba esperando a ver si se marchaba la gente pero todavía queda bastante. Se me acaba de ocurrir algo, y es que empiezo a tener más éxito que mi amigo Julio Anguita en aquella ocasión en que defendió el tema de las 35 horas, porque —si no recuerdo mal— hubo unas catorce personas. *(Un señor Senador pronuncia palabras que no se perciben.)* Sí, faltó mucha gente y precisamente de los grupos mayoritarios.

Tengo la impresión de que esta iniciativa que presento —insisto impresión— es bastante testimonial. Pero creo que de vez en cuando hay que hacer algún gesto testimonial, entre otras cosas porque la política también es proponer ideas, aunque sea a través de aspectos tan sencillos como es la reducción del IVA —detrás se esconden más concepciones sobre la vida y las cosas—, y, por tanto, a mí no me supone ningún problema salir aquí en su defensa; y lo hago aun sabiendo que nadie ha venido a verme, que es uno de los gestos fundamentales por los que uno ya sabe si le van a apoyar o no en la aprobación final: si nadie te viene a ver, estás solo en la votación. Pero, a pesar de ello, creo que es conveniente defender ideas y posiciones independientemente de que las voten o no, porque queda constancia de ello; por lo tanto, me voy a limitar a defenderlas.

Como soy una persona muy animosa, espero conseguir el máximo de adhesión, e incluso la de aquellos grupos que todavía no lo tienen muy claro. La proposición de ley que presento pretende favorecer el transporte colectivo y propone disminuir tendencialmente o congelar los precios del mismo, y esto se hace en un momento en el que los empresarios... *(Rumores.)* ¿Puedo seguir? Señorías, se puede hablar, pero más bajito.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador, tiene usted parte de razón, pero le agradecería que me dejase ordenar el debate.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Lo siento, señor Presidente. Yo soy así, tengo un pronto muy fuerte. Pero comprenda que si están hablando en voz alta yo me despisto, y no quiero que me despiste nadie. Así que ruego, señor Presidente, que llame al orden.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador Cámara, puede continuar con el turno a favor en la defensa de la proposición de ley.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Decía que es un momento en el que los empresarios anuncian subidas en el transporte colectivo de viajeros.

Pero, además, es una pequeña aportación a la redistribución de la riqueza —por cierto, finalidad del sistema fiscal— defender lo público y colectivo por encima de lo pri-

vado. A fin de cuentas, es una medida de discriminación positiva frente al uso del vehículo privado, como se verá por la argumentación que luego haré.

Aunque indirectamente, esta proposición de ley también colaboraría con la necesidad de cuidar el medio ambiente, en una tendencia que tarde o temprano se impondrá, como es el uso del transporte colectivo por encima del privado; por tanto, haciendo una discriminación positiva del transporte colectivo por encima del transporte privado.

Quiero recordarles, para cuando luego me contesten sobre esta Proposición, que en Europa existen IVAs reducidos para el transporte público colectivo, desde luego por debajo del 7 por ciento, en varios países: en Bélgica, está en el 6 por ciento; en Francia, en el 5,5 por ciento; en Irlanda, está exento de IVA; en Italia, está exento el transporte municipal colectivo; en Luxemburgo, está en el 3 por ciento; y, en Portugal, en el 5 por ciento.

En el debate que tuvo lugar en su momento sobre la proposición y el proyecto de ley que modificó la Ley de 1992, de 28 de diciembre, ya entonces se veía la conveniencia de suprimir cualquier diferencia o discriminación entre las distintas clases de transporte de viajeros y, en especial —según las observaciones indicadas por la Comisión de la Unión Europea—, entre los transportes de igual naturaleza; también se decía que había que determinar la necesidad de cumplimentar lo antes posible las previsiones contenidas en la disposición transitoria undécima de la ley del impuesto derogado, para que a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, todos los transportes de viajeros —sean terrestres, marítimos o aéreos— tributen al mismo tipo impositivo, el reducido del 7 por ciento. Cuando se pasó del 16 al 7 por ciento, se dijo que esa medida además impulsaría necesariamente la rebaja del precio de utilización de las autopistas, con el consiguiente efecto económico favorable para el desarrollo de nuestra economía y también que más allá de los transportes de viajeros y sus equipajes del Anexo H de la Sexta Directiva que comprende las operaciones que puedan disfrutar de tipos reducidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que se ligaba al tema del peaje.

Alguna de las razones utópicas o idealistas por las que presento esta proposición de ley es que el transporte público de viajeros tiene, en mi opinión, comparado con el individual una serie de ventajas fáciles de enumerar: ahorro energético y menor contaminación ambiental; una mayor eficiencia económica frente a un despilfarro de recursos; menor uso del espacio, es decir, del territorio, etcétera. Esas ventajas tienen una correspondencia en la legislación y en el ordenamiento urbano y territorial. El transporte, la movilidad, supone una de las causas de gasto de energía, generalmente de procedencia fósil e importada, lo que explica parcialmente —sólo parcialmente— que dado el nivel de desarrollo económico de nuestro país se gaste proporcionalmente más energía por unidad de producto que en otros. La consecuencia principal, en términos económicos, es que el valor añadido bruto de nuestra economía podría tener un crecimiento mayor si se evitase la práctica común de utilizar transportes individuales o privados y, además, hay que tener en cuenta el efecto contaminante de

esas prácticas, que redundan en perjuicio del bienestar general y, por tanto, también en la economía. Últimamente, en determinados núcleos urbanos la densidad del ozono ha llegado a ser sumamente preocupante; sólo en Madrid —según la asociación Ecologistas en Acción— desde el pasado 14 de julio de 1999 se ha superado el valor de 180 microgramos por metro cúbico de ozono en 69 ocasiones, mientras que en 1991 se superó en 48. En Cataluña, por ejemplo, se han registrado 31 episodios en períodos estivales. Coyunturalmente, en 1999 el alza del petróleo ha sido vertiginosa hasta el punto de que el Ejecutivo se escuda en ella para justificar que se supere el crecimiento previsto de los precios de este año.

Otra explicación añadida es la pretensión del Gobierno del Partido Popular de dibujar un modelo fiscal cada vez más regresivo que no tenga en cuenta la capacidad económica y que descansa en la imposición indirecta en función del consumo. Ello implica que el Estado obtiene una parte creciente de sus ingresos de los impuestos indirectos afectos al consumo de energía vía IVA o impuestos especiales.

Esta política tiene varias consecuencias. Si hay tensiones inflacionistas, el Gobierno tiene como elemento prioritario el precio, que es el que se computa a efectos de medir el índice de precios sobre la eficiencia, que se mediría por la cantidad usada de un bien. Así, se puede dar la paradoja aparente de que el Gobierno busque una reducción de precios y favorezca un aumento del consumo energético, de ingresos fiscales indirectos y de los beneficios de empresas oligopolistas.

Por lo tanto, desde una visión diferente y desde esquemas que defiendan un desarrollo sostenible, se debería buscar una estrategia que aunara planos ecológicos, fiscales, progresistas y de bienestar social y económico. Desde el plano ecológico, la respuesta sería la reducción del consumo de energías fósiles; desde el fiscal, entrando en el detalle de la imposición indirecta, utilizando la versatilidad de los tipos diferentes de IVA de forma discriminatoria para mejorar la distribución de la renta disponible y los impuestos especiales para realizar una política de demanda en sectores o bienes acordes con ese propósito.

En este último apartado fiscal ya ha habido demandas sociales bastante elaboradas; por ejemplo, la Confederación de asociaciones de vecinos consumidores y usuarios de España, en su propuesta vecinal prioritaria, reclama la aplicación del IVA reducido del 4 por ciento en todos los suministros domésticos: agua, gas, electricidad, teléfono, vivienda pública, transportes. Por supuesto sólo me refiero al transporte, el coste sería muy importante.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Senador Cámara, ha transcurrido su tiempo. Le recuerdo que le queda todavía un turno de portavoces de diez minutos.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Voy terminando, señor Presidente.

También está enmarcada en la carta ciudadana suscrita entre otros por Izquierda Unida y PSOE antes de la celebración de las últimas elecciones locales, dada la apuesta que se hace por unos ciudadanos de un consumo sostenible

crítico y racional. Por si fuera poco, esta propuesta está avalada por la Sexta Directiva 77/388 de la CEE del año 1977 y en la Exposición de Motivos de la reforma parcial del IVA realizada en el año 1997 con motivo de reducir la imposición a los peajes de autopistas, como antes he mencionado.

Además, desde el punto de vista de la armonización fiscal europea, la media impositiva de los países miembros de la CEE es del 5,2 por ciento, por lo que es razonable la reducción del actual 7 por ciento al superreducido del 4 por ciento, una discriminación positiva hacia prácticas más sostenibles.

La medida de reducir el tipo de IVA del transporte de viajeros tendría otros efectos económicos, entre ellos posibilitar una reducción o una congelación de las tarifas en esos servicios de transporte colectivo que tienen que soportar un aumento de los precios de la energía que consumen. Ello no impediría al Gobierno realizar las acciones precisas para una mejora de la concurrencia y la disminución de los beneficios extraordinarios de empresas oligopolistas.

La posible tendencia —y termino— en la desviación del tráfico terrestre desde el uso privado al colectivo sería beneficiosa para todos, para los usuarios de dichas medidas y para la economía en general y, por lo tanto, también para la sociedad. Yo abogo por un IVA reducido en el transporte colectivo como medida discriminatoria para favorecer el transporte colectivo por encima del uso privado.

La propuesta de enmienda significa que se mantiene el 7 por ciento de IVA para el peaje y otras cuestiones y un IVA superreducido para el transporte colectivo de viajeros.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cámara.

¿Turno en contra? En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo con suma brevedad para manifestar nuestra posición, efectivamente contraria a esta enmienda. Hemos asistido a un discurso ciertamente vehemente sobre la política de transportes, favorable al transporte colectivo y contrario al transporte individual de viajeros, por motivos la mayoría muy loables, pero quizá poco receptivo al hecho de que la política de transportes es muy compleja, y un único instrumento como el fiscal no permite, ni mucho menos, la solución, ni tampoco las propuestas que aquí se han formulado.

Se nos ha hecho un discurso casi de sociología política, de utopía idealista, y efectivamente hay falta de realismo al traernos la toma en consideración de una proposición de ley a estas alturas de la legislatura, cuando sabemos que es de imposible tramitación, y sobre una cuestión a la que somos ciertamente receptivos, somos sensibles, pero también con una argumentación muy endeble.

Se nos dice en la exposición de motivos —que, por cierto, procede de la justificación de la enmienda que el

Grupo de Izquierda Unida ha presentado en el Congreso de los Diputados, donde ha sido ya rechazada— que el Gobierno está implicado en una política fiscal regresiva y que, consecuencia de ello, y para conseguir una política o un crecimiento sostenible, la solución es adoptar medidas fiscales, concretamente reducciones impositivas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Nosotros nos alegramos de que sea así, de que desde Izquierda Unida o desde cualquier otro grupo parlamentario se propongan reducciones fiscales allí donde sean necesarias, pero entendemos que esta medida por sí sola no contribuye al transporte colectivo, y sí otras que el Gobierno ha venido adoptando durante esta legislatura, como han sido la reducción de peajes, la reducción fiscal para que los contribuyentes dispongan de rentas para el transporte colectivo, individual, o cualquier otro, sabiendo que para nosotros sigue siendo un objetivo político primar el transporte colectivo.

En definitiva, entendemos que esta propuesta con sus méritos, que los tiene, indudablemente, resulta demasiado limitada para los objetivos que pretende y está fuera de plazo en cuanto a sus posibilidades de tramitación real, por lo que manifestamos nuestra oposición a la misma y, por tanto, votaremos en sentido contrario.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Utrera.

Antes de pasar al turno de portavoces, una cuestión de orden. Transcurridas cinco horas de debate, pido autorización a la Cámara para poder continuar con la sesión. *(Pausa.)* Queda autorizado.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente las políticas de transporte son más complejas. Soy consciente de que esto solo no lo soluciona; es una medida muy parcial y así lo he expresado en la tribuna. Por tanto, no pretendo, lógicamente, solucionar todos los problemas, realmente sería lunático, que no utópico, si pensase de esta manera.

Pero hay una cuestión que voy a responder al Senador del Grupo Parlamentario Popular. Todavía no me ha dado tiempo, pero voy a comprobar si al Senado ha llegado en la Ley de Presupuestos una proposición de su Partido en el Congreso de los Diputados, en la que se solicita el IVA reducido al cuatro por ciento para el sector del mueble de los cuartos de baño. Debe ser por los grifos de Teka o de Roca. Es decir, de vez en cuando ocurren estas cosas; depende del grupo de presión. Yo aquí, inocentemente o no, he expuesto una propuesta avalada y discutida con la CAVE, Confederación de Asociaciones de Vecinos, que efectivamente se expresó también en el Congreso de los Diputados para volverla a presentar en el Senado, y se rechaza.

En cualquier caso, quede claro que el IVA reducido al 4 por ciento está estipulado en un montón de sectores. Ustedes plantean —al menos, en el Congreso de los Diputa-

dos— un IVA reducido, superreducido, del cuatro por ciento para el sector de los muebles de cuarto de baño.

Creo yo que es más útil aplicar IVA reducido al transporte colectivo, fundamentalmente para favorecer a las rentas más bajas y a la cantidad de gente que utiliza ese medio de transporte, en una serie de discriminaciones positivas.

Nada más. No pretendo polemizar. Desde el principio, he dicho que era una apuesta, por mi parte, bastante arriesgada el pretender convencer a esta Cámara sobre esta cuestión, pero, en cualquier caso, mi obligación, utópicamente y de forma idealista —porque así soy, efectivamente—, era defenderlo como mejor he podido, como seguiré defendiendo en el Senado cuantas ideas se me ocurran, aunque sean muy parciales, para mejorar la política o la vida de los ciudadanos.

Nada más. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cámara.

Por el Grupo Parlamentari Catalá al Senat de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.

El señor CAMBRA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Muy brevemente intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo ante este texto de proposición de ley.

Nuestro Grupo votará contrariamente a su toma en consideración y no porque no tengamos sensibilidad por los temas del transporte. Han sido varias las iniciativas que hemos tenido a lo largo de esta Legislatura que han afectado concretamente a las tarifas de los peajes de autopistas, así como otras iniciativas de tipo fiscal respecto a las mismas, pero entendemos que hay dos motivos fundamentales para nuestro voto.

El primero de ellos es el momento en que se trae a esta Cámara esta proposición de Ley al final de la Legislatura. Entendemos que el texto concreto de esta proposición no es un instrumento para abrir un debate sobre la política de transportes, por cuanto que es un texto muy concreto y muy limitado a una medida de tipo fiscal como es la del IVA. Y ahí entra el segundo motivo por el cual vamos a votar en contra, es decir, por coherencia. Es conocido que nosotros estamos prestando apoyo a la política fiscal y presupuestaria del Gobierno y, por tanto, entendemos que una medida fiscal de esas características debería, en cualquier caso, haberse trabajado y consensuado con el Gobierno, al menos, por nuestra parte y en coherencia con nuestra posición. Por tanto, si se hubiera tramitado, como inicialmente se hizo en el Congreso de los Diputados, como enmienda a los Presupuestos o a la Ley de Medidas de Acompañamiento, ante una enmienda de esta envergadura, hubiéramos consensuado nuestra posición con el Gobierno, en coherencia —insisto— con nuestra posición. Y éste es el motivo básico de nuestro voto.

Nada más y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Moltes gràcies, Senador Cambra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Serrano.

El señor SERRANO ÁLVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.

En la exposición de motivos de la proposición de ley que estamos debatiendo expresa el autor, el Senador Cámara, una serie de consideraciones generales con las que nuestro Grupo Parlamentario está fundamentalmente de acuerdo, si bien cabría hacer algunas reflexiones para matizar aquellos conceptos sobre los que se apoya su argumentación.

Es cierto, señorías —nadie puede negarlo—, que el transporte público de viajeros tiene una serie de ventajas indudables si lo comparamos con el individual. Ahorro energético, descongestión del tráfico rodado, menor índice de contaminación ambiental, mayor aprovechamiento del espacio de los recursos económicos son sólo algunos indicadores que todos los expertos atribuyen a este medio de transporte, frente a la masiva utilización del individual. De ahí que todas las administraciones lo hayan tenido en cuenta al adaptar su legislación a fin de incrementarlo y favorecerlo.

Sin embargo, señorías, al margen de las consideraciones ventajosas que hacemos sobre este tipo de transporte, algo más se impone para incentivarlo —es cierto— pues, a pesar de las medidas que se han ido adoptando a lo largo de muchos años para incrementar su uso por las autoridades correspondientes, lo cierto es que todavía queda un largo trecho para que podamos considerar idónea su utilización. Sin compartir radicalmente afirmaciones como las que hace el Senador Cámara sobre la incidencia, en términos economistas, que en el valor añadido bruto podría tener un crecimiento mayor del transporte público frente al individual, pues para ello sería necesario alcanzar unos niveles de uso impensables en estos momentos, estamos de acuerdo en que pequeñas medidas pueden dar lugar a grandes remedios, razón por la que consideramos fundamental que puedan adoptarse disposiciones tendentes a conseguir paliar los efectos negativos que se ponen de manifiesto en la exposición que ha hecho su señoría. ¿Cómo no coincidir con la necesidad de racionalizar el gasto de las energías fósiles? ¿Quién no suscribiría en estos momentos, Senador Cámara, la contención de los precios de los carburantes en nuestro país, mediante una adecuada política antimonopolista? ¿Qué razón podría movernos a menospreciar lo que usted ha dicho sobre la contaminación atmosférica que producen las actividades desarrolladas por el tráfico de vehículos?

Los principios generales, insisto, sobre los que se apoya la motivación de la reforma que se pretende, son tan importantes que nos resulta difícil negar su evidencia, pero es justo reconocer, señorías, que frente a estas reivindicaciones, subsisten una serie de condicionantes que van a determinar nuestra postura en la votación final de la proposición de ley.

En definitiva, lo que se pretende —usted lo ha dicho rápidamente— es, pura y simplemente, modificar el párrafo primero del apartado 2 del número 1 del artículo 91 de la

Ley 37/1992, para aplicar el tipo del 7 por ciento al IVA de las motocicletas y los turismos que transporten viajeros utilicen las autopistas en régimen de concesión y, asimismo —aquí viene la parte importante de su proposición—, llevar al punto 2 del mismo artículo el transporte de viajeros y sus equipajes, de forma que se vean afectados por el tipo superreducido del 4 por ciento en los peajes de las autopistas.

Pero, señorías, en primer lugar, veamos los antecedentes que apoyarían la postura de los proponentes. Pensemos en las ocasiones que la Ley 37/1992 ha sido reformada. Muy pocas. En contadas ocasiones. Justamente porque la materia regulada, el IVA, es tan delicada que aconseja sopesar mucho los cambios para que al tirar de una punta de la red legal que la sustenta, no dejemos al descubierto otras partes de su aplicación. Por eso, respecto al transporte público de viajeros, en concreto, nunca se ha adoptado ningún criterio regulador distinto al que contempla la Ley, porque son muchos los flecos que habría que tocar —y lo han dicho otros portavoces antes que yo— en este asunto y, probablemente, alguno se nos quedaría en el camino de no ejercer una visión global de todos sus aspectos.

Asimismo, no podemos olvidar que la Ley que se pretende modificar está afectada desde el principio hasta el fin por la sexta Directiva de la Comunidad Económica Europea y por las modificaciones subsiguientes sufridas, que son muchas. Esta Directiva es meridianamente clara al concretar, por ejemplo, las exenciones y excluir de ellas expresamente el transporte de viajeros, como lo hace en su artículo 13. Lo mismo ocurre al materializarse las deducciones, en su artículo 17, o los tipos reducidos que pueden aplicarse, en su artículo 28 y en el anexo 8 de esta disposición. Ante esta realidad que impone la norma elaborada por el Consejo Europeo no nos podemos sustraer por más que queramos, so pena de afrontar un procedimiento sancionador por la infracción de la Directiva comunitaria.

Además, tampoco podemos obviar las fechas en las que estamos discutiendo la toma en consideración de esta proposición de ley. Su tramitación ordinaria impide que pueda ser aprobada en este período de sesiones que finaliza y que va a coincidir con el final de la Legislatura. Por este camino no podemos llegar a ninguna parte. Únicamente si el Partido mayoritario de esta Cámara la apoyase, podría llegar a buen puerto y no están por la labor, señoría, aunque antecedentes no les faltarían, pues no hace mucho sus socios parlamentarios han conseguido que ciertos tramos de autopistas de peaje en régimen de concesión vayan a quedar libres para sus usuarios, y otros verán reducida su cuantía para viajeros habituales e, incluso, tendrán descuentos lineales para determinado tipo de vehículos, a pesar de la sexta Directiva.

Señorías, de todas formas, nuestro Grupo no ha visto claro ninguno de estos procedimientos —me estoy refiriendo a estos últimos— y, por mor, de la coherencia, entendiéndola a la que aludía el Senador Cámara, vamos a abstenernos en la votación de esta proposición de ley.

Muchas gracias, señora Presidenta.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Serrano.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Deseo recordar al Senador Cámara, pues se le ha olvidado, que si he hablado de utopía o de idealismo ha sido porque él mismo había utilizado esos términos y en ese sentido me he limitado a recordárselo y, de alguna manera, a ponerle enfrente de la contradicción que supone la falta de realismo de no presentarla en tiempo y forma, para que, realmente, se pueda tramitar.

Aparte de este asunto, Senador Cámara, hay en realidad motivos de fondo.

El Senador Serrano ha hecho una muy buena intervención en la que ha reflejado algunos de esos graves inconvenientes. Entiendo que su Grupo se abstenga en la votación, pero de su intervención, lo que he deducido es que debería de votar en contra de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y lo entiendo así porque el Senador Serrano, del Grupo Parlamentario Socialista, ha incidido en los puntos clave.

Senador Cámara, el IVA superreducido al 4 por ciento se reserva exclusivamente para productos básicos y culturales, se reserva exclusivamente para alimentos, medicamentos, libros y productos de la industria cultural. No es verdad que se haya propuesto una reducción al 4 por ciento de los muebles de cuartos de baño, sino que se ha reducido el tipo impositivo para igualarlo al de las entregas de vivienda, porque hasta ahora teníamos la contradicción de que las entregas de vivienda iban a un tipo, mientras que las entregas de los muebles incorporados a las viviendas iban a otro tipo de Impuesto sobre el Valor Añadido, y eso daba lugar a disparidades de criterio que hacían difícil la gestión de ese concreto artículo, de ese concreto ítem de Tipos Impositivos en el Valor Añadido.

Además, tampoco es cierto que en Europa estén bajando los impuestos de forma tan pronunciada como usted ha señalado sobre el transporte colectivo. En países tan significativos —supongo que reconocerá que lo son— como Alemania, Italia, Austria o Suecia, con un tipo del 12 por ciento sobre el transporte colectivo de viajeros, se están aplicando políticas de transporte bastante eficientes, y eso nos demuestra que no es estrictamente necesario, aunque podría ser conveniente. Y vuelvo a repetir que desde una perspectiva del objetivo de promoción del transporte colectivo su proposición tiene indudables virtudes, sin embargo no podemos en modo alguno creernos —y creo que tampoco debería hacerlo usted, señor Senador— que una política de transporte eficiente, ni siquiera desde un punto de vista parcial, tiene dependencia de medidas exclusivamente fiscales por Impuesto sobre el Valor Añadido. Son muchas otras las consideraciones que hay que adoptar y por esa razón, porque el IVA superreducido tiene que estar reservado para unos capítulos muy concretos y porque se ha hecho un gran esfuerzo durante esta legislatura para

abaratar los peajes sin necesidad de reducir los tipos impositivos de peajes, nos vamos a oponer y vamos a votar en contra de su proposición de ley, agradeciéndole que la haya presentado para su consideración.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Utrera. *(El señor Cámara Fernández pide la palabra.)*

Senador Cámara, ¿por qué concepto pide la palabra?

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Por el artículo 87. ¿Es así, señor Presidente?

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Es así, señoría. Tiene la palabra.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Sólo quiero agradecer el tono y las argumentaciones que, aunque no las comparta, me sirven. Escucho con atención y algunas me parecen ajustadas, aunque no esté de acuerdo. Me alegra también comprobar la pluralidad de todo tipo que se expresa en esta Cámara.

Al Senador Serrano quería ponerle enfrente, iba a decir de su incoherencia, pero en todo caso de su profunda equivocación, porque ha hecho una argumentación final de por qué no se admite esta proposición de ley sobre la base de la argumentación que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular a la anterior proposición de ley: el tiempo, que no hay plazo, que no ha sido consensuada, etcétera. Hay que tener cuidado para no pillarse los dedos y hacer la misma argumentación política de quien realmente está haciendo

lo contrario ante otra proposición, justamente anterior a ésta.

Por último —y termino—, los datos respecto al IVA superreducido en Europa proceden de la Comisión Europea. *(Rumores.)*

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Por favor, silencio, señorías.

El señor CÁMARA FERNÁNDEZ: Estos datos los ha dado el Gobierno del Partido Popular en contestación a una pregunta por escrito de un parlamentario de Izquierda Unida. Por tanto, no he mentido, simplemente he expresado lo que ustedes mismos han notificado a un parlamentario de nuestro Grupo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Cardona i Vila): Muchas gracias, Senador Cámara.

A continuación, sometemos a votación esta proposición de ley.

Se inicia la votación. *(Pausa.)*

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 11; en contra, 114; abstenciones, 76.

Queda rechazada la toma en consideración de esa proposición de ley.

Se levanta la sesión.

Eran las veintidós horas.